¡CIUDADANOS, A LAS URNAS!

Crónicas del mundo actual

THOMAS PIKETTY

siglo veintiuno editores

Índice

Cubierta

Índice

Portada

Copyright

Prefacio a esta edición

Parte I. Europa: Qué hay que aprender de las lecciones del pasado, y por qué los europeos no deberían olvidar cómo salieron de la crisis en la segunda posguerra

¡Ciudadanos, a las urnas!

Del costo exorbitante de ser un país pequeño

2015: ¿qué impactos podrían movilizar a Europa?

Propagar la revolución democrática en el resto de Europa

La doble condena, económica y política, de las clases populares

¿Siempre hay que pagar las deudas?

Por una Europa abierta

Cambiar Europa ahora

2007-2015: la larga recesión de la zona euro

Por un núcleo duro europeo

Acerca de la situación migratoria en Europa

Parte II. Francia: La urgencia de acabar con la hipocresía ante las desigualdades y aplicar soluciones progresistas

La verruga de François Hollande

Otra reforma fallida: los aportes de los trabajadores

La hipocresía francesa de cara al laicismo y la desigualdad

Análisis crítico de un veto: la enmienda Ayrault-Muet y los trabajadores de bajos ingresos

Combatir las desigualdades en Francia y en Europa

Las reformas a la Ley de Trabajo: un gran desaguisado de improvisación y cinismo

Repensar el impuesto al patrimonio

¡Larga vida al populismo!

¿Qué reformas cabe esperar para Francia?

Parte III. El mundo: Por otra globalización

¿El capital en Hong Kong?

El capital según Carlos Fuentes

Salvar los medios de comunicación en la era digital

El capital en Sudáfrica

Frente al terrorismo, no basta con medidas excepcionales de seguridad

Los que contaminan el mundo deben pagar

Capital y desigualdad en la India

El impacto Bernie Sanders

De la desigualdad en América

¿Europa se está volviendo islamofóbica?

La hipocresía europea frente a los paraísos fiscales: LuxLeaks y Panama Papers

Por otra globalización

Capital público, capital privado

Thomas Piketty

¡CIUDADANOS, A LAS URNAS!

Crónicas del mundo actual

Traducción de
María de la Paz Georgiadis
y **Luciano Padilla López**

siglo veintiuno editores

Piketty, Thomas
¡Ciudadanos, a las urnas!: Crónicas del mundo actual.- 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2017.

Libro digital, EPUB.- (Singular)

Archivo Digital: descarga

Traducción de María de la Paz Georgiadis y Luciano Padilla López

ISBN 978-987-629-772-1

1. Globalización. 2. Sociología Económica. I. Georgiadis, Paz, trad. II. Padilla López, Luciano, trad. III. Título

CDD 301

Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme d'aide à la traduction Victoria Ocampo, a bénéficié du soutien de l'Institut français d'Argentine
Este libro, publicado dentro del marco del Programa Victoria Ocampo de Ayuda a la Publicación, cuenta con el apoyo del Institut Français d'Argentine

Título original: *Aux urnes, citoyens! Chroniques 2012-2016*

© 2016, Les Liens qui Libèrent

© 2016 y 2017, Éditions du Seuil, por, respectivamente, "Por otra globalización", y "Larga vida al populismo", "Capital público, capital privado" y "¿Qué reformas cabe esperar para Francia?"

© 2017, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.

<www.sigloxxieditores.com.ar>

Diseño de cubierta: Eugenia Lardiés

Corrección: Azucena Galettini

Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina

Primera edición en formato digital: septiembre de 2017

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

ISBN edición digital (ePub): 978-987-629-772-1

Prefacio a esta edición

Este libro reúne crónicas que mes a mes publiqué en *Libération* (de mayo de 2014 a octubre de 2015) y luego en *Le Monde* (de noviembre de 2015 a mayo de 2017), sin correcciones ni reescrituras.[1] Los textos de algunas envejecieron mejor que los de otras, y no siempre están exentos de repeticiones. Confío en que, pese a todo, el lector indulgente pueda encontrar en estas páginas algunas pistas útiles para sus reflexiones y tomas de partido.

En el otoño europeo de 2016, Francia atravesó intensas jornadas electorales, con no menos de tres primarias (derecha, izquierda, ecologistas); después vinieron los escrutinios presidenciales y legislativos, en 2017. En gran medida, este libro se ocupa de los balances más que exiguos de los quinquenios Sarkozy y Hollande, vislumbrando el inicio del gobierno de Macron, y lo hace más allá del presidencialismo a la francesa, en cuanto sus reflexiones más extensas tratan las cuestiones europeas e internacionales. Después de publicar en 2013 *El capital en el siglo XXI*, tuve oportunidad de visitar varios países –de México a la India, pasando por Sudáfrica, el Brasil, la zona de Medio Oriente o China– para discutir el ascenso de las desigualdades. Gran cantidad de crónicas lisa y llanamente se nutre de esos intercambios con estudiantes, militantes, lectores, autores, actores de la sociedad civil y del mundo económico, cultural y político.

Al igual que en otros países, en Francia el compromiso político no podría resumirse en los comicios. En primer término, la democracia reposa sobre la confrontación permanente de ideas, el rechazo a certidumbres prefabricadas, y la renovada decisión de, sin concesiones, poner en entredicho instancias de poder y de dominación. Las cuestiones económicas no son cuestiones técnicas que deberían quedar libradas a una reducida casta de expertos. Son eminentemente políticas; con relación a ellas, cada cual debe tener discernimiento para formarse su propia opinión, sin dejarse impresionar. No hay leyes económicas: sencillamente existe una

multiplicidad de experiencias históricas y de trayectorias a la vez nacionales y globales, hechas de bifurcaciones imprevistas y de *bricolages* institucionales inestables e imperfectos, en cuyo seno las sociedades humanas eligen e inventan diferentes modos de organización y de regulación de las relaciones de propiedad y de las relaciones sociales.

Estoy convencido de que la democratización del saber económico e histórico y de la investigación en ciencias sociales puede contribuir a cambiar las relaciones de fuerza y a democratizar al conjunto de la sociedad. Siempre hay alternativas: fuera de duda, esa es la primera lección de una perspectiva histórica y política acerca de la economía. Un ejemplo particularmente claro es el de la deuda pública: hoy en día, querrían hacernos creer que los griegos y otros europeos del Sur no tienen otra opción más que volver a pagar enormes excedentes presupuestarios durante décadas, incluso si en los años cincuenta Europa se construyó a partir de la anulación de las deudas del pasado, sobre todo en beneficio de Alemania y de Francia, lo cual permitió invertir en el crecimiento y en el futuro.

Esos intercambios también me alentaron en la idea de que las desigualdades difundidas por el actual capitalismo globalizado y desregulado no tienen mucho que ver con el ideal de mérito y eficacia descripto por quienes son los ganadores en este sistema. Con infinitas variaciones de país en país, la desigualdad moderna combina elementos viejos –hechos de relaciones de dominación brutal y de discriminaciones raciales y sociales– con elementos más nuevos, que a veces desembocan en formas de sacralización de la propiedad privada y de estigmatización de los perdedores aún más extremas que en las etapas de globalización previas. Todo eso se da en un contexto en que los avances del conocimiento y de la tecnología, así como la diversidad y la inventiva de las creaciones culturales, podrían permitir un progreso social sin precedentes. Por desgracia, a falta de una adecuada regulación de las fuerzas económicas y financieras, el ascenso de las desigualdades supone una cruda amenaza: la exacerbación de las crispaciones identitarias y los repliegues nacionales, tanto en los países ricos como en los países pobres y emergentes.

Si intentáramos hacer el balance del período sobre el cual versa este libro, indudablemente el acontecimiento más dramático, aquel que dejó una huella más nítida, es la guerra en Siria y en Irak, sumada a la ebullición en Medio Oriente, que avanza a la vez que –de modo radical y acaso duradero– se pone en entredicho el sistema de fronteras implementado en la

región por los poderes coloniales en ocasión de los acuerdos Sykes-Picot de 1916. Los orígenes de esos conflictos son complejos, lo que simultáneamente implica antiguos antagonismos religiosos e infructuosas trayectorias modernas de construcción del Estado. Sin embargo, resulta muy evidente que las intervenciones occidentales recientes –en especial, al producirse las dos guerras de Irak en 1990-1991 y 2003-2011– desempeñaron un papel decisivo. Si nos situamos en la perspectiva de un –más– largo plazo, es impactante constatar que Medio Oriente –aquí definido como la región que se extiende de Egipto a Irán, pasando por Siria, Irak y la península arábiga; vale decir, alrededor de 300 millones de habitantes– constituye no sólo la región más inestable del mundo, sino en idéntica medida aquella que propicia mayores desigualdades. Si tenemos en cuenta la extrema concentración de los recursos petroleros en territorios sin población (desigualdades territoriales que, por lo demás, residen en el origen del intento de anexión de Kuwait por parte de Irak en 1990), podemos estimar que el 10% de individuos más favorecidos de la región se apropian de entre el 60 y el 70% del total de los ingresos; esto es, más que en los países donde imperan las mayores desigualdades del planeta (entre el 50 y el 60% de los ingresos para el 10% más favorecido en el Brasil y en Sudáfrica, cerca del 50% en los Estados Unidos), y tanto más que en Europa (entre el 30 y el 40%, contra cerca del 50% de un siglo atrás, antes de que las guerras del Estado benefactor y de fiscalidad llegasen para igualar las condiciones).

La misma marca profunda nos queda cuando constatamos que, en parte, las regiones del planeta donde imperan las mayores desigualdades tienen sus orígenes en un gravoso pasivo histórico en términos de discriminaciones raciales (eso resulta evidente en los casos de Sudáfrica y los Estados Unidos, pero en idéntica medida respecto del Brasil, que antes de la abolición de 1887 computaba cerca de un 30% de esclavos), lo que no sucede en Medio Oriente. En esa región, las desigualdades masivas tienen un origen tanto más "moderno" y en relación directa con el capitalismo contemporáneo, en cuyo núcleo medular está la actuación clave del petróleo y de los fondos financieron soberanos (desde luego, tanto como las fronteras coloniales, profusamente arbitrarias en su implementación, y desde entonces protegidas *manu militari* por los países occidentales).

Si a esto agregamos las masivas discriminaciones profesionales (y a veces indumentarias) que en Europa afrontan las poblaciones de origen árabe-

musulmán, y el hecho de que una fracción inactiva y fanatizada de esa juventud en la actualidad procura importar los conflictos de Medio Oriente, el cóctel se vuelve ciertamente explosivo. Por supuesto, aquí –en Francia y en Europa– la solución no es sumar un nuevo sustrato de estigmatización, como ahora algunos sienten la tentación de hacer con esta triste cuestión de la burkini. (¿Así que con su vestimenta –con sus faldas súper cortas o plisadas, cabellos coloreados, *T-shirts* roqueras o revolucionarias– uno podría expresarlo todo, menos sus convicciones religiosas? Evidentemente, todo eso es de lo más insensato.) Antes bien, la solución consiste en promover el acceso a la educación y al empleo. Y además tenemos que dejar de privilegiar nuestras relaciones venales con los emires e interesarnos más en el desarrollo equitativo de la región.

Desde luego, allí, en Medio Oriente, la solución no es la invasión generalizada del territorio del vecino. Pero hay que aceptar un debate calmo acerca del sistema de fronteras y el desarrollo de formas regionales de integración política y de redistribuciones. En términos concretos: hoy en día Egipto está al borde de la asfixia financiera, y se ve expuesto al riesgo de que el FMI le imponga una purga presupuestaria destructora, mientras que la prioridad debería ser invertir en la juventud del país, que afronta infraestructuras públicas y un sistema educativo y sanitario completamente estragados. Ese país de más de 90 millones de habitantes, al filo de un nuevo estallido social y político –pocos años después de que los países occidentales validasen la anulación de los primeros comicios en verdad democráticos que alguna vez se hayan realizado, al mismo tiempo que drenaban del nuevo régimen militar unos miles de millones vendiéndole armas–, indudablemente intentará mendigar un nuevo préstamo a sus inmediatos vecinos saudíes y emiratíes, quienes no saben qué hacer con los miles de millones que tienen, pero muy probablemente no cederán gran cosa. Un día de estos, esas redistribuciones y esa solidaridad que se da en el interior de Medio Oriente deberán ponerse en acto dentro de un marco más democrático y más previsible, en cierta medida como los fondos regionales europeos, que, sin embargo, están lejos de ser perfectos, pero que en comparación no dejan de ser un poco menos insatisfactorios.

Desde este punto de vista, es lícito pensar que el Brexit (o al menos el voto del 52% de los británicos en mayo de 2016 a favor de salir de la Unión Europea, ya que el Brexit efectivo todavía está muy lejos) es el segundo acontecimiento que dejó huella en el período contemplado en este libro.

Desde luego, menos dramáticamente que el desarrollo de la guerra en Siria y en Irak, el Brexit no es sólo una terrible derrota para la Unión Europea. En igual medida es una triste noticia para todas las regiones del mundo, que más que nunca necesitan (y tanto) formas originales y logradas de integración política regional. Una Unión Europea lograda podría ser una de las inspiraciones para una Liga Árabe más integrada, tanto como para futuras uniones políticas regionales sudamericanas, africanas o asiáticas, bloques regionales que también podrían desempeñar un papel central para debatir metas y redistribuciones de auténtico alcance mundial (por supuesto, en primer lugar, la cuestión del cambio climático). Al contrario, una Unión Europea fracasada, de la cual los pueblos consultados quieren salir lo antes posible, no es capaz de alimentar otra cosa que el escepticismo acerca de la superación del Estado-nación y afianzar los repliegues identitarios y nacionalistas en todas partes del mundo.

En eso reside la paradoja. Más que nunca, los diferentes países consideran que para garantizar su desarrollo necesitan acuerdos y tratados internacionales, especialmente en forma de reglas que garanticen la libre circulación de bienes, servicios, capitales y (en mínima medida) de personas; por su parte, el Reino Unido se apresurará a renegociar dichas reglas con los países de la Unión Europea. Pero al mismo tiempo, nos cuesta desarrollar los espacios de deliberación democrática que permitan debatir el contenido de esas reglas, así como los mecanismos de toma de decisión colectiva y transnacional según los cuales los pueblos y las diferentes clases sociales podrían reconocerse, en vez de sentir que constantemente se sacrifican en provecho de los más ricos y los más móviles. El voto a favor del Brexit no es sólo consecuencia de la creciente xenofobia de un electorado inglés que envejece y de la endeble participación electoral de la juventud. Traduce una profunda lasitud frente a la incapacidad de la Unión Europea de democratizarse e interesarse en los más débiles.

También los dirigentes alemanes y franceses que se sucedieron desde 2008 cargan con una pesada responsabilidad: vista su catastrófica gestión de la crisis de la zona euro, en términos objetivos dieron ganas de escapar a esta maquinaria infernal. Debido a su gestión egoísta y corta de miras a propósito de esa misma crisis (que, *grosso modo*, consiste en refugiarse tras las muy bajas tasas de interés de su respectivo país para negar a Europa del Sur una auténtica reestructuración de las deudas públicas, negativa que, por

otra parte, prosigue hoy en día), lograron la proeza de transformar una crisis que inicialmente llegó del sector privado estadounidense en una crisis europea durable de deudas públicas, incluso cuando esas deudas no eran más elevadas en la zona euro que en los Estados Unidos, el Reino Unido y Japón en vísperas de la crisis de 2008.

Sin embargo, quiero llegar a la conclusión con una nota de optimismo, ya que en el fondo todo puede revertirse, y lo más importante es debatir lo que vendrá. Sobre todo, quiero ser optimista porque pienso que los hombres y las mujeres tienen infinita capacidad de cooperación y de creación, sin importar cuán escasas sean las ocasiones en que crean para sí buenas instituciones. Los hombres y las mujeres son buenos; las malas son las instituciones, y son mejorables. La esperanza sigue en pie, porque nada hay de natural o inmanente en la solidaridad o en su ausencia: todo depende de los compromisos institucionales que uno asuma. Ninguna ley natural hace que los habitantes de Île-de-France o los bávaros sean más solidarios con los nacidos en la zona de Berry o con los sajones que con los griegos o los catalanes. Las instituciones colectivas que uno crea para sí –instituciones políticas, reglas electorales, sistemas sociales y fiscales, infraestructuras públicas y educativas– permiten que la solidaridad exista o desaparezca.

Por eso, aun a riesgo de fatigar al lector, que repetidas veces verá expuestas las mismas ideas en las crónicas que siguen, me gustaría volver a señalar aquí que una reformulación democrática de las instituciones permitiría generar avances en la solidaridad e implementar las mejores estrategias de desarrollo para nuestro continente. Concretamente, las cumbres de jefes de Estado y de ministros de Finanzas y Economía, que en Europa de unas décadas a esta parte hacen las veces de gobierno supranacional, constituyen una máquina de enarbolar los intereses nacionales mutuamente contrapuestos, e impiden cualquier toma de decisión mayoritaria y calma, después de un debate público en que se oigan las distintas opiniones. El Parlamento Europeo es una institución más promisoria, con la salvedad de que, en un sentido demasiado amplio, no pisa el suelo común, y elude por completo a los Parlamentos nacionales, que pese a todas sus imperfecciones siguen siendo los cimientos sobre los cuales se construyeron la democracia y el Estado benefactor europeo durante el siglo XX.

De uno u otro modo, la solución pasa por una más intensa implicación de esos órganos legislativos; en términos ideales, con la creación de una

auténtica Cámara Parlamentaria de la zona euro, que nuclee a integrantes de los Parlamentos nacionales, en proporción directa con las respectivas poblaciones y con los grupos políticos. Así, podría construirse una cabal soberanía democrática europea, sobre la base de las soberanías parlamentarias nacionales, lo que daría una legitimidad democrática fuerte para adoptar las medidas sociales, fiscales y presupuestarias que se impongan. Muchas otras soluciones complementarias son posibles. Lo cierto es que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para obligar a los candidatos de todos los futuros comicios a comprometerse específicamente con estas cuestiones. No basta con lamentarnos de la Europa actual: tenemos que poner sobre la mesa soluciones concretas y exactas y debatir colectivamente al respecto, para alcanzar el mejor entendimiento posible en la deliberación.

Para sumar otra nota optimista a la conclusión, de modo más general querría mencionar que no siento nostalgia alguna por el mundo legendario de los "Treinta Gloriosos" (que también iba acompañado por múltiples discriminaciones y desigualdades; en especial, patriarcales y poscoloniales) [2] y que en nada suscribo la falsa idea de que la dulce marcha que avanzaba hacia el progreso se habría interrumpido irremediablemente en virtud del ascenso del neoliberalismo, a partir de los años ochenta y noventa del siglo pasado.

En realidad, pese a todas las dificultades, el lento proceso de construcción del Estado benefactor europeo en ciertas facetas prosiguió entre las décadas de 1990 y de 2000; por ejemplo, con el desarrollo del seguro médico universal [*assurance maladie universelle*] en Francia (que previamente tenía un sistema muy segmentado e ininteligible; por desgracia, ese sigue siendo el caso de las jubilaciones), la instauración de un salario mínimo nacional en el Reino Unido y en Alemania (aunque en parte esto expresa una respuesta imperfecta a la decadencia sindical), la creación de ámbitos decisorios para los asalariados en los directorios de las empresas francesas y acaso pronto de las británicas (aunque esto sigue dando muestras de mucha timidez con relación a los sistemas consolidados desde décadas atrás en Alemania y en Suecia, sistemas que de por sí podrían ser mejorados). O también el desarrollo de reglas anónimas en muchos países europeos, lo que permite favorecer una mayor igualdad de acceso a la educación (aunque sigue siendo deplorable la falta de transparencia y de deliberación democrática en torno a dichos mecanismos). Estos debates continuarán, y

las decisiones específicas dependerán (ante todo) de la capacidad de los ciudadanos y de los diferentes grupos sociales para luchar e ir más allá de las barreras del conocimiento y de los egoísmos estrechos de miras. El final de la historia no va a ser mañana.

---

[1] En ese sentido, la edición original en francés continúa la recopilación publicada en 2012 con el título *Peut-on sauver l'Europe? Chroniques 2004-2012* por el sello parisino Les Liens qui Libèrent y la publicada en 2004 con el título *Vive la gauche américaine!* por Éditions de l'Aube [en el caso de la presente edición, prosigue la serie iniciada con *La crisis del capital en el siglo XXI. Crónicas de los años en que el capitalismo se volvió loco*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2015].

[2] Véase nota 36. [N. de T.]

Parte I. Europa

Qué hay que aprender de las lecciones del pasado, y por qué los europeos no deberían olvidar cómo salieron de la crisis en la segunda posguerra

¡Ciudadanos, a las urnas!

20 de mayo de 2014

El próximo domingo, los ciudadanos europeos podrán cambiar el destino de Europa si eligen a Martin Schultz como presidente de la Comisión. En cualquiera de los casos, es lo que proclaman con orgullo las profesiones de fe de los candidatos socialistas, aunque olvidan rápidamente que ellos ya están en el poder en Francia. Entonces, ¿Europa cambiará realmente el domingo?[3]

Es indudable que esta elección conlleva un potencial de cambio y de transformación más importante que todas las elecciones europeas previas. Acaso por primera vez el voto tenga un impacto directo en la elección del presidente de la Comisión. Si las listas socialistas logran un claro triunfo, a los jefes de Estado no les quedará otra opción que proponer a Martin Schultz para que lo apruebe el Parlamento Europeo. En cambio, si ganan las listas de derecha y centroderecha, el designado será Jean-Claude Juncker. Schultz, socialdemócrata sólido y sincero, frente a Juncker, ex dirigente inamovible de Luxemburgo, paraíso fiscal que, escondido en el centro mismo de Europa, desde hace años bloquea cualquier tentativa de poner en marcha la transmisión automática de información bancaria. En el fondo, la opción es bastante simple y amerita ampliamente que vayamos a votar el domingo. Salvo que tengamos cosas muy importantes que hacer.

Sin embargo, para cambiar el rumbo de Europa será necesario tanto más que un voto a Schultz. El balance de la gestión de la crisis es calamitoso: en el bienio 2013-2014 el crecimiento en la zona euro ha sido casi nulo, mientras que ha quedado claramente repartido entre los Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Por qué transformamos una crisis de la deuda pública, que al comienzo era tan elevada aquí como del otro lado del Atlántico y de la Mancha, en una crisis de desconfianza hacia la zona euro, crisis que amenaza con encerrarnos en un largo estancamiento? Porque nuestras

instituciones comunes son deficientes. Para retomar el crecimiento y el progreso social en Europa, es necesario replantearlas por completo.

Este es el sentido del Manifiesto por una Unión Política del Euro que, ya traducido y publicado en seis idiomas europeos, está disponible en <pouruneunionpolitiquedeleuro.eu>. La idea central es simple: una moneda única con 18 deudas públicas diferentes sobre las cuales el mercado puede especular libremente, más 18 sistemas fiscales y sociales en competencia desenfrenada unos con otros, no funciona, y nunca funcionará. Los países de la zona euro eligieron compartir su soberanía monetaria y, por ende, renunciar al arma de la devaluación unilateral, aunque sin dotarse de nuevos instrumentos económicos, sociales, fiscales y presupuestarios comunes. Esta situación indefinida es la peor de todas.

Más allá de la buena voluntad de Martin Schultz, más allá de cuál sea la mayoría de que disponga en el Parlamento Europeo, enfrentará bloqueos resultantes de la omnipotencia del Consejo de los Jefes de Estado y los ministros. Para salir de la regla de unanimidad, es preciso instituir una verdadera Cámara Parlamentaria de la zona euro, donde cada país pueda estar representado por diputados de todas las tendencias políticas, no por una sola persona. Sin esto, la inercia continuará: la misma que nos obligó a esperar las sanciones estadounidenses contra los bancos suizos para lograr algunos avances en materia de transparencia financiera en Europa; la misma que nos empuja a reducir cada vez más el impuesto a las empresas y permite que en ningún lado las grandes multinacionales paguen impuestos.

Como ejemplo de la grave disfuncionalidad de las instituciones europeas actuales, podría citarse la lamentable deducción proporcional sobre los depósitos chipriotas, votada por unanimidad en la opacidad del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas en marzo de 2013, antes de advertir que nadie estaba dispuesto a defenderla. Si una nueva crisis se produce a una escala más amplia, podemos esperar lo peor. Proclamar que la opinión pública no gusta de la Europa actual y llegar a la conclusión de que no hay que modificar nada esencial de su funcionamiento es una incoherencia notable. Los tratados se reforman constantemente, y así seguirá siendo en el futuro. En vez de esperar de brazos cruzados las futuras propuestas de Angela Merkel, es mejor prepararse y proponer una verdadera democratización.

Para cambiar el destino de Europa, también será necesario tomar las riendas del tratado euroestadounidense. La Unión Europea y los Estados

Unidos representan la mitad del PBI mundial. Sus responsabilidades y sus opiniones no pueden reducirse a la liberalización de los intercambios comerciales. Al apoyarse en el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, es posible imponer en este tratado el desarrollo de normas exigentes en el plano social, ambiental y fiscal. La Unión Europea y los Estados Unidos tienen el peso necesario para imponer a sus empresas y a los paraísos fiscales nuevas reglas: una base fiscal consolidada del impuesto a las sociedades anónimas, un registro mundial –o al menos euronorteamericano– de títulos financieros. En este movimiento, Martin Schultz puede desempeñar un rol central. Así que soñemos un poco, y votemos.

---

[3] Entre el 22 y el 25 de mayo de 2014 se realizaron elecciones en los veintiocho Estados integrantes de la Unión Europea para elegir diputados europeos. El Parlamento elegiría al presidente de la Comisión Europea con posterioridad a dicha elección sobre la base de la propuesta del Consejo Europeo, que finalmente se inclinó por Jean-Claude Juncker. [N. de T.]

Del costo exorbitante de ser un país pequeño

8 de septiembre de 2014

Y entonces fue necesario que miles murieran en Ucrania y pasaran meses de titubeos culposos para que Francia finalmente accediera a suspender en forma provisoria sus envíos de armas a Rusia. Todo esto con tal de vender fragatas que representan apenas un poco más de 1000 millones de euros, lo que constituye una ganancia irrisoria en función de lo que está en juego en términos humanos y geopolíticos, y del peligro militar real que subyace a estos envíos estratégicos.[4] Para darnos una idea, recordemos que, por ejemplo, la justicia estadounidense acaba de cobrarle sin inmutarse más de 6000 millones de euros a BNP Paribas. ¡Lo que habríamos tenido que escuchar si el Estado francés hubiese osado hacerle pagar semejante suma a nuestro primer banco nacional y europeo! Estas dos cifras que en principio no parecen relacionadas son, en realidad, las dos caras de una misma moneda. En la nueva economía-mundo, el costo de ser un país pequeño se ha vuelto exorbitante: terminamos por aceptar cosas cada vez más inaceptables que contradicen nuestros valores.

Con tal de arañar algunos millones de la exportación, venderíamos lo que fuese a quien fuese. Estamos dispuestos a ser un paraíso fiscal, reducirles los impuestos a multinacionales y oligarcas antes que a las clases medias y populares, aliarnos con emiratos árabes poco progresistas esperando que eso beneficie a nuestros clubes de fútbol. Y, a la inversa, nos sometemos a la ley de los grandes países –en este caso, los Estados Unidos– que utilizan el peso de su sistema jurídico para imponer multas récord y decisiones arbitrarias en el mundo entero, ya sea en Francia o en la Argentina (cuyo canje de títulos de deuda acaba de quedar en tela de juicio). Sin embargo, todos los países europeos, incluidos Francia y Alemania (que recientemente

se escandalizó ante las escuchas de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense –NSA– a Angela Merkel), se verán cada vez más en la situación de países minúsculos, listos para padecer y sacrificarlo todo. Por este motivo, la prioridad de nuestra época y nuestro continente será durante mucho tiempo la unión política, en nombre de nuestros valores y de nuestro modelo de sociedad europeo.

Pese a todo, esta unión trastabilla. Nos alegra que un polaco haya sido nombrado recientemente como presidente del Consejo Europeo y comprobar el éxito de la extensión de la unión hacia el Este. Con una población de más de 500 millones de habitantes y un PBI acumulado de más de 15 billones de euros –es decir, casi un cuarto del PBI mundial–, la Unión Europea de veintiocho países tiene los medios para imponer sus decisiones y sanciones, en especial a Rusia, cuya superficie económica y financiera es diez veces más débil y que no resistirá durante mucho tiempo a una acción impulsada con determinación. Y, a su vez, este presidente polaco [Donald Tusk] nos recuerda que su país no está muy deseoso de volver a la zona euro, que constituye el núcleo mismo de Europa en términos políticos y económicos (casi 350 millones de habitantes y 12 billones de euros de PBI), pero que cada vez da más muestras de ser un fracaso ante los ojos del mundo y de los propios europeos.

Hay que rendirse a la evidencia: si queremos avanzar hacia la unión política, en especial acerca de cuestiones presupuestarias, fiscales y financieras, sólo lo lograremos construyendo instituciones democráticas y parlamentarias nuevas, en el seno de un pequeño grupo de países, dentro de la zona euro. Con un Parlamento de la zona euro y un ministro de Economía responsable frente a esta asamblea, podríamos votar abierta y públicamente un plan de reactivación, un nivel común de déficit, un impuesto común a las empresas, una regulación bancaria, y hacer de contrapeso político y democrático al Banco Central Europeo, del cual no cabe esperar todo. Cuando esta unión fortalecida haya demostrado su eficacia y su capacidad de construir decisión política y progreso social, otros países de la Unión de veintiocho tal vez querrán incorporarse al núcleo duro. Las cosas no se van a arreglar por sí solas, mientras esperamos de brazos cruzados.

El gobierno francés, junto con el italiano y algunos otros, debe brindar propuestas ahora. No tiene sentido repetir que es imposible modificar los tratados, cuando se los reformó en seis meses durante 2012, y se los reformará otra vez. Pese a que teme que la dejen en minoría con respecto a

las elecciones sobre el déficit, Alemania ya no podrá persistir mucho más en negar una verdadera propuesta de unión política fortalecida, ya que cobrará más peso su importancia demográfica en este Parlamento del euro. El gobierno francés no podrá resistir los próximos tres años esperando la reactivación. François Hollande cometió un error enorme en 2012 al imaginar que su estrategia de reducción a marcha forzada de los déficits permitiría reactivar el crecimiento. Es momento de admitirlo y cambiar, antes de que sea demasiado tarde.

---

[4] Piketty se refiere a los dos buques tipo Mistral que Rusia había encargado a Francia en 2010, durante la presidencia de Nicolas Sarkozy. François Hollande se negó a entregarlos debido a las tensiones entre Rusia y Ucrania que pusieron en alerta a todos los países de la OTAN. Finalmente se llegó a un acuerdo cuando Francia se comprometió a reembolsar el dinero invertido por Rusia. Una vez resuelto el conflicto bilateral, Hollande vendió en 2015 los buques de guerra a Egipto, que buscaba reforzar el equipamiento de sus fuerzas armadas. [N. de E.]

2015: ¿qué impactos podrían movilizar a Europa?

29 de diciembre de 2014

Lo que más pena da, dentro de la crisis europea, es la obcecación de los dirigentes en el poder que presentan su política como la única viable, y el temor que les inspira cualquier sacudida política que pudiera alterar este feliz equilibrio.

No queda duda: el premio al cinismo lo gana Jean-Claude Juncker,[5] quien desde las revelaciones *LuxLeaks* explica con absoluta tranquilidad a una Europa boquiabierta que, cuando estaba al mando del Luxemburgo, no tuvo otra opción más que vaciar la base fiscal de sus vecinos: como ustedes saben bien, la industria decaía, había que encontrar una nueva estrategia de desarrollo para mi país; ¿qué otra cosa podía hacer aparte de convertirnos en uno de los peores paraísos fiscales del mundo? Los vecinos, también víctimas de la desindustrialización desde hace décadas, sabrán comprender.

Hoy en día no alcanzan las excusas: es tiempo de reconocer que las instituciones europeas mismas están en discusión y que sólo una refundación democrática de Europa permitiría implementar políticas de progreso social. En concreto, si queremos evitar nuevos escándalos como los de *LuxLeaks*, hay que salir de la regla de la unanimidad en materia fiscal y tomar todas las decisiones relativas a la imposición de las grandes empresas (también, en teoría, de los mayores ingresos y fortunas) según la regla de la mayoría. Y si Luxemburgo y otros países se niegan, eso no debe impedir que los países que así lo deseen constituyan un núcleo duro que avance en esta dirección y tome las medidas necesarias contra quienes quieran vivir de la opacidad financiera.

El premio a la amnesia va para Alemania, con Francia en el segundo escalón del podio. En 1945, estos dos países tenían una deuda pública que

superaba en un 200% el PBI. En 1950, había caído a menos del 30%. ¿Qué pasó entretanto? ¿Se habrán liberado los excedentes presupuestarios que permitieron reembolsar semejante deuda? Claro que no: el modo en que Alemania y Francia se quitaron de encima la deuda del siglo pasado fue por la inflación y la lisa y llana impugnación. Si pacientemente hubiesen intentado liberar excedentes de un 1 o un 2% del PBI por año, todavía estaríamos sopesando opciones, y habría sido mucho más difícil para los gobiernos de posguerra invertir en desarrollo. Sin embargo, estos son los dos países que desde el período 2010-2011 explican a los países del sur europeo que deberán reembolsar su deuda pública hasta el último centavo. Se trata de un egoísmo corto de vista, ya que el nuevo tratado presupuestario adoptado en 2012 bajo presión alemana y francesa –que organiza la austeridad en Europa (con reducción demasiado rápida de los déficits y un sistema de sanciones automáticas totalmente inoperante)– llevó a una recesión generalizada en la zona euro; en cambio, en otros sitios, tanto en los Estados Unidos como en los países de la Unión Europea que no pertenecen a la zona euro, la economía está distribuida.

En este dúo, el premio a la hipocresía –sin objeción alguna– queda en manos de los dirigentes franceses, que le achacan todas las culpas a Alemania, cuando es claro que la responsabilidad es compartida. El nuevo tratado presupuestario, negociado por la anterior mayoría y ratificada por la nueva, no habría podido adoptarse sin Francia, que al igual que Alemania toma una decisión egoísta respecto del sur de Europa. Y ya que se paga una tasa de interés muy baja, ¿para qué extender su aplicación a los otros países? En verdad, una moneda única no puede funcionar con 18 deudas públicas y 19 tasas de interés sobre las cuales puedan especular libremente los mercados financieros. Habría que hacer inversiones masivas en educación, innovación y técnicas sustentables. Se hace todo lo contrario: en la actualidad, Italia dedica casi el 6% del PBI para pagar intereses de deuda e invierte apenas el 1% del PBI en universidades.

Entonces, ¿qué impactos cambiarían las cosas en 2015? A grandes rasgos, existen tres posibilidades: una nueva crisis financiera, un impacto político que provenga de la izquierda u otro causado por la derecha. Los dirigentes europeos actuales deberían tener la inteligencia de reconocer que la segunda posibilidad es por lejos la mejor: los movimientos políticos que ganan hoy a izquierda de la izquierda, como Podemos en España o Syriza en Grecia, son fundamentalmente internacionalistas y proeuropeos. En vez de rechazarlos,

habría que trabajar con ellos para formular las bases de una refundación democrática de la Unión Europea. Sin esto, corremos el riesgo de reencontrarnos con una conmoción tanto más peligrosa, de la derecha: teniendo en cuenta el modo de escrutinio, es muy posible que el Frente Nacional de Marine Le Pen gane bancas en las elecciones regionales de diciembre de 2015. También podemos, porque son épocas de buenos augurios, esperar lo imposible. Desde este punto al cual llegamos, François Hollande haría muy bien en reconocer sus errores de 2012, tenderle la mano al sur de Europa y, así, formular por fin propuestas audaces para nuestro continente.

---

[5] Jean-Claude Juncker (1954), presidente de la Comisión Europea, es miembro del Partido Popular Social Cristiano de Luxemburgo. Fue primer ministro de ese país de 1995 a 2013 y presidente del Eurogrupo –integrado por los ministros de Finanzas y Economía de la zona euro– de 2005 a 2013. En 2014, poco después de que Juncker fuese elegido presidente de la Comisión Europea, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio a conocer una serie de documentos que dejaba en evidencia que casi trescientas cincuenta multinacionales habían firmado acuerdos secretos con Luxemburgo para rebajar sus impuestos. El escándalo fue conocido como *LuxLeaks*. En sus declaraciones, Juncker se defendió caracterizándose como responsable político del sistema fiscal de su país, pero no como el arquitecto. Piketty expresa su opinión sobre este líder en la crónica "¡Ciudadanos, a las urnas!". Véase además la crónica "La hipocresía europea frente a los paraísos fiscales: *LuxLeaks* y *Panama Papers*." [N. de E.]

Propagar la revolución democrática en el resto de Europa

26 de enero de 2015

El triunfo electoral de Syriza en Grecia tal vez esté a punto de transformar la situación europea y terminar con la austeridad que socava nuestro continente y las oportunidades de sus jóvenes. Tanto más cuanto las elecciones previstas para finales de 2015 en España podrán arrojar un resultado similar, con la creciente relevancia de Podemos. Pero para que esta revolución democrática proveniente del sur cambie en verdad el rumbo de las cosas, haría falta que los partidos de centroizquierda actualmente en el poder en Francia e Italia adopten una actitud constructiva y admitan su cuota de responsabilidad en la situación presente.

En concreto, estas fuerzas políticas deberían aprovechar esta ocasión para proclamar a viva voz que el tratado presupuestario adoptado en 2013 fue un fracaso y para poner sobre la mesa nuevas propuestas que permitan una verdadera refundación democrática de la zona euro. En el contexto de las instituciones europeas actuales, encorsetadas por criterios rígidos sobre el déficit y la regla de la unanimidad sobre la fiscalidad, es sencillamente imposible desarrollar políticas de progreso social. No alcanza con quejarse de Berlín o Bruselas: hay que proponer nuevas reglas.

Seamos muy claros: por el hecho de tener la misma moneda, queda plenamente justificado que se coordinen tanto el nivel de déficit como los grandes lineamientos de la política económica y social. Estas elecciones comunes tan sólo deben realizarse de manera democrática, a plena luz del día, como resultado de un debate público y contradictorio. No es cuestión de aplicar reglas mecánicas y sanciones automáticas, que llevaron desde el ejercicio 2011-2012 a una reducción demasiado rápida de los déficits y a una recesión generalizada en la zona euro. Por eso, el desempleo explotó

mientras que en otros países bajaba (tanto en los Estados Unidos como en los países fuera de la zona euro), y las deudas públicas aumentaron, a la inversa del objetivo proclamado.

La selección del nivel de déficit e inversión pública es una decisión política que debe adaptarse rápidamente a la situación económica. Debería hacerse de manera democrática, mediante un Parlamento de la zona euro, en que cada Parlamento nacional sea representado en forma proporcional por la cantidad de población de cada país, ni más ni menos. Con semejante sistema habríamos tenido menos políticas de austeridad, más crecimiento, menos desempleo. Asimismo, este nuevo gobierno democrático permitiría retomar la iniciativa de poner en común las deudas públicas superiores al 60% del PBI (para instalar una tasa de interés única y prevenir crisis futuras) y de implementar un impuesto a las empresas unificado para la zona euro (sólo así se termina con el *dumping* fiscal).

Por desgracia, hoy en día el riesgo es que los gobiernos de Francia e Italia se limiten a tratar a Grecia como un caso aislado y acepten una ligera reestructuración de la deuda de ese país, sin dar una discusión de fondo sobre la organización de la zona euro. ¿Por qué? Porque dedicaron mucho tiempo a convencer a sus electores de que el tratado presupuestario de 2012 funcionaba y ahora tienen miedo de desdecirse. Entonces van a declarar que es muy complicado cambiar los tratados; sin embargo, la reescritura del tratado de 2012 se combinó en seis meses, y nada impide tomar medidas de emergencia mientras se espera que las nuevas reglas entren en vigencia. Más vale reconocer los errores cuando todavía se está a tiempo, antes que esperar nuevos impactos políticos desde la extrema derecha. Si hoy mismo Francia e Italia tendieran la mano a Grecia y España para proponerles una verdadera refundación democrática de la zona euro, entonces Alemania terminaría aceptando un acuerdo. Actualmente el debate europeo está minado por la falta de propuestas y perspectiva.

Todo dependerá también de la actitud de los socialistas españoles, al día de hoy opositores. Menos abatidos y desacreditados que sus homólogos griegos, deberán sin embargo aceptar que les costará mucho ganar las próximas elecciones sin aliarse con Podemos, fuerza que, si damos crédito a los últimos sondeos, incluso podría ser primera. No importa: a veces es necesaria una renovación de los partidos políticos; lo único que cuenta es el programa de acción que surgirá de todo esto.

Y sobre todo no nos imaginemos que el nuevo plan anunciado por el Banco Central Europeo (BCE) solucionará todos los problemas. Un sistema de moneda única con dieciocho deudas públicas y dieciocho tasas de interés diferentes es fundamentalmente inestable. El BCE intenta cumplir su papel, pero para reactivar la inflación y el crecimiento habría que renovar el presupuesto. Sin esto, es de temer que los nuevos miles de millones emitidos por el BCE servirán para crear burbujas sobre algunos activos y no para reactivar la inflación de los precios para el consumo. La prioridad en Europa hoy debería ser invertir en innovación y educación. Para esto, es necesaria una unión política y presupuestaria reforzada de la zona euro, con decisiones tomadas por una mayoría en un Parlamento en verdad democrático. No puede pedirse todo a un banco central.

La doble condena, económica y política, de las clases populares

23 de marzo de 2015

¿Por qué las clases populares se alejan, en todo el mundo, de los partidos de gobierno y, de manera extraña, de los partidos de centroizquierda que pretenden defenderlas? Es simple: porque hace rato que no las defienden. Durante estas últimas décadas, las clases populares sufrieron el equivalente de una doble condena; primero económica y luego política. Las evoluciones económicas fueron poco favorables a los grupos sociales más vulnerables de los países desarrollados: fin del crecimiento excepcional de los "Treinta Gloriosos",[6] desindustrialización, aumento del poder de los países emergentes, caída de los empleos poco o medianamente calificados en el norte. Los grupos mejor provistos en capital financiero y cultural pudieron, por el contrario, aprovechar a pleno la globalización. El segundo problema es que las evoluciones políticas sólo exacerbaron estas tendencias. Podríamos haber imaginado que las instituciones públicas, los sistemas de protección social, las políticas implementadas en su conjunto se adaptan a la nueva situación, y exigen más a los principales beneficiarios de las evoluciones políticas correspondientes para dedicarse con mayor ahínco a los grupos más afectados. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario.

En parte, debido a la competencia intensificada entre países, los gobiernos nacionales se concentraron cada vez más en los contribuyentes más móviles (asalariados altamente calificados y globalizados, poseedores de capitales) en detrimento de los grupos percibidos como cautivos (clases medias y populares). Esto concierne un conjunto de políticas sociales y servicios públicos: inversiones en los trenes de alta velocidad TGV contra la pauperización de los servicios de transporte regional y local (TER), inversión en carreras de élite contra abandono de escuelas e universidades,

etc. Esto tiene que ver con el financiamiento del conjunto, claro. Desde la década de 1980, la progresividad de los sistemas fiscales se redujo de modo consistente: hubo enormes rebajas en las tasas aplicables a los ingresos más elevados, a la vez que aumentaban con regularidad los impuestos indirectos que afectan a los sectores más vulnerables.

La desregulación financiera y la liberalización de los flujos de capitales, sin contrapartida alguna, acentuaron estas evoluciones. Las instituciones europeas, por completo proclives al principio de una competencia cada más pura y perfecta entre territorios y entre países, sin base fiscal y social común, también reforzaron estas tendencias. Lo vemos muy claro en el caso del impuesto a las ganancias de las empresas: en Europa su tasa se redujo a la mitad desde la década de 1980. E incluso cabría aclarar que las empresas más grandes escapan a la tasa oficial, tal como quedó demostrado en el reciente escándalo de *LuxLeaks*.[7] En la práctica, las pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a pagar tasas mucho mayores que las que pagan los grandes grupos radicados en las ciudades capitales. Más impuestos, menos servicios públicos: no sorprende que las poblaciones se sientan abandonadas. Este sentimiento de desamparo alimenta el voto de extrema derecha y el surgimiento del tripartidismo, tanto dentro como fuera de la zona euro (por ejemplo, en Suecia). Entonces, ¿qué hay que hacer?

En principio, es necesario reconocer que, sin una refundación social y democrática radical, la construcción europea va a ser cada vez menos defendible ante las clases populares. La lectura del informe de los cuatro presidentes (Comisión, Banco Central Europeo, Consejo, Eurogrupo) en relación con el futuro de la zona euro es, desde este punto de vista, particularmente desmoralizadora. La idea general es que sabemos cuáles son las “reformas estructurales” (flexibilización del mercado laboral y de bienes) que permiten resolverlo todo, sólo hay que encontrar los medios de imponerlas. El diagnóstico es absurdo: si se disparó el desempleo estos últimos años mientras descendía en los Estados Unidos es porque este país dio pruebas de elasticidad en el presupuesto para reactivar la maquinaria.

Los obstáculos que inmovilizan a Europa son, ante todo, los yugos antidemocráticos: rigidez de los criterios presupuestarios, regla de la unanimidad sobre las cuestiones fiscales. Y por encima de todo, falta de inversión para el futuro. Ejemplo emblemático: el programa de movilidad interuniversitaria Erasmus tiene el mérito de existir pero está ridículamente subfinanciado (2000 millones de euros por año, contra 200 000 millones de

euros destinados a los intereses de deuda), cuando Europa debería invertir en forma masiva en innovación, en programas para los jóvenes y en universidades. Si no hay compromiso alguno para refundar Europa, entonces los riesgos de explosión son reales. En cuanto a Grecia, queda de manifiesto que ciertos dirigentes intentan empujar al país hacia la salida: todos saben muy bien que los acuerdos de 2012 no son aplicables (Grecia no va pagar el 4% de su PBI en excedente primario durante décadas), y sin embargo se niegan a renegociar. Sobre todas estas cuestiones, la ausencia absoluta de propuesta francesa se vuelve abrumadora. No podemos esperar de brazos cruzados las distintas elecciones regionales de diciembre y la llegada al poder de la extrema derecha en las regiones francesas.

---

[6] Véase nota 36. [N. de E.]

[7] Véanse las crónicas "2015: ¿qué impactos podrían movilizar a Europa?"; "La hipocresía europea frente a los paraísos fiscales: *LuxLeaks* y *Panama Papers*"; y "Repensar el impuesto al patrimonio". [N. de E.]

¿Siempre hay que pagar las deudas?

20 de abril de 2015

Para algunos, la cuestión es evidente: las deudas siempre se pagan, no hay otra posibilidad más que cumplir, en especial si está cincelado en el mármol de los tratados europeos. Sin embargo, una rápida ojeada a la historia de las deudas públicas, tema apasionante e injustamente soslayado, muestra que las cosas son tanto más complejas.

Primera buena noticia: en el pasado hubo deudas públicas que en importancia superaban (en mucho) las actuales, y siempre se salió adelante apelando a una gran diversidad de métodos. Se puede distinguir, por un lado, el método lento, que acumula con paciencia excedentes presupuestarios para ir reembolsando intereses y luego el capital de las deudas en cuestión; por otro lado, hay una serie de métodos que apuntan a acelerar el proceso: inflación, impuesto excepcional, anulaciones lisas y llanas.

Un caso de particular interés es el de Alemania y Francia, que en 1945 tenían deudas públicas del orden de dos años de producto bruto interno (un 200% del PBI); es decir, niveles todavía más altos que Grecia o Italia hoy. A comienzos de la década de 1950, esta deuda había descendido a menos del 30% del PBI. Una reducción tan rápida no hubiese sido posible, claro está, con la acumulación de excedentes presupuestarios. Por el contrario, los dos países utilizaron todo el arsenal de métodos rápidos. La inflación, muy alta a ambas orillas del Rin entre 1945 y 1950, desempeña el papel central. Luego de la Liberación, Francia instaura un impuesto excepcional sobre el capital privado, que alcanza al 25% de los patrimonios más altos y hasta el 100% de las fortunas más importantes que surgieron entre 1940 y 1945. Los dos países utilizan también diversas formas de “reestructuración de deudas”, nombre técnico dado por los financistas para designar el hecho de anular lisa y llanamente todo o parte de las obligaciones (también, de

manera más prosaica, se habla de *haircut*). Por ejemplo, luego de los famosos acuerdos de Londres de 1953, se anuló la mayor parte de la deuda externa alemana.

Estos son los métodos rápidos de reducción de la deuda –en especial la inflación– que permitió que Francia y Alemania se lanzaran a la reconstrucción y el crecimiento de posguerra sin el agobio de esas obligaciones. Así, en las décadas de 1950 y 1960, estos dos países pudieron invertir en obras públicas, educación y desarrollo. Y son estos dos mismos países que le explican ahora al sur europeo que las deudas públicas deben ser reembolsadas hasta el último centavo, sin inflación ni medida excepcional.

En la actualidad, Grecia estaría en leve excedente primario: sus ciudadanos pagan un poco más de impuestos de lo que reciben de gasto público. Según los acuerdos europeos de 2012, Grecia debe abonar un enorme excedente de un 4% del PBI durante décadas para cumplimentar los pagos de deuda. Es una estrategia absurda, que por fortuna Francia y Alemania jamás se aplicaron a sí mismas.

En esta extraordinaria amnesia histórica, Alemania carga con una pesada responsabilidad. Pero estas decisiones nunca podrían haberse adoptado si Francia se hubiese opuesto. Los sucesivos gobiernos franceses, de derecha y luego de izquierda, se mostraron incapaces de evaluar la magnitud de la situación y proponer una verdadera refundación democrática de Europa.

Por su egoísmo miope, Alemania y Francia maltratan a los países del sur de Europa y a la vez se maltratan a sí mismas. Con deudas públicas que rondan el 100% del PBI, una inflación nula y un crecimiento endeble, ambos países también tardarán décadas para recuperar capacidad de acción e inversión a futuro. Lo más absurdo es que las deudas europeas de 2015 son en gran parte deudas internas, como por lo demás eran las de 1945. Las tenencias cruzadas entre países alcanzaron proporciones inéditas: los ahorristas de bancos franceses acumulan una parte de las deudas alemanas e italianas; las instituciones financieras alemanas e italianas poseen gran parte de las deudas francesas, y así sucesivamente. Pero considerada la zona euro en su conjunto, allí nos poseemos a nosotros mismos. E incluso más: los activos financieros que atesoramos fuera de la zona euro son más elevados que los que el resto del mundo posee en zona euro.

En vez de pasar décadas reembolsándonos una deuda propia, más vale buscar otra forma de organizarnos, y eso sólo nos compete a nosotros.

Por una Europa abierta

7 de septiembre de 2015

Si bien llega con retraso, el impulso de solidaridad en favor de los refugiados observado estas últimas semanas tiene al menos el mérito de recordar a los europeos y al mundo una realidad esencial. Nuestro continente puede y debe convertirse en una gran tierra de inmigración en el siglo XXI. Todo nos lleva a eso: su envejecimiento autodestructivo lo impone, su modelo social lo permite y la explosión demográfica de África a la par del calentamiento global lo exigirá más aún. Todo esto es bien sabido. Pero tal vez sea más sabido que Europa antes de la crisis financiera estaba por convertirse en la región más abierta del mundo a los flujos migratorios. La crisis –originada en el bienio 2007-2008 en los Estados Unidos pero de la que Europa todavía no logró salir a causa de sus malas políticas– fue la que llevó a un aumento del desempleo y de la xenofobia, y a un cierre brutal de sus fronteras. Todo esto mientras la coyuntura internacional (Primavera Árabe, afluencia de refugiados) habría justificado un incremento de la apertura.

Recapitulemos: la Unión Europea cuenta, en 2015, con casi 510 millones de habitantes, contra los aproximadamente 485 millones en 1995 (con fronteras constantes). De por sí esta progresión de 25 millones de habitantes en veinte años nada tiene de excepcional (apenas un 0,2% de crecimiento anual, contra el 1,2% por año para la población mundial en ese mismo período). Pero el punto importante es que este crecimiento se explica en casi tres cuartos con el aporte migratorio (más de 15 millones). Así, entre 2000 y 2010, la Unión Europea recibió un flujo migratorio (neto de salidas) de alrededor de un millón de personas por año, es decir, un nivel equivalente al registrado en los Estados Unidos, y además con una mayor diversidad cultural y geográfica (el islam es marginal más allá del Atlántico). En esa época poco distante en que nuestro continente sabía

mostrarse (relativamente) receptivo, el desempleo bajaba en Europa, al menos hasta 2007-2008.

La paradoja es que los Estados Unidos, gracias a su pragmatismo y a su flexibilidad presupuestaria y monetaria, se repusieron muy rápido de la crisis que ellos mismos causaron. Muy pronto retomaron su trayectoria de crecimiento (su PBI de 2015 es un 10% más elevado que el de 2007), y el aporte migratorio se mantuvo en alrededor de un millón de personas por año. Pero Europa, empantanada en divisiones y posturas estériles, todavía no reencontró su nivel de actividad económica previo a la crisis, lo que lleva al crecimiento del desempleo y al cierre de las fronteras. El aporte migratorio cayó en forma abrupta de un millón de personas por año entre 2000 y 2010 a menos de 400 000 entre 2010 y 2015.

¿Qué hacer? El drama de los refugiados podría ser la oportunidad para los europeos de salir de sus pequeñas rencillas y su ombliguismo. Al abrirse al mundo, al reactivar la economía y la inversión (vivienda, escuelas, infraestructura), al alejar los riesgos deflacionarios, la Unión Europea podría perfectamente regresar a los niveles migratorios observados antes de la crisis. Desde este punto de vista, la apertura expresada por Alemania es una noticia excelente para quienes se preocupaban ante una Europa enmohecida y avejentada. Por cierto, podemos alegar que Alemania no tiene otra opción, dada su baja tasa de natalidad. Según las últimas proyecciones demográficas de la ONU, que se calculan sobre un flujo migratorio dos veces más elevado en Alemania que en Francia en las décadas por venir, la población alemana pasaría de 81 millones hoy a 63 millones a finales del siglo, y asimismo Francia pasaría de 64 millones a 76 millones.

Podemos recordar también que el nivel de actividad económica observado en Alemania es en parte consecuencia de un gigantesco excedente comercial, el cual por definición no podría generalizarse en Europa (ya que no hay tantas personas en el mundo que puedan absorber tantas exportaciones). Pero este nivel de actividad se explica también por la eficacia del modelo industrial alemán, que se basa especialmente sobre una muy fuerte implicación de los asalariados y de sus representantes (poseen la mitad de los escaños en las juntas directivas): debería servirnos de inspiración.

Sobre todo la actitud abierta ante el mundo manifestada por Alemania envía un fuerte mensaje a los ex países de Europa Oriental y miembros de

la Unión Europea, que no quieren niños ni inmigrantes, y cuya población combinada debería pasar de los actuales 95 millones a no más de 55 millones hacia finales de siglo, según la ONU. Francia debe alegrarse ante esta actitud alemana y aprovechar la ocasión para hacer triunfar en Europa una visión abierta y positiva respecto de los refugiados, los inmigrantes y el mundo.

Cambiar Europa ahora

22 de diciembre de 2015

En los últimos años, en Francia los votantes de la extrema derecha pasaron del 15 al 30%, con máximos de 40% en varias regiones. Todo confluyó: aumento del desempleo y de la xenofobia, terrible decepción ante la izquierda en el poder, sentimiento de que se intentó todo y que hay que probar otra cosa. También se pagan las consecuencias del calamitoso manejo de la crisis financiera llegada de los Estados Unidos en 2008, que, por exclusiva culpa nuestra, hemos transformado en prolongada crisis europea, debido a instituciones y políticas por entero inadecuadas. Una moneda única que posee –a partir de la entrada de Lituania en la zona euro– 19 deudas públicas diferentes, 19 tasas de interés diferentes, 19 impuestos distintos a las empresas, sin sustento social ni educativo común, está destinada a fracasar.

Sólo una refundación democrática y social de la zona euro, al servicio del crecimiento y el empleo, en torno a un pequeño núcleo duro de países dispuestos a avanzar y a brindarse instituciones políticas propias, podría contrarrestar las tentaciones nacionalistas y resentidas que hoy en día amenazan a Europa entera. El verano pasado, luego del fiasco griego, François Hollande había comenzado a considerar la idea de un nuevo Parlamento para la zona euro. Francia ahora debe hacer una propuesta precisa a sus socios principales y llegar a un acuerdo. Sin esto, la agenda será monopolizada por los países que han elegido el repliegue nacional (Reino Unido, Polonia).

Como punto de partida, es importante que los dirigentes europeos –franceses y alemanes en especial– reconozcan sus errores. Podemos debatir hasta el infinito todo tipo de reformas, grandes y pequeñas, que puedan efectuarse en los distintos países de la zona: instalación de comercios, líneas de transporte, mercado laboral, jubilaciones, etc. Algunas son más

útiles que otras. Sin embargo, en todos los casos, no es eso lo que explica la súbita recaída del PBI de la zona euro entre 2011 y 2013, mientras seguía la reactivación en los Estados Unidos. Ahora no cabe duda alguna de que la reactivación fue sofocada por el intento de reducir demasiado rápido los déficits del período 2011-2013 –en especial con subas de impuestos demasiado duras en Francia–. La aplicación de reglas presupuestarias ciegas es la causante de que el PBI de la zona euro no haya encontrado en 2015 su nivel de 2007. Las intervenciones tardías del BCE y el nuevo tratado presupuestario de 2012 (con la creación de un Mecanismo Europeo de Estabilidad –MES–[8] dotado de 700 000 millones de euros, que permite avanzar hacia una mutualización de las deudas) finalmente llegaron a apagar el incendio, aunque sin resolver los problemas de fondo. La reactivación sigue tímida, la crisis de confianza hacia la zona permanece.

¿Qué hacer hoy? Hay que organizar una conferencia de los países de la zona euro sobre la deuda, tal como la hubo en la posguerra y de la que se benefició en especial Alemania. Se trata de alivianar el conjunto de las deudas públicas, a partir de un sistema de distribución basado sobre los aumentos que se produjeron desde la crisis. En un primer momento, todas las deudas superiores al 60% del PBI podrán incluirse en un fondo común, con una moratoria sobre los reintegros, hasta que cada país haya recobrado una sólida trayectoria de crecimiento en relación con 2007. Todas las experiencias históricas lo muestran: más allá de cierto umbral, no tiene ningún sentido pagar deudas durante décadas. Más vale aliviarlas en forma clara para invertir en el crecimiento, incluso desde el punto de vista de los acreedores.

Un proceso de tal magnitud requiere un nuevo gobierno democrático, que evitará que vuelvan a suceder desastres como esos. En concreto, la implicación de los contribuyentes y de los presupuestos nacionales necesita que se instaure un Parlamento de la zona euro, que estará integrado por diputados provenientes de los Parlamentos nacionales, en proporción con la cantidad de población de cada país y con los distintos grupos políticos, y que resolverá las decisiones presupuestarias y financieras que involucren directamente la zona euro, en primer lugar el MES, el control de los déficits y la reestructuración de deudas.

También debemos confiar a esta Cámara el voto de un impuesto común a las empresas, sin lo cual el *dumping* fiscal y los escándalos tipo *LuxLeaks*[9] seguirán ocurriendo. Así se podrá financiar un plan de

inversión en infraestructura y universidades, lo que, en particular, dotará de manera más adecuada al programa Erasmus.[10] Europa tiene todas las cartas para ofrecer el mejor modelo social del mundo: ¡basta de echar a perder nuestras oportunidades!

En el futuro, la decisión del nivel de déficit público deberá también resolverse dentro de este nuevo marco. Algunos alemanes tendrán miedo de verse en minoría en un Parlamento de ese tipo, y querrán regirse por la lógica de criterios presupuestarios automáticos. Pero precisamente reglas rígidas como esas, que eluden los mecanismos democráticos, nos llevaron al borde del abismo, y es tiempo de romper con esta lógica. Si Francia, Italia y España (alrededor del 50% de la población y del PBI de la zona euro, contra apenas más del 25% para Alemania) formulan una propuesta específica, deberá hallarse un punto intermedio de acuerdo. Y si Alemania lo rechaza con obstinación, lo que es poco probable, entonces los discursos antieuro serán muy difíciles de refutar. Antes de llegar al plan B –el de la extrema derecha–, que la extrema izquierda está cada vez más propensa a esgrimir, empecemos por darle una real oportunidad a un verdadero plan A.

---

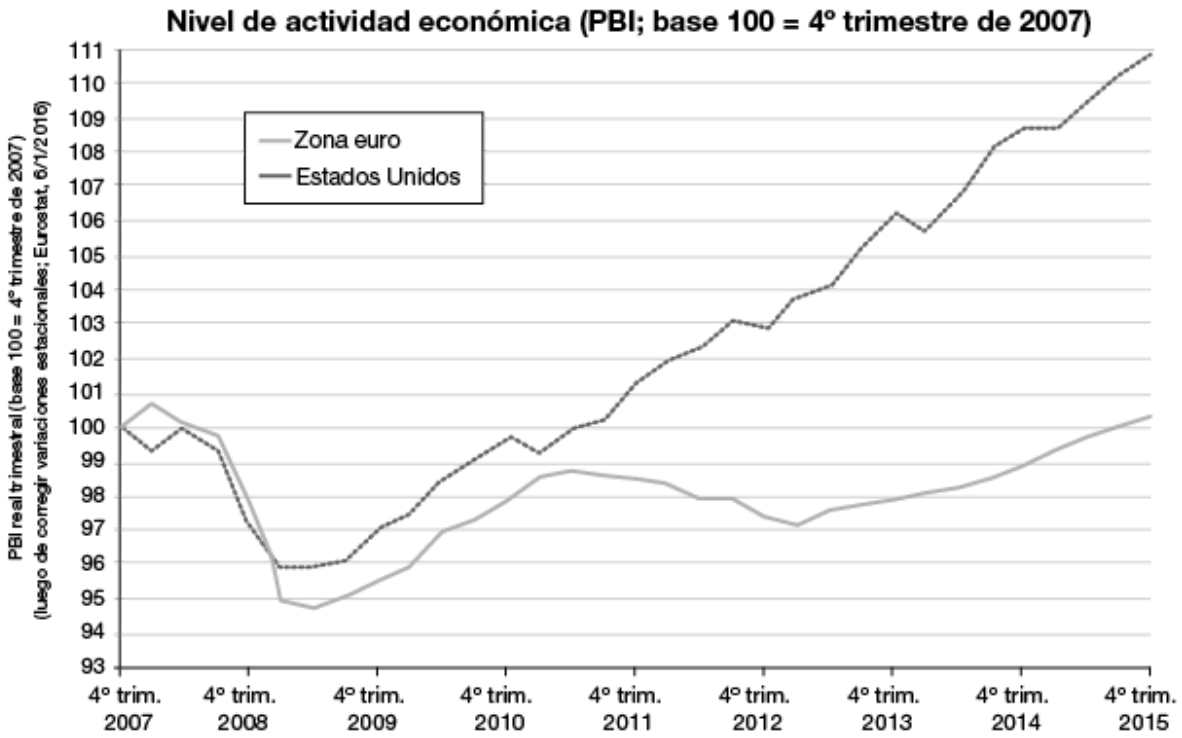
[8] Según su sigla inglesa. Véase además la crónica "Por un núcleo duro europeo". [N. de E.]
[9] Véanse la nota 5 y la crónica "La hipocresía europea frente a los paraísos fiscales: *LuxLeaks* y *Panama Papers*". [N. de E.]
[10] Véase la crónica "La doble condena de las clases populares".

2007-2015: la larga recesión de la zona euro

8 de enero de 2016

En estos comienzos de 2016, es útil analizar con detenimiento la situación económica de la zona euro, sobre la base de los últimos datos publicados por Eurostat. Esto permitirá también responder a varias preguntas que plantearon los seguidores de mi blog luego de que publiqué la crónica "Cambiar Europa ahora".

Primero comparemos la situación de los países de la zona euro, considerados en conjunto, con la de los Estados Unidos.



Se constata en principio que la "gran recesión" del período 2007-2009, en un comienzo provocada por la crisis estadounidense de las hipotecas *subprime* y la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, tuvo aproximadamente

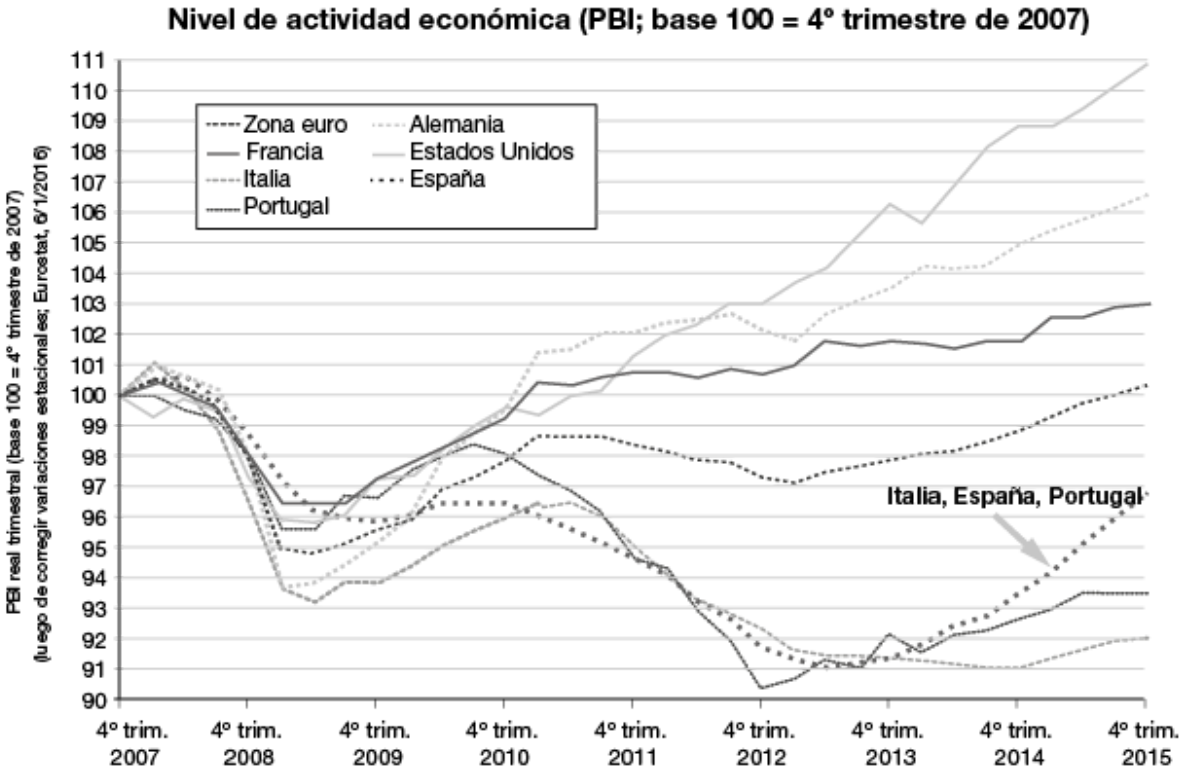
la misma amplitud en Europa y los Estados Unidos. A ambos lados del Atlántico, el nivel de actividad económica cae en alrededor del 5% entre finales de 2007 y comienzos de 2009, y eso la vuelve la recesión mundial más grave desde la crisis de la década de 1930.

El repunte comienza durante 2009, y el nivel de actividad recupera a finales de 2010 y comienzos de 2011 casi el mismo nivel que tenía al concluir 2007. Se produce entonces entre 2011 y 2013 una nueva caída de la actividad en la zona euro, mientras que la reactivación avanza sin obstáculos en los Estados Unidos. A comienzos de 2013, el crecimiento se reanuda tímidamente en Europa, pero el daño está hecho: a finales de 2015, el PBI de la zona euro todavía no ha superado su nivel de finales de 2007, mientras que los Estados Unidos han tenido un crecimiento acumulado de más del 10% entre 2007 y 2015. Si se tiene en cuenta el crecimiento demográfico –lento pero positivo, especialmente en Francia–, no caben dudas de que el nivel de PBI por habitante en la zona euro durante el ejercicio 2016-2017 será inferior a lo que era en 2007: en cierto modo una década perdida, algo jamás visto desde la Segunda Guerra Mundial.

Las causas de la recaída europea de 2011-2013 son muy conocidas ahora: los Estados Unidos dieron pruebas de una relativa flexibilidad presupuestaria para mantener el rumbo hacia el crecimiento; en cambio, entre 2011 y 2013, los países de la zona euro intentaron reducir los déficits demasiado rápido –en Francia, en particular, con pesados aumentos impositivos–, lo que llevó a estancar la reactivación, aumentar el desempleo y, por último, a acrecentar los déficits y la deuda pública, que se pretendía reducir.

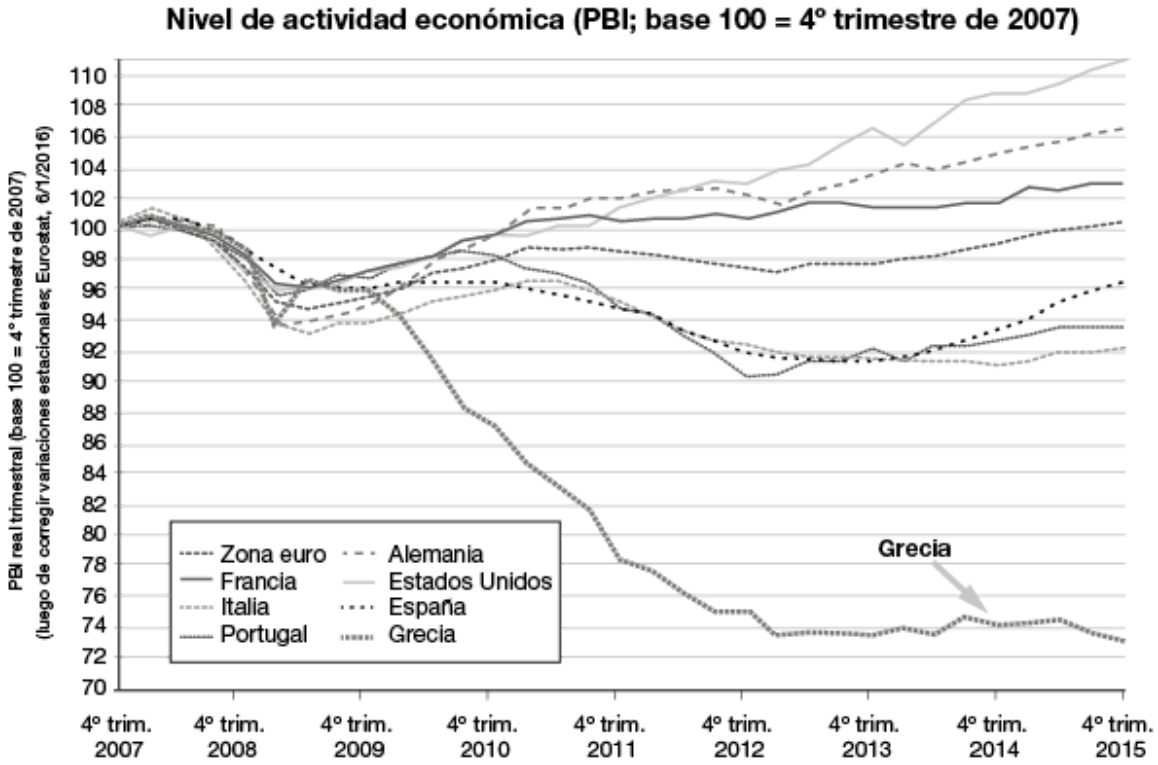
¿Por qué los europeos se organizaron tan mal, y transformaron así una crisis proveniente del sector financiero privado estadounidense en una crisis europea duradera de la deuda pública? Sin dudas las instituciones de la zona euro no estaban concebidas para campear semejante temporal. Para funcionar, una moneda única debe apoyarse en un sustrato social y educativo común, en sistemas de impuestos y tasas de interés coordinados. Sin embargo, tal como vimos, eso no se dio. Sin dudas también, y sobre todo, la escalada de mezquindades nacionales impidió que los europeos adaptaran sus políticas e instituciones. En concreto, cuando los mercados financieros comenzaron a especular con la deuda de los países del sur de Europa, a partir de los años 2010 y 2011, Alemania y Francia se beneficiaron con tasas de interés históricamente bajas, y se lavaron las manos respecto del sur de la zona, el cual se hundía en la recesión.

Desde este punto de vista, el gráfico siguiente resulta edificante:



Se constata que el promedio de la zona euro oculta realidades muy distintas según cada país integrante. Mientras Francia y Alemania consiguieron una salida relativamente mejor (aunque con un perceptible retraso de crecimiento respecto de los Estados Unidos), la cura de austeridad, la explosión de las tasas de interés y la crisis de desconfianza hacia el sector financiero hicieron estragos en Italia, España y Portugal.

Desde luego, el caso más extremo es el de Grecia, cuyo nivel de actividad económica es todavía hoy un 25% más bajo de lo que era en 2007.



¿Qué hacer hoy en día? No voy a retomar aquí los argumentos esgrimidos en "Cambiar Europa ahora": conferencia de los países de la zona euro para decidir una moratoria de pagos y un proceso de reestructuración de deuda (tal como hubo en Europa en la década de 1950 y que benefició especialmente a Alemania); renegociación del tratado presupuestario de 2012 para introducir por fin democracia y justicia fiscal. Lo que es seguro, y que algunos gráficos ilustran de modo bastante claro, es que no tiene sentido alguno pedirles a países cuyo nivel de actividad es inferior en un 10 o 20% a lo que era diez años atrás que se desprendan de excedentes primarios equivalentes al 3 o al 4% del PBI. Sin embargo, eso es lo que las instituciones de la zona euro, sostenidas por Alemania y Francia, siguen pidiendo a Grecia, Portugal y al sur de Europa (como por desgracia se confirmó durante la catastrófica cumbre europea del 4 de julio pasado, que no hizo más que postergar la reestructuración de las deudas, y que mantuvo objetivos poco realistas de excedentes presupuestarios decretando, a la vez, una liquidación masiva de activos públicos griegos a precios que serán forzosamente viles dada la actual coyuntura).

Por el contrario, hoy en día la prioridad absoluta debería ser decretar una moratoria de la deuda mientras la actividad y el empleo no hayan recuperado

un nivel adecuado. Si a esto se suma que hará falta la movilización de todos, en especial del sur de Europa, para mostrarnos unidos y cooperativos frente a la crisis de los refugiados, entonces la estrategia europea actual roza el suicidio y la irracionalidad colectiva.

Por un núcleo duro europeo

14 de mayo de 2016

Refugiados, deudas, desempleo: la crisis europea parece interminable. Para una parte creciente de la población, la única respuesta comprensible es la del repliegue nacional: salgamos de Europa, volvamos al Estado-nación y todo irá mejor. Frente a esta promesa ilusoria pero que tiene el mérito de ser clara, el campo progresista no hace más que aportar tergiversaciones: por cierto, la situación no es magnífica, pero hay que persistir y esperar que las cosas mejoren y, de todas maneras, es imposible cambiar las reglas europeas. Esta estrategia mortífera no puede durar. Es hora de que los principales países de la zona euro retomen la iniciativa y propongan la constitución de un núcleo duro capaz de tomar decisiones y renovar nuestro continente.

Hay que empezar por desechar la idea de que el estado de la opinión impediría tocar los tratados europeos. ¡Visto que la opinión pública aborrece la Europa actual, no cambiemos ni un ápice! El razonamiento es absurdo y, en especial, es falso. Seamos claros: rever el conjunto de los tratados firmados por los veintiocho países para instituir la Unión Europea, en especial el tratado de Lisboa de 2007, es sin dudas prematuro: el Reino Unido y Polonia, para sólo citar dos, tienen prioridades que no son las nuestras. Pero esto no implica que haya que quedarse de brazos cruzados. En paralelo con los tratados existentes, es totalmente posible refrendar un nuevo tratado intergubernamental entre los países de la zona euro que lo deseen.

La mejor prueba al respecto es que ya se hizo entre 2011 y 2012. En pocos meses, los países de la zona negociaron y ratificaron dos tratados intergubernamentales que tenían fuertes consecuencias presupuestarias: uno instituía el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES), fondo provisto de 700 000 millones de euros, que permitía socorrer a los países de la zona; el

otro, el Tratado sobre la Estabilidad, Coordinación y Gobierno (TSCG) de la zona euro –también conocido como Pacto Fiscal Europeo–, fijaba las nuevas reglas presupuestarias y las sanciones automáticas aplicables a los países miembros.

El problema es que estos dos tratados sólo agravaron la recesión y la deriva tecnocrática de Europa. Los países que soliciten el apoyo del MES deben firmar un *Memorandum of Understanding* [Memorándum de Entendimiento] con los representantes de la famosa Troika (art. 13 del tratado MES). Dicho en pocas palabras: así se dio a un puñado de tecnócratas de la Comisión Europea, BCE y FMI, a veces competentes, otras no tanto, el poder de supervisar la reforma de los sistemas de salud, retiro, impuestos, etc., de países enteros, todo esto en el marco de la mayor opacidad y sin control democrático.

En cuanto al TSCG (art. 3), fija un objetivo muy poco realista de déficit estructural máximo del 0,5% del PBI. Aclaremos que se trata de un objetivo de déficit secundario (luego de los intereses de la deuda): apenas suban las tasas de interés, traerán aparejados enormes excedentes primarios, del 3 o el 4% del PBI para todos los países que hayan acumulado deudas importantes luego de la crisis; es decir, casi toda la zona, y esto durante décadas. De paso nos olvidamos de que Europa se construyó durante la década de 1950 sobre la condonación de deudas pasadas (para especial beneficio de Alemania), y que estas opciones políticas permitieron poner la mira en el crecimiento y las nuevas generaciones.

Agreguemos que este hermoso edificio –MES y TSCG– está ubicado debajo de la autoridad del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, que se reúne a puertas cerradas y que nos anuncia también –como en forma manifiesta se hizo costumbre– que Europa está salvada, y entretanto nos damos cuenta de que ni un solo ministro sabe qué decisiones se tomaron. ¡Qué éxito para la democracia europea del siglo XXI!

La solución se impone: hace falta una revisión crítica de estos dos tratados para brindar a la zona euro verdaderas instituciones democráticas, aptas para tomar decisiones claras luego de deliberaciones a la luz del día. La mejor opción sería la constitución de una Cámara Parlamentaria[11] de la zona euro, que también podría votar un impuesto común para las empresas y un presupuesto de la zona que permita invertir en infraestructuras y universidades.

Ese núcleo duro europeo estaría abierto a todos los países, pero nadie debería estar en condiciones de obstaculizar a aquellos que desean avanzar más rápido. En concreto, si Francia, Alemania, Italia y España, que en conjunto representan más del 75% de la población y del PBI de la zona euro, llegan a un acuerdo, este nuevo tratado intergubernamental debe entrar en vigencia.

Podemos tener gran certeza de que en una primera etapa Alemania sentirá miedo de ser minoría en esta cámara. Pero no podrá rechazar abiertamente la democracia, a menos que prefiera arriesgarse a afianzar de manera irremediable la facción antieuro. Sobre todo, este nuevo sistema constituye una propuesta equilibrada: abrimos la vía a condonaciones de deuda, pero simultáneamente obligamos a aquellos que quieren aprovecharlo –como Grecia– a someterse en el futuro a la ley de la mayoría. Una solución consensuada está al alcance de la mano, con tal de que dejemos a un lado conservadurismos y egoísmos nacionales.

---

[11] Véase la crónica "Cambiar Europa ahora".

Acerca de la situación migratoria en Europa

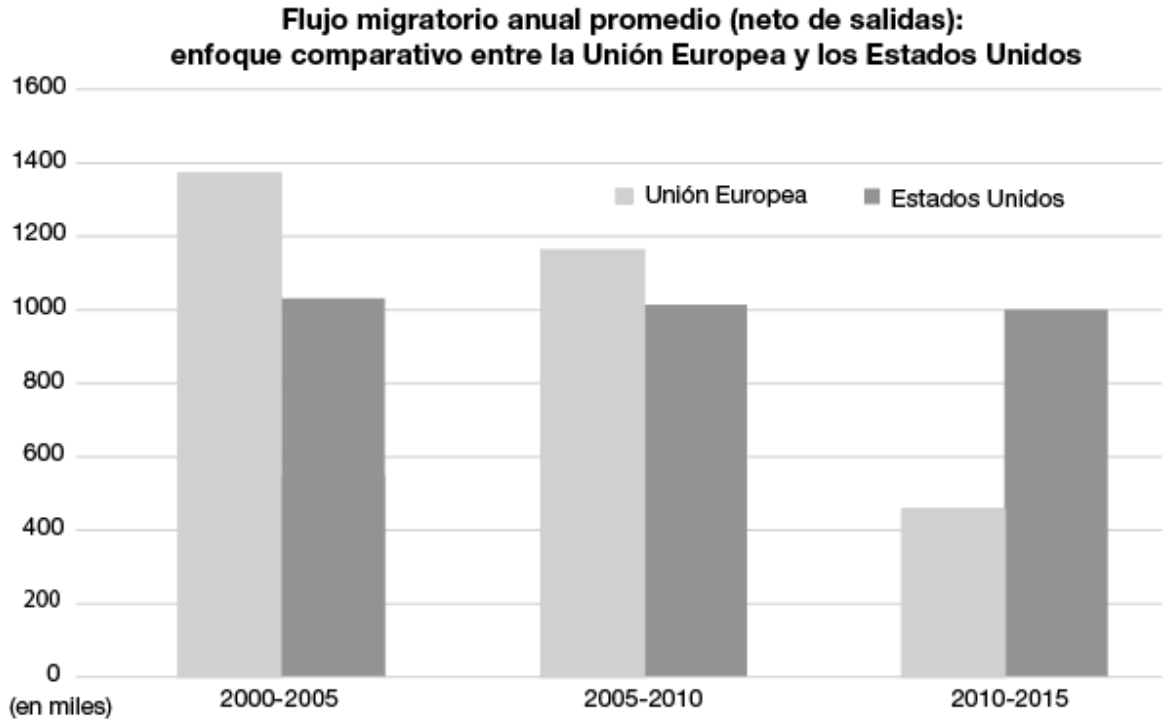
31 de marzo de 2016

Mientras la juventud francesa se manifiesta contra el desempleo y la flexibilización laboral, y François Hollande acaba de renunciar a su siniestra negación de nacionalidad, los refugiados se apiñan por docenas de miles en Grecia, a la espera de ser devueltos por la fuerza a Turquía. No nos equivoquemos: estas diferentes realidades dan testimonio del mismo fracaso de Europa frente a la crisis económica y en la reedición de su modelo de creación de empleos, integración y progreso social.

Lo más triste es que Europa tendría todos los medios para mostrarse más receptiva y a la vez reducir el desempleo. Para convencernos, es útil darnos una vuelta por las estadísticas migratorias (lo que también me permitirá contestar algunas preguntas de los seguidores del blog sobre mi crónica "¿Europa se está volviendo islamofóbica?", incluida en este libro).

Para comenzar, aclaremos que es difícil medir los flujos migratorios y que las estimaciones disponibles son imperfectas. Con todo, los mejores datos disponibles a escala mundial, reunidos por la ONU dentro del marco de las *World Population Prospects* publicadas a finales de 2015, permiten corroborar algunas magnitudes (véase siguiente cuadro).

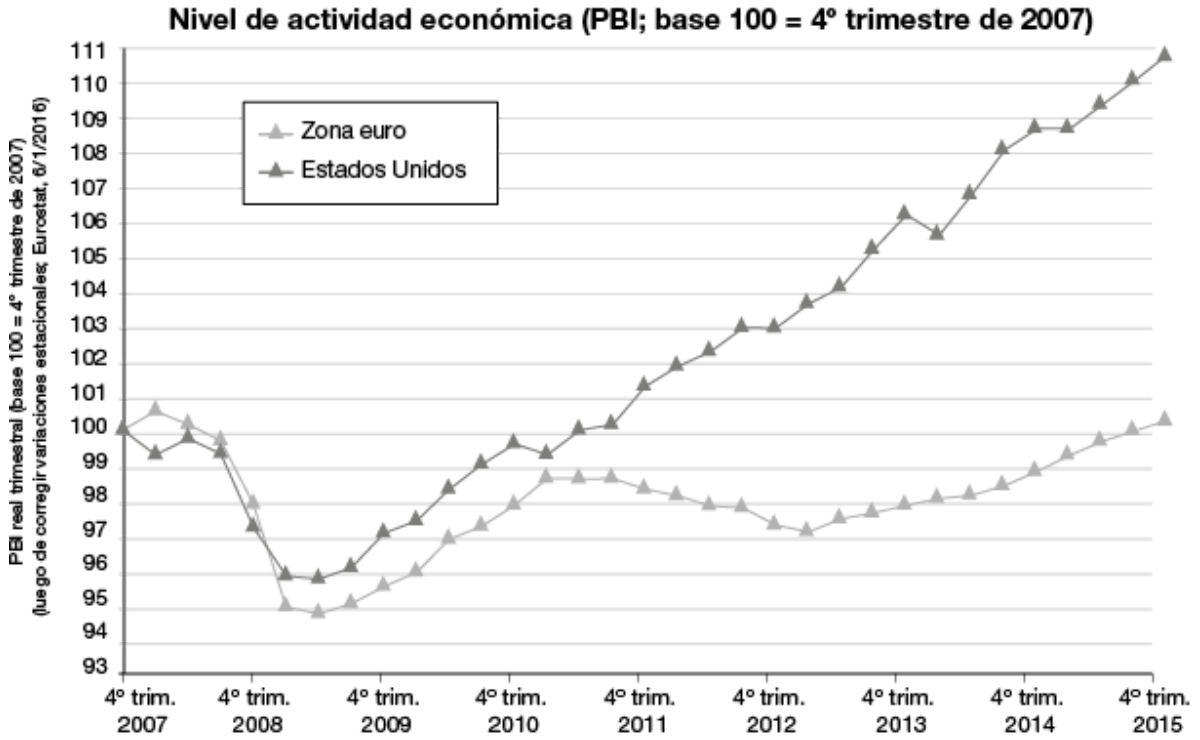
En principio, constatamos que los flujos migratorios que ingresan a la Unión Europea (neto de salidas) rondan los 1,2 millones de personas por año en promedio entre 2000 y 2010. El número puede parecer enorme, pero, si se lo relaciona con una población total de más de 500 millones, sólo representa un 0,2% anual. En esa época no lejana, la Unión Europea era la región de mayor apertura en el mundo (el flujo migratorio en los Estados Unidos era de alrededor de un millón anual), y esto no suponía problemas graves: el empleo aumentaba y el desempleo bajaba en Europa, al menos hasta que estalló la crisis financiera en 2008.



Fuente: ONU, *World Population Prospects. The 2015 Revision. Key Findings and Advance Tables.*

Esta crisis, y sobre todo las políticas de austeridad calamitosas aplicadas en Europa para contenerla, provocó una recaída absurda de la actividad en el período 2011-2013,[12] lo que explica el aumento del desempleo y la xenofobia en nuestro continente; su consecuencia es una reducción de los flujos migratorios a un tercio de su magnitud previa: alrededor de 400 000 por año entre 2010 y 2015 según la ONU. Todo esto se produjo en el momento mismo en que la evolución de la situación geopolítica en Medio Oriente y la de la crisis de los refugiados exigían una Europa más abierta.

Paradoja adicional: los Estados Unidos, a pesar de haber generado la crisis de 2008, supieron dar pruebas de flexibilidad presupuestaria para reactivar su economía y mantuvieron un flujo migratorio anual de alrededor de un millón de personas entre 2010 y 2015 (aunque fueron mucho más cerrados que Europa ante los refugiados sirios y las poblaciones de confesión musulmana en general).



Si se examina la distribución del flujo migratorio dentro de la Unión Europea, ahí también se constata la crisis. Si se promedia el período 2000-2015 completo (casi un millón de inmigrantes por año en promedio), se observa una distribución equilibrada hasta cierto punto: cada uno de los cinco grandes países (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España) recibe entre 100 000 y 200 000 inmigrantes por año. Pero mientras Alemania era relativamente poco abierta entre 2000 y 2010, pasó a liderar el grupo entre 2010 y 2015; en cambio, el flujo se hacía negativo para España. En total, para el período 2000-2015, Italia, España y el Reino Unido tuvieron la mayor apertura, seguidos por Alemania y Francia.

Los datos de la ONU son incompletos y no consideran las entradas de 2015: se carece de perspectiva al respecto, pero se sabe que alcanzaron niveles extremadamente elevados. Un millón de refugiados entraron en Alemania en un solo año, según el gobierno local, 400 000 pedidos de asilo se formularon ante ese país en 2015, según Eurostat. Lo que es seguro es que estos flujos, por importantes que sean, no resultan tan excepcionales, como se cree a veces, con respecto a los flujos migratorios observados entre 2000 y 2010.

La conclusión se cae de madura: si Europa, y en particular la zona euro –liderada por Alemania y Francia– implementara una mejor política (moratoria

para las deudas públicas, reactivación económica, inversión en educación e infraestructura, impuesto común a las grandes empresas, Parlamento de la zona euro), entonces nuestro continente tendría todos los medios para mostrarse más receptivo y no tendría que entablar un acuerdo indigno con Turquía.

---

[12] Véase la crónica "2007-2015: la larga recesión de la zona euro".

Parte II. Francia

La urgencia de acabar con la hipocresía ante las desigualdades y aplicar soluciones progresistas

La verruga de François Hollande

6 de octubre de 2014

Si el gobierno no hace nada, el crédito de impuesto para la competitividad y el empleo (CICE)[13] quedará como el símbolo del fracaso de este quinquenio. Una verdadera verruga que expone hasta el grotesco la incapacidad del poder vigente para encarar una reforma ambiciosa de nuestro modelo fiscal y social, poder que se conforma con agregar capas de complejidad a un sistema que ya tiene demasiadas. A François Hollande y Manuel Valls les gusta describirse como valientes reformadores, tenaces "socialistas de la oferta",[14] que han emprendido un combate de titanes frente a la vieja izquierda. Estas posturas son ridículas. La verdad es que no llevan adelante ninguna reforma de fondo y sólo están acumulando improvisaciones y parches caseros, tanto en la fiscalidad como en las asignaciones sociales y la competitividad. Todavía se puede actuar y cambiar el rumbo de las cosas, especialmente en cuanto al CICE. Pero hay que hacerlo ya, este otoño. Luego será demasiado tarde.

Recapitulemos un poco. El peso de los aportes patronales que gravan el salario en Francia es excesivo. Urge aliviarlos, no para beneficiar a las empresas, sino porque no es justo ni eficaz que el financiamiento de nuestro modelo social recaiga excesivamente sobre la masa salarial del sector privado. De hecho, cuando se compara a Francia con los países que disponen de un Estado social de similar envergadura, nuestra principal particularidad es el peso de las cargas patronales. La tasa global supera el 40%,[15] compuesto en partes iguales por pensiones y fondos de desempleo, por un lado, y asignaciones sociales (salud, familia, construcción, educación, etc.), por otro lado. Llegado cierto momento, esta segunda mitad debería transferirse sobre bases tributarias más amplias y justas.

Para la derecha, la medida correcta es aumentar de manera indefinida el IVA. Pero el precio resultará muy oneroso para los más vulnerables. La única otra solución es la contribución social generalizada (CSG) progresiva: hay que gravar de la misma manera todos los ingresos (salarios del sector privado, sueldos del sector público, pensiones y jubilaciones, rentas patrimoniales) con una escala progresiva en función del nivel de ingreso global.[16]

Al no haber dado este debate antes de las elecciones, la izquierda en el poder se ve obligada a una constante improvisación. Al asumir la presidencia, en el verano europeo de 2012, Hollande comienza por anular las reducciones de cargas patronales que su antecesor acababa de implementar. Seis meses más tarde, pone en marcha el CICE. Esto no le impide decidir una nueva suba del IVA, pese a haberla descartado antes de las elecciones. Implementar el CICE, que sigue siendo el meollo de la política económica del gobierno, le permite a Hollande desmarcarse de su antecesor. El problema es que esta ridícula operación comunicacional representa una enorme cantidad de dinero público.

La presidencia, el gobierno y la tecnoestructura se pasan la pelota unos a otros, explicando que siempre será posible volver al punto de partida al reemplazar el CICE mediante una perenne reducción de aportes patronales. Cada uno reconoce por lo bajo la ineficacia del CICE, pero todo está trabado. En verdad nada se hará si, desde este otoño, Hollande no encara la tarea de extirpar la verruga que él mismo ha hecho crecer. El CICE que se abonará en 2015 sobre la base de los salarios pagados en 2014 ya constituye una deuda, y por lo tanto es demasiado tarde para anularlo. Para suprimir el dispositivo fiscal al 1º de enero de 2016 y reemplazarlo con reducciones de aportes que entren en vigor durante ese año, es necesario que antes de que termine 2014 se apruebe la medida en el Parlamento. En su defecto, nada cambiará hasta 2017 (es poco probable que una modificación entre en vigor el 1º de enero de 2017, apenas unos meses antes de las elecciones).

Respecto de este tema, como también de otros –y principalmente para Europa–, todavía se está a tiempo de salvar este quinquenio. Si Francia e Italia formularan por fin propuestas de unión política y presupuestaria –en especial si se crease un Parlamento de la zona euro, con competencia para votar un plan de reactivación y el nivel común de déficit–, entonces para Alemania sería muy difícil seguir rechazando semejante perspectiva

democrática europea. Pero sobre estos temas hay que intervenir enseguida; si no, Hollande habrá perdido del todo la capacidad de acción.

---

[13] El *crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi* es una medida del gobierno de Jean-Marc Ayrault que se propone dar apoyo a las empresas francesas. Entró en vigor en enero de 2013. [N. de T.]

[14] La expresión "socialismo de la oferta" fue utilizada por François Hollande en un discurso el 13 de noviembre de 2012 para definir su estrategia económica: "Existieron siempre dos concepciones, una productiva –incluso era posible hablar de un socialismo de la oferta– y una concepción más tradicional en la cual se hablaba de un socialismo de la demanda. En la actualidad, debemos esforzarnos para que nuestra oferta se consolide, sea más competitiva". [N. de E.]

[15] Véase la crónica "¡Rápido: un poco de acción!", incluida en Thomas Piketty, *La crisis del capital en el siglo XXI. Crónicas de los años en que el capitalismo se volvió loco*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2015, pp. 190-192.

[16] Creada en 1991, la CSG es un impuesto que grava la renta y sirve para financiar parte de los fondos de la seguridad social. Deben pagarlo las personas físicas domiciliadas en Francia, mediante una retención en la fuente que se hace a la mayor parte de rentas y varía según el tipo de esta y de la situación del interesado. Véase la opinión de Piketty en las crónicas "¿Hay que aplicar un impuesto al valor agregado?" y "El Partido Socialista hace la 'plancha' fiscal", incluidas en *La crisis del capital en el siglo XXI*, ob. cit., pp. 26-31. [N. de E.]

Otra reforma fallida: los aportes de los trabajadores

18 de marzo de 2015

Con el bono por actividad, el gobierno está por firmar una de las reformas más fallidas del quinquenio, cabeza a cabeza con el crédito de impuesto para la competitividad y el empleo (CICE).[17] En ambos casos encontramos la misma mezcla de improvisación, incompetencia y cinismo, esta vez en perjuicio de los asalariados. Por su rechazo de cualquier reforma fiscal ambiciosa, el gobierno se encerró en malas soluciones. La buena noticia es que el dispositivo todavía puede mejorarse, si es que los diputados socialistas dejan de funcionar como "escribanía" que sólo avala las decisiones del Ejecutivo.

¿De qué se trata? Con la prima por actividad, el gobierno busca fusionar dos políticas: la prima para el empleo (PPE) y el ingreso de solidaridad activa (RSA), ambos destinados a complementar el ingreso mismo de los trabajadores de bajos salarios, pero tanto una como otra funcionan muy mal.

La ventaja de la PPE es que es automática: el asalariado la cobra tan pronto como cumple las condiciones de salario y de situación familiar (y tilda la casilla correspondiente a la declaración de ingresos). El problema es que somos el único país desarrollado que no generalizó la retención en la fuente y que, por lo tanto, administra el impuesto sobre el ingreso con un año de atraso; así, la PPE también se abona con un año de atraso. Después de aumentarla a comienzos de la década de 2000, los sucesivos gobiernos congelaron la escala de la PPE desde 2008, lo que les permitió ahorrarse millones a costa de los bajos salarios.

El RSA presenta los problemas inversos. Creado en 2009 para incitar a quienes perciben el ingreso mínimo de inserción (RMI)[18] a tomar un empleo de bajo salario, es administrado por las cajas de asignaciones

familiares que, en principio, pueden ajustar el monto cada trimestre. Pero la mayoría de los asalariados incluidos no lo solicitan porque el procedimiento es tan complejo como estigmatizante. Según estimaciones oficiales, apenas un tercio de los asalariados involucrados cobran efectivamente el RSA que les corresponde. Esta denegación de derechos permitió también a los sucesivos gobiernos ahorrar a costa de los más vulnerables, en medio de la indiferencia generalizada.

¿Qué propone ahora el gobierno? A grandes rasgos, suprimir la PPE y reemplazar el conjunto por una prima de actividad que funcionaría como el actual RSA. Dicho de otra manera, el gobierno eligió generalizar un sistema cuya tasa de utilización es ridículamente baja. Sabe con claridad que millones de humildes asalariados no cobrarán nada, lo integra en sus cálculos y sigue su camino.

¿Qué habría que hacer? Como mínimo, comenzar por reemplazar, para los asalariados cuya prima de actividad sea inferior a la contribución social generalizada (CSG)[19] y con retenciones en la fuente, la prima de actividad por una reducción de la CSG y deducciones. De esta manera, todos los salarios involucrados dispondrán de una suba del salario neto mensual, y desaparecerán todos los problemas de no utilización.

Tomemos un ejemplo concreto que afecta a millones de personas. Un asalariado empleado con el salario mínimo interprofesional de crecimiento (SMIC)[20] de tiempo completo dispone de un salario bruto de alrededor de € 1460 por mes, de los cuales hay que deducir más de € 300 en CSG y cargas sociales (alrededor de un 22% del salario bruto total); de estos, casi € 120 van sólo para la CSG (8% del salario bruto); así, el salario neto efectivamente cobrado es de € 1140. Con la prima de actividad, un asalariado soltero en SMIC de tiempo completo cobrará € 130 por mes de prima de actividad (sólo si la solicita).

¿Cuál es el sentido de, cada mes, reducir en más de € 300 y de manera certera (retención en la fuente) el salario neto de quienes perciben el SMIC, para luego reponerles de manera aleatoria € 130 en concepto de prima de actividad? Sería tanto mejor reducir la CSG y las asignaciones en € 130 por mes para el salario mínimo. Además, esto permitiría dejar bien en claro que los trabajadores de bajo salario son ciudadanos como los demás, que pagan pesados impuestos (CSG, retenciones, IVA y otros impuestos indirectos), a menudo tanto más gravosos que los pagados por muchos evasores fiscales y privilegiados, y que no viven de la caridad pública y el asistencialismo.

Entonces, ¿por qué el gobierno se niega a tomar esta vía, y no instaura una tasa reducida de CSG para los que cobran bajos salarios? Esta tasa reducida existe ya para las pensiones bajas; basta con que los diputados lo decidan para que este sistema se extienda sin problemas a los asalariados. La verdad es que el gobierno teme ser llevado paulatinamente hacia la reforma fiscal que había prometido pero que decide postergar en forma indefinida; a costa de privar de su derecho a miles de modestos asalariados.

---

[17] Véase nota 13. [N. de E.]
[18] El *revenu minimum d'insertion* fue creado en 1988 con el objetivo de facilitar la inserción o reinserción de personas de bajos ingresos. Se vio reemplazado en 2009 con el RSA. [N. de E.]
[19] Véase nota 16. [N. de E.]
[20] El *salaire minimum interprofessionnel de croissance* es el salario mínimo por horas. Ningún asalariado mayor de 18 años puede recibir una remuneración inferior. [N. de T.]

La hipocresía francesa de cara al laicismo y la desigualdad

15 de junio de 2015

Francia suele presentarse como un modelo de igualdad y neutralidad religiosa. Pero la realidad, en lo que se refiere al empleo, por ejemplo, es más compleja y a veces sorprendente.

En materia de religión, como en tantos otros ámbitos, a cada país le gusta ponerse en escena dentro de grandes relatos nacionales, que ciertamente son indispensables para dar sentido a nuestro destino colectivo, pero que demasiado a menudo sirven para encubrir nuestras hipocresías. Acerca de la religión, entonces, a Francia le gusta presentarse ante el mundo como un modelo de neutralidad, tolerancia y respeto hacia las distintas creencias, sin privilegiar ninguna: un presidente nuestro jamás juraría sobre la Biblia.

La verdad es mucho más compleja. Una querella religiosa se dio entre nosotros porque una gran cantidad de escuelas confesionales católicas pasó a estar bajo la égida del sector público, en proporciones que casi no encontramos en otro país. Somos el único país del mundo que decidió cerrar las escuelas un día por semana (el jueves, de 1882 a 1972, y luego el miércoles) para dárselo al catecismo, jornada que acaba de ser reintegrada –parcialmente– al calendario escolar. Esta pesada herencia dejó huellas y ambigüedades monumentales. Por ejemplo, las escuelas privadas católicas ya existentes están financiadas en forma masiva por los contribuyentes; pero las condiciones de apertura de nuevas escuelas privadas de otras confesiones nunca quedaron claras, lo que hoy en día crea ríspidas tensiones respecto de las demandas de escuelas confesionales musulmanas. De igual manera, los cultos no reciben subvenciones oficiales, a menos que sus edificios estén construidos antes de la ley de 1905.

Y poco importa si el mapa de la práctica religiosa cambió desde entonces y en nuestros días las mezquitas están en sótanos. El reciente caso de las estudiantes musulmanas a quienes mandaron a casa porque llevaban faldas demasiado largas mostró también hasta qué extremo podía llevarse la ley sobre la prohibición de los signos religiosos ostentosos. ¿En nombre de qué tenemos permitido expresar con nuestro atuendo –por ejemplo, al usar faldas muy cortas, plisadas, cabello colorido, *T-shirts* roqueras o revolucionarias– todas nuestras convicciones, excepto las religiosas?

En verdad, fuera del rostro totalmente cubierto (que impide la identificación), y de ciertas partes del cuerpo demasiado descubiertas (indecencia que, al parecer, amenazaría la paz pública), sería juicioso dejar la elección de atuendos y accesorios a criterio de cada cual. Que el laicismo consista en tratar la religión como una opinión igual que las otras, ni más ni menos. Una opinión, o mejor dicho una creencia, que es caricaturizable como las otras, de la que uno puede burlarse, por supuesto, pero que es también expresable con el lenguaje y el aspecto. Pero sin dudas la hipocresía francesa más flagrante es nuestro rechazo a reconocer la enorme discriminación profesional que en la actualidad padecen las jóvenes generaciones de orígenes o confesión musulmanes. Una serie de estudios, realizados principalmente por Marie-Anne Valfort, acaba de demostrarlo de manera patente. El protocolo es sencillo: se envían currículos falsos a empleadores en respuesta a las miles de ofertas laborales, sólo variando el nombre y las características del currículum de manera aleatoria, y se observa la tasa de respuesta. Los resultados son desalentadores.

Si se da el caso de que el nombre tiene una resonancia musulmana y, por añadidura, el candidato es de género masculino, las tasas de respuesta se desploman abrumadoramente. Todavía peor: el hecho de haber pasado por las mejores carreras, de haber realizado las mejores pasantías, etc., casi no tiene efecto alguno sobre las tasas de respuesta recibidas por los varones nacidos en un entorno musulmán. En otras palabras, la discriminación es tanto más fuerte para quienes lograron reunir todas las condiciones oficiales del éxito, cumplir con todos los códigos salvo los que no pueden cambiar.

La novedad del estudio es que se basa en miles de ofertas laborales representativas de las pequeñas y medianas empresas (por ejemplo, empleos en contaduría). Esto explica sin dudas por qué los resultados son mucho más negativos –y por desgracia más probatorios– que aquellos obtenidos con el pequeño número de grandes empresas voluntarias, estudiadas en el

pasado. Entonces, ¿qué hacer? En principio, tomar conciencia de la magnitud de nuestra hipocresía colectiva y dar máxima publicidad a este tipo de estudios. Después, encontrar nuevas respuestas. Aplicado de manera sistemática a todos los procedimientos de reclutamiento, el currículum anónimo tal vez no sea la solución milagrosa esperada en un momento (es como si quisiéramos luchar contra el sexismo en la empresa impidiendo los encuentros espontáneos entre los sexos).

Pero esta senda no debe descartarse por completo. Podemos imaginar, por ejemplo, que este tipo de envío de currículos aleatorios sea generalizado y pueda dar lugar a penas ejemplares en acciones judiciales. En términos más generales, hay que implementar todos los medios necesarios (ayuda jurídica, etc.)[21] para que se aplique el derecho y se castigue la discriminación. Los grandes relatos nacionales y el conservadurismo ambiente no deben ser un obstáculo para la imaginación.

---

[21] La *aide juridictionnelle* es una modalidad de patrocinio legal gratuito por parte del Estado. [N. de E.]

Análisis crítico de un veto: la enmienda Ayrault-Muet y los trabajadores de bajos ingresos

31 de diciembre de 2015

El Consejo Constitucional anunció el 29 de diciembre que vetaba la enmienda propuesta por Jean-Marc Ayrault y Pierre-Alain Muet, que apunta a reducir la contribución social generalizada (CSG)[22] sobre los bajos salarios y aumentar así el neto de millones de salarios modestos. Hablemos claro: este veto, poco justificado en el fondo, resulta fácil de eludir para los parlamentarios socialistas, en teoría con el apoyo del gobierno (y si fuera necesario, sin ese apoyo).

En primer lugar, recordemos que este veto no es en forma alguna una condena a la idea misma de una CSG progresiva, contrariamente a lo que pudo haberse escrito aquí y allá. La CSG es desde siempre progresiva para los jubilados (15 millones de personas), con una tasa cero para las jubilaciones mínimas, una tasa reducida para las jubilaciones medianas-bajas, y una tasa plena para las demás, desde comienzos de la década de 1990 (un cuarto de siglo). El Consejo Constitucional siempre consideró que esto no planteaba problema alguno en cuanto a sus principios. La única condición requerida en materia de jurisprudencia constitucional es que la aplicación de las diferentes tasas debe depender del conjunto de los ingresos del hogar, no sólo de la pensión individual. Por ejemplo, si alguien cobra una pensión muy baja pero gana dividendos muy altos (caso bastante inusual en la práctica), entonces se le aplica tasa plena de CSG. Si el mismo sistema de CSG progresiva se implementa para los asalariados, no se entiende por qué la jurisprudencia constitucional sería distinta que en el caso de los jubilados.

A propósito de la enmienda Ayrault-Muet, el veto de los jueces constitucionales se funda sobre el siguiente argumento. Ya que se les da a los asalariados la posibilidad de recibir una parte de su prima de actividad como reducción de CSG, entonces no se justifica que los trabajadores no asalariados –quienes, además, para un ingreso equivalente, tienen derecho a la misma prima de actividad– no puedan beneficiarse con la misma posibilidad de CSG de tasa reducida. El argumento es poco probatorio (los no asalariados siguen teniendo derecho a la misma prima de actividad, simplemente se trata de una diferencia en el modo de liquidación), sobre todo porque los jueces constitucionales nunca se conmovieron ante el hecho de que sólo los jubilados tenían derecho a una CSG progresiva. Todo esto no es muy coherente, y es una pena que la política fiscal-social del país esté supeditada a razonamientos tan enclenques. En cualquiera de los casos, queda en claro que es muy sencillo impugnar este dictamen: basta con extender la enmienda Ayrault-Muet a los trabajadores no asalariados. En otras palabras, todos cuantos perciben bajos ingresos de actividad, asalariados o no asalariados, deberían poder beneficiarse con una tasa reducida de CSG en lugar de una parte de su prima de actividad.

Por eso, en vez de detenerse aquí, los parlamentarios socialistas deberían aprovechar esta oportunidad para extender el alcance de su reforma. En cuanto al gobierno, haría bien en ayudar a sus parlamentarios a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de bajos ingresos de este país.

---

[22] Véase nota 16. [N. de E.]

Combatir las desigualdades en Francia y en Europa

28 enero de 2016

Thomas Piketty es una de las cuarenta personalidades que el lunes 11 de enero lanzaron un llamamiento en el periódico Libération*, para realizar una primaria "de la izquierda y de la ecología" con miras a la elección presidencial de 2017. En dos semanas, el llamamiento reunió unas 70 000 firmas. Este texto integra el conjunto de los aportes al debate publicados por el colectivo Notre Primaire.*[23]

Sí, es posible combatir las desigualdades en Francia y en Europa, aquí y ahora. Contrariamente a lo que pretenden los conservadores, siempre existen alternativas entre la izquierda y la derecha, por supuesto, pero también entre diversas políticas de izquierda, todas respetables a primera vista, aunque habría que elegir entre ellas. Para redefinir una propuesta de izquierda ante la derechización dominante, como primera medida hace falta debatir a puertas abiertas, de manera exigente y rigurosa: sólo así evitaremos que luego otros se arroguen el poder de decidir.

Para combatir las desigualdades hay que seguir dos sendas: por un lado, imponer una reorientación política europea que permita salir de la austeridad y el *dumping* fiscal y social; por otro, aplicar en Francia, ya mismo, las reformas progresistas que se imponen, sin invocar la mala excusa de la inacción europea.

En primer lugar, encaremos la cuestión europea. Podemos imaginar tres grandes series de posiciones, con matices de todo tipo: la búsqueda de

políticas mejores, en el marco de las instituciones actuales; la refundación democrática y social de esas instituciones; la puerta de salida.

Primera posición: algunos creen que, dentro del marco de las instituciones europeas actuales, es posible reactivar el crecimiento y el empleo, y poco a poco mejorar la situación económica y social. Esta es la tesis del gobierno que está en funciones desde 2012, y los resultados no han sido alentadores. Sin embargo, cabe sostener que podrán lograrse mejores resultados en el futuro y que no resulta sencillo reformar los tratados.

La segunda posición, que yo sostengo, es que, si deseamos aplicar políticas de progreso social en Europa, es posible y necesario negociar el tratado presupuestario de 2012. A esto hay que sumarle sobre todo democracia y justicia. El nivel de déficit y la política de reactivación deben elegirse respetando la norma de la mayoría, en un Parlamento de la zona euro que represente a todos los ciudadanos por igual, sin aplicar criterios presupuestarios ciegos. Y debe dejarse atrás la norma de la unanimidad, de modo que se establezca un impuesto común para grandes empresas y se instaure un mínimo de justicia fiscal. Si Francia, con Italia y España (que en conjunto representan el 50% del PBI y la población de la zona euro), proponen un proyecto concreto, entonces Alemania (apenas más del 25%) deberá aceptar la negociación. Y si se niega, entonces se afianzará de modo irremediable la posición euroescéptica.

La tercera posición es precisamente la puerta de salida: se verifica el fracaso de la zona euro y se considera un contexto que permita recuperar cierta soberanía monetaria y presupuestaria. Esa posición me parece apresurada: creo que primero hay que dar una verdadera posibilidad a una refundación democrática y social de la zona euro y de la idea europea. Pero comprendo la exasperación. Este debate no debe ser un tabú para la izquierda: algunos países que se mantienen fuera de la zona euro, como Suecia y Dinamarca, aplican políticas de progreso social al menos tan eficaces como las nuestras. También tienen las mismas crisis de xenofobia: por así decir, no actúan ni mejor ni peor. No debe prohibirse debate alguno.

Detengámonos ahora en el tema de las reformas progresistas en Francia. Hay varias que pueden llevarse a cabo de inmediato, sea cual fuere el resultado de las negociaciones europeas. Como muchos ciudadanos, sigo creyendo que es posible establecer un gran impuesto progresivo sobre todos los ingresos, retenido en la fuente para mayor eficacia y reactividad, individualizado para favorecer la igualdad hombres-mujeres y la autonomía.

A su vez, ese nuevo impuesto permitiría refundar el modelo de financiamiento de la protección social, que depende demasiado de los aportes y la masa salarial del sector privado. Podría completarse con un gran impuesto progresivo sobre el patrimonio, resultante del impuesto a los bienes inmuebles y del impuesto a la riqueza, para aliviar a quienes procuran acceder a la propiedad y no a quienes ya poseen mucho. Sin embargo, en esta cuestión también existen varias posiciones posibles, que será necesario debatir. Algunos preferirán mantener el cociente conyugal, [24] otros desearán conservar las deducciones actuales, o bien la proporcionalidad de la contribución social generalizada (CSG)[25] para que no se llene de nichos fiscales de todo tipo.

Por último, se puede creer que ninguna reforma fiscal ambiciosa es factible y que pretender lo contrario sería mentir. Todas esas posiciones son respetables a priori, aunque a condición de que se presenten con precisión y claridad antes de las elecciones. Resulta inconcebible que después de estas los votantes descubran que las reformas prometidas son imposibles de llevar a la práctica, y que sólo queda aumentar el IVA, algo jamás mencionado durante el debate público previo. Esas mentiras matan la idea misma de democracia.

Más allá de la fiscalidad, otro tanto sucede en muchos otros ámbitos, que aquí sólo pueden enunciarse: educación, jubilaciones, salud, democracia social. Entre los distintos sistemas de enseñanza superior del mundo, el francés es uno de los que más tiende a acentuar desigualdades. Llegó la hora de invertir en forma masiva en las universidades y efectuar una profunda reforma, conciliando igualdad y libertad. Respecto de las jubilaciones, es posible unificar los regímenes privados y públicos para garantizar mejor los derechos de las nuevas generaciones y adaptar el sistema a la complejidad de las trayectorias profesionales. Además, los asalariados deben tener una mayor participación en las estrategias de las empresas y sus juntas directivas: es la vía que han elegido Suecia y Alemania; allí funciona mucho mejor que en Francia y podría mejorarse aún. Sobre todas estas cuestiones, se necesita debate, claridad, democracia. Es la condición para recrear la esperanza y salir de los problemas actuales.

---

[23] Véase su sitio web <www.notreprimaire.fr>.

[24] El “cociente conyugal” es una medida fiscal destinada a las parejas casadas o convivientes. Permite otorgar al cónyuge que recibe ingresos muy bajos o carece de ellos una parte de los

ingresos generados por su pareja. [N. de E.]
[25] Véase nota 16. [N. de E.]

Las reformas a la Ley de Trabajo: un gran desaguisado de improvisación y cinismo

2 de junio de 2016

Mientras las tensiones sociales amenazan con paralizar el país y el gobierno se obstina en negarse al diálogo y a la negociación, la ley laboral aparece cada vez más como lo que es: un desastre espantoso, otro más –y tal vez el más grave– en el seno de un quinquenio fallido. El gobierno querría convencernos de que lo están castigando por ser reformista y luchar solo contra todos los conservadurismos. La verdad es otra: sobre este tema como los anteriores, el poder vigente multiplica las improvisaciones, mentiras y soluciones chapuceras.

Ya hemos visto esto respecto de la competitividad. El gobierno comenzó por suprimir –de manera errada– las reducciones de aportes patronales decididos por su predecesor, antes de implementar un embrollo inverosímil, en forma de un crédito sobre el impuesto[26] que reembolsaría a las empresas parte de los aportes que pagaron un año antes; de paso, ocasiona una enorme pérdida debida a lo confuso que resulta el dispositivo y su falta de perennidad. Antes bien, había que lanzar una ambiciosa reforma del financiamiento de la protección social.

Con la ley laboral, encontramos la misma mezcla de improvisación y cinismo. El desempleo no dejó de aumentar desde 2008, lo que acarrea un millón y medio de desempleados suplementarios (2,1 millones de solicitantes de empleo de categoría a mediados de 2008, 2,8 millones a mediados de 2012, 3,5 millones a mediados de 2016). Esto ocurre porque, entre 2011 y 2013, contrariamente a los Estados Unidos y al resto del mundo, Francia y la zona euro provocaron, con su exceso de austeridad una caída absurda de la actividad, que transformó así una crisis financiera importada del otro lado del Atlántico en una interminable recesión europea.

Si el gobierno reconociera sus errores y, sobre todo, aprendiera de ellos para preparar una refundación democrática de la zona euro y de sus criterios presupuestarios, sería mucho más fácil debatir acerca de las reformas que deben implementarse en Francia.

Es tanto más lamentable en cuanto el derecho laboral habría merecido verdaderas discusiones. El recurso creciente a los contratos temporarios por parte de las empresas francesas jamás redujo el desempleo. Es tiempo de adoptar un sistema de premios y castigos que permita gravar más a los empleadores que abusen de la precarización y de los seguros de desempleo. En términos más generales, habría que restringir las contrataciones temporales a los casos que en verdad se justifiquen, y hacer de la modalidad por tiempo indeterminado la norma para las nuevas contrataciones; como contrapartida, habría que especificar las condiciones de rescisión, que muchas veces conllevan demasiadas incertidumbres, tanto para asalariados como para empleadores. Aquí se daban las condiciones para una reforma equilibrada, fundada sobre el toma y daca que el gobierno lamentablemente no fue capaz de presentarle al país.

El debate se focaliza ahora en el art. 2 de la Ley de Trabajo; este establece que los convenios por empresa pueden anteponerse tanto a los convenios por gremio como a la ley nacional, en especial para lo relativo a la organización del tiempo laboral y el pago de las horas extra. Es un tema complejo que no se presta a respuestas simples, tal como queda patente en el tamaño del proyecto de ley (588 páginas para el conjunto del proyecto, de las cuales el art. 2 ocupa 50). Es obvio que algunas decisiones muy particulares sobre descansos y horarios sólo deben tomarse en el ámbito de la empresa. A la inversa, existen otras, más estructurales, que deben zanjarse a escala nacional, sin lo cual la competencia generalizada entre empresas puede llevar al *dumping* social. Por ejemplo, los asalariados de países que no tienen legislación nacional fuerte sobre las vacaciones pagas terminan por tomar muy pocas licencias, a pesar de la progresión histórica de los salarios, lo que puede ser colectivamente absurdo.

En cuanto a los convenios por empresa, algunos creyeron que su afianzamiento al otro lado del Rin, durante la primera década del milenio, era una de las claves del éxito del modelo alemán.[27] El debate está abierto y es legítimo. Sin embargo, hay que destacar dos cuestiones. En principio, debe recordarse que el buen desempeño de Alemania en materia laboral se explica en parte por el nivel anormalmente elevado de su

excedente comercial: durante los últimos cinco años, más del 8% del PBI en promedio. En otras palabras, cada vez que Alemania produce € 100 de bienes o equipamiento, el país sólo consume e invierte € 92 en su propio territorio. Recordemos que no existe ejemplo histórico alguno de una economía de este tamaño que realice un excedente comercial tan importante y duradero.

Por cierto, esto se explica en parte por las ventajas del modelo industrial y social alemán, y en especial por su excelente inserción en los nuevos circuitos de producción de Europa Central y Oriental, que emergieron luego de la ampliación europea de la década de 2000. Pero también se explica por la excesiva moderación salarial; es probable que esta moderación se haya exacerbado con la multiplicación de los convenios por empresa y el aumento de la competencia generalizada entre centros de producción, lo que redunda en que se tome parte de la actividad económica de los vecinos. Si esta estrategia se generalizara a Europa entera, por definición estaría condenada al fracaso: ningún país del mundo podría absorber semejante excedente comercial. Esto sólo agravaría la tendencia actual, que lleva a nuestro continente a un régimen duradero de bajo crecimiento, de deflación salarial y elevado endeudamiento.

Luego, y sobre todo, uno de los puntos fuertes del modelo alemán es que se apoya sobre sindicatos poderosos y representativos. Si se tiene en cuenta la debilidad de los sindicatos franceses y de su implantación, parece ilusorio desarrollar convenios equilibrados en el ámbito de las empresas. Con estas condiciones, sería preferible reescribir el art. 2 para privilegiar los convenios por gremio. Y precisamente si se tiene en cuenta la realidad actual del sindicalismo francés, este constituye el área más pertinente y prometedora. Como bien demostraron los trabajos de Thomas Breda, los delegados sindicales brillan por su ausencia en la mayoría de las empresas francesas, no sólo en las más pequeñas, sino también en las medianas, en parte debido a la discriminación salarial que sufren. Reencontramos aquí la cultura del conflicto que le gusta a buena parte de la patronal francesa. Acaban de dejarlo en claro las palabras estúpidamente insultantes proferidas por el presidente del Movimiento de Empresas de Francia (Medef) sobre la Confederación General del Trabajo (CGT).[28]

En el norte de Europa, hace décadas que los representantes sindicales desempeñan un papel principal en las juntas directivas (un tercio de los puestos en Suecia, la mitad en Alemania), y que la patronal ya conoce los

beneficios que puede sacar de una mayor implicación de los asalariados en la estrategia de la empresa. Por otra parte, este modelo de codeterminación, elaborado luego de la Segunda Guerra Mundial, sería mejorable en el futuro: podría darse voz y voto a los asalariados en las asambleas generales de accionistas, que se convertirían en asambleas mixtas; esto permitiría nombrar a administradores que conduzcan proyectos de desarrollo propicios a ambas partes. Pero en la etapa actual, Francia está todavía muy verde en la escena de la negociación social y la democracia económica.

En líneas generales, la principal debilidad de la Ley de Trabajo es que no toma suficientemente en cuenta la debilidad sindical francesa y los medios de repararla. Peor aún: la Ley de Trabajo conlleva disposiciones pasibles de debilitar todavía un poco más a los sindicatos y sus representantes. Es el caso de las medidas sobre los referendos de empresa, presentadas en el art. 10. El objetivo es permitir a los empleadores imponer por referéndum –y en condiciones que a menudo parecen extorsivas– acuerdos que podrían haber sido rechazados por sindicatos que representen hasta al 70% de los asalariados de la empresa durante las últimas elecciones profesionales.

Se comprende que en algunos casos la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT)[29] le saque algún provecho: le permite eludir, con el 30% de los votos, a los demás sindicatos, en particular a la CGT, y negociar de manera directa un acuerdo con el empleador. Así, soslayar las elecciones profesionales –que se realizan cada cuatro años– es un retroceso en relación con los tímidos progresos democráticos que implicaron las reformas de la representación sindical. Realizadas en época reciente –el período 2004-2008–, habían otorgado por primera vez a los sindicatos que reunieran el 50% de los votos un papel fundamental para la firma de los convenios por empresa; el régimen anterior, en cambio, permitía a cada uno de los sindicatos históricos de 1945 firmar acuerdos, sea cual fuere su representación en la empresa, lo que no tuvo éxito alguno en el modelo social francés).

Todos los ejemplos extranjeros lo demuestran: la democracia económica necesita cuerpos intermedios. Y empujar a gran parte de los sindicatos y del cuerpo social francés a la protesta y la frustración no nos hará sacar a Francia de la crisis.

---

[26] Véase la crónica "La verruga de François Hollande".

[27] Véase Christian Dustmann, Bernd Fitzenberger, Uta Schönberg y Alexandra Spitz-Oener, "From sick man of Europe to economic superstar: Germany's resurgent economy", *The Journal of Economic Perspectives*, vol. 28, nº 1, invierno de 2014, pp. 167-188, disponible en <www.jstor.org/stable/43193721>.

[28] En la edición del 30 de mayo de 2016 de *Le Monde*, Pierre Gattaz calificó a los dirigentes de la CGT –la principal central gremial, fundada en 1895– de "mafiosos y terroristas" que empleaban como métodos el chantaje, la violencia y la intimidación. Véase la entrevista "Pierre Gattaz: 'Le sigle CGT est égal à chômage'", disponible en <www.lemonde.fr>. [N. de E.]

[29] La Confédération Française Démocratique du Travail es una asociación interprofesional de sindicatos laborales de Francia. [N. de T.]

Repensar el impuesto al patrimonio

12 de junio de 2016

¿Hay que suprimir el impuesto a la fortuna (ISF)? En todo caso es lo que va a proponer la mayoría de los candidatos para la elección primaria de derecha.[30] Sin embargo, será un gran error político y económico. En estos tiempos de prosperidad patrimonial, estancamiento salarial y crisis social, no es momento de hacerles concesiones a los de mayor fortuna. Hay que dedicar los débiles márgenes de maniobra a otras prioridades: aliviar la presión fiscal y social sobre el trabajo (el financiamiento de nuestra protección social se basa demasiado sobre los salarios), e invertir en educación y en investigación científica.

Sobre todo, el impuesto al patrimonio merecería una verdadera reflexión y una reforma general, que tome en cuenta no sólo el ISF, sino en especial el impuesto a los bienes inmuebles, que en Francia como en todos los países es lejos el principal impuesto al patrimonio: más de 25 000 millones de euros de recaudación contra 5000 millones para el ISF. El impuesto a los bienes inmuebles constituye una tasa extremadamente gravosa, repartida de manera injusta, para millones de personas que buscan acceder a la propiedad. Es lamentable que los responsables políticos –de derecha y a veces de izquierda– sólo tengan ojos para los contribuyentes de ISF. Al acortar las distancias entre esos dos impuestos, se podría constituir a la larga un impuesto unificado y progresivo sobre el patrimonio neto, que tenga en cuenta los bienes inmuebles, los activos financieros y las deudas. Esto aliviaría la carga fiscal de quienes tienen menos recursos y favorecería la movilidad del patrimonio.

Comencemos por recordar que en 2016 los hogares franceses poseen más de 10 billones de euros de patrimonio (neto de deudas), es decir: alrededor de € 200 000 en promedio por cada uno de los 50 millones de adultos. La distribución es muy desigual en el interior de este promedio. La mitad más

pobre de la población posee apenas el 5% del total, contra casi el 60% para el 10% más rico. Entre el 50% menos dotado en patrimonio (por debajo de los € 100 000), encontramos muchos hogares muy endeudados, a menudo con plazos cada vez más extensos, dados los precios inmobiliarios. Se observa también que la concentración de los patrimonios es extremadamente elevada dentro de cada grupo etario (por ejemplo, tiene casi tanta incidencia entre los mayores de 60 años como para la población en su conjunto).

En total, sobre los 10 billones de patrimonio neto, el patrimonio inmobiliario corresponde a casi 5 billones (6 billones para el valor bruto de las viviendas, del que hay que deducir más de un billón de préstamos hipotecarios), los activos financieros en alrededor de 4,5 billones (seguro de vida, acciones, obligaciones, depósitos y cuentas bancarias), y los activos profesionales de los independientes en más de 500 000 millones.

¿Y qué hay de los impuestos al patrimonio? El ISF afecta a los contribuyentes que disponen de más de 1,3 millones de euros de patrimonio neto, con una tasa de imposición progresiva que sube en forma gradual del 0 al 1,5% (más allá de los 10 millones). Existen múltiples exenciones y rebajas (por ejemplo, de un 30% sobre la residencia principal), y el impuesto afecta apenas al 1% de la población. Habida cuenta de la prosperidad de este grupo social (alrededor del 25% del patrimonio total está en manos del 1% más rico, o sea 2,5 billones de euros), la recaudación representa aun así un poco más de 5000 millones de euros, lo que equivale a una tasa de imposición promedio de apenas el 0,2%.

El impuesto inmobiliario sigue una lógica distinta, ya que se basa sobre el conjunto de la población que posee bienes inmuebles. La recaudación no dejó de aumentar estos últimos años y hoy supera los 25 000 millones de euros, es decir, casi el 0,5% del valor de los bienes.

En principio, el impuesto a los bienes inmuebles es proporcional (con enormes variaciones locales): cada uno paga en promedio el 0,5% (por ejemplo, € 1000 por año para una propiedad de € 200 000, y € 5000 para una de € 1 000 000). Pero como no se toman en consideración activos financieros ni deudas, el sistema en realidad es violentamente regresivo. Por ejemplo, una persona que posee una propiedad de € 200 000 y una deuda de € 150 000 (vale decir, un patrimonio neto de € 50 000) paga el mismo impuesto inmobiliario que alguien que heredó el mismo bien y que posee

además activos financieros de € 300 000 (esto es, un patrimonio neto de € 500 000).

Esta situación aberrante se debe a que el impuesto a los bienes inmuebles se creó hace más de dos siglos, así como los duros sistemas de *property tax* vigentes en los Estados Unidos y la mayoría de los países, en una época en que la principal forma adoptada por la propiedad era la de terrenos y bienes inmuebles, y en que casi no existían deudas ni activos financieros.

Ahora es tiempo de modernizar este vetusto impuesto, comenzando por unificar las tasas y bases de imposición a escala nacional (fuente adicional de injusticia); habrá que implementar también la deducción de las deudas y la consideración de los activos financieros. Al final de un quinquenio signado por el caso Cahuzac[31] y los *Panama Papers*, también será necesaria más transparencia en las declaraciones de ISF, que deberían indicar los montos de los activos financieros transmitidos a la administración por la banca nacional y extranjera; lo mismo para las declaraciones de ganancias completadas de antemano y automáticamente. Esperemos que con la futura campaña salgamos de los caminos trillados y tengamos un auténtico debate sobre la imposición al patrimonio.

---

[30] Se realizó la primera vuelta el 20 de noviembre de 2016 y la segunda el domingo 27 de ese mes. Los candidatos fueron el ex primer ministro François Fillon, el ex primer ministro y alcalde de Burdeos Alain Juppé, y el ex presidente francés Nicolas Sarkozy. Fillon se impuso con el 67,5% en la segunda vuelta frente a Juppé. [N. de E.]

[31] Tratado en la crónica "La hipocresía europea frente a los paraísos fiscales: *LuxLeaks* y *Panama Papers*", este escándalo político-financiero expuso a Jérôme Cahuzac, ministro delegado a cargo del Presupuesto, en diciembre de 2012. El sitio web Mediapart lo acusó de haber poseído fondos no declarados en una cuenta en Suiza y luego en Singapur. Véase además la crónica "2015: ¿qué impactos podrían movilizar a Europa?". [N. de T.]

¡Larga vida al populismo!

14 de enero de 2017

En menos de cuatro meses, Francia tendrá un nuevo presidente. O una presidenta: después de Trump y del Brexit, ya no puede descartarse que las encuestas se equivoquen nuevamente, y que la derecha nacionalista de Marine Le Pen se acerque (y por mucho) a la victoria. E incluso si esta vez se evita el cataclismo, hay un riesgo real de que más adelante llegue a posicionarse como única opositora creíble a la derecha liberal. Del lado de la izquierda radical, desde luego, se abrigan esperanzas en el triunfo de Jean-Luc Mélenchon; pero me temo que eso no es lo más probable.

Esas dos candidaturas tienen algo en común: cuestionan los tratados europeos y el actual régimen de competición exacerbada entre países y territorios, lo cual seduce a no pocos de quienes quedaron relegados por la globalización. También tienen diferencias esenciales: pese a una retórica que traza deslindes tajantes y a un imaginario geopolítico que a veces resulta inquietante, Mélenchon preserva cierta inspiración internacionalista y progresista.

El riesgo de estas presidenciales consiste en que las demás fuerzas políticas –y los grandes medios de comunicación– se contenten con fustigar esas dos candidaturas y ponerlas en la misma bolsa al calificarlas de "populistas". Ese nuevo insulto supremo a la política, ya utilizado en los Estados Unidos contra Bernie Sanders con el éxito que bien conocemos, acaso una vez más oculte una cuestión de fondo. El populismo no es otra cosa que una respuesta confusa (pero legítima) a la sensación de abandono de las clases populares de los países desarrollados ante la globalización y el auge de las desigualdades. Hay que contar con el respaldo de los elementos populistas más internacionalistas –esto es, de la izquierda radical encarnada en distintos sitios por Podemos, Syriza, Sanders o Jean-Luc Mélenchon, con prescindencia de cuáles sean sus límites– para formular respuestas precisas

a esos desafíos; de lo contrario, el repliegue nacionalista y xenófobo terminará por arrasar con todo.

Por desgracia, los candidatos de la derecha liberal (Fillon) y del centro (Macron) se preparan para seguir la estrategia de la negación: los dos van a defender el *statu quo* integral acerca del tratado presupuestario europeo de 2012. Ninguna sorpresa en eso: uno lo negoció y el otro lo aplicó. Todos los sondeos lo confirman: los dos candidatos seducen en especial a los que salieron gananciosos con la globalización, con matices interesantes (católicos contra *bobos*, bohemios burgueses), pero a fin de cuentas secundarios respecto de la cuestión social. Pretenden encarnar el cenáculo de la razón: cuando Francia –liberalizando el mercado de trabajo, reduciendo los gastos y los déficits, suprimiendo el impuesto a la riqueza y aumentando el IVA– haya recobrado la confianza de Alemania, de Bruselas y de los mercados, habrá llegado el momento, claro, de pedir a nuestros socios que den señales de buena voluntad frente al recorte y a la deuda.

El problema de ese supuesto discurso razonable consiste en que bajo ningún concepto es tal. El tratado de 2012 es un error colosal, que acorrala a la zona euro en una trampa mortal, en cuanto le impide invertir en el futuro. La experiencia histórica demuestra que es imposible reducir una deuda pública de esa magnitud sin acudir a medidas excepcionales. A menos que nos condenemos a excedentes primarios durante décadas, lo que genera una carga duradera sobre cualquier capacidad de inversión.

De ese modo, entre 1815 y 1914, el Reino Unido pasó un siglo deshaciéndose de enormes excedentes para reembolsar a sus propios rentistas y reducir la exorbitante deuda surgida de las guerras revolucionarias (más del 200% del PBI). Esa nefasta decisión contribuyó a que se subinvirtiese en el área de educación, con el consiguiente retroceso del país. Entre 1945 y 1955, sucede lo contrario: gracias a una mixtura de anulaciones de deudas, inflación y quitas excepcionales al capital privado, Alemania y Francia enseguida pudieron librarse de una deuda similar. Eso les permitió invertir en el crecimiento. Hoy en día habría que hacer otro tanto: imponer a Alemania un Parlamento de la zona euro para, con toda la legitimidad democrática necesaria, aliviar las deudas. Si esto no sucediese, la inversión demorada y el retroceso en la productividad ya observados en Italia terminarán por extenderse a Francia y a la zona euro entera (ya hay señales en ese sentido).[32]

Para salir de las parálisis actuales, hay que zambullirse en la historia. Así nos lo recuerdan también los autores de una *Histoire mondiale de la France*, verdadero antídoto contra las crispaciones identitarias del tan hexagonal territorio continental francés.[33] De modo más prosaico y menos reconfortante, hay que aceptar lanzarse a la primaria organizada por la izquierda del gobierno (llamémosla así, ya que no logró organizar una primaria en común con la izquierda radical, lo que por sobre todo amenaza con alejarla del gobierno largo rato). Es sustancial que esta primaria designe a un candidato que se comprometa a una profunda impugnación de las reglas europeas. Hamon y Montebourg parecen más dispuestos que Valls o Peillon a seguir esa línea, siempre y cuando dejen atrás sus posturas acerca del ingreso nacional y el *made in France*, y que por último formulen propuestas específicas para reemplazar el tratado presupuestario de 2012 (apenas mencionado en ocasión del primer debate televisivo, acaso porque cinco años atrás todos votaron a favor de él; pero precisamente esto vuelve tanto más imperativo aclarar las cosas presentando una alternativa detallada). No todo está perdido; pero si queremos evitar que el Frente Nacional se sitúe en una posición fuerte, es urgente que actuemos.

---

[32] Véase la crónica "De la productivité en France et en Allemagne", disponible en <piketty.blog.lemonde.fr/2017/01/05/de-la-productivite- en-france-en-allemagne-et-ailleurs>.

[33] Patrick Boucheron (dir.), Nicolas Delalande, Florian Mazel, Yann Potin, Pierre Singaravélou (coords.), *Histoire mondiale de la France*, París, Seuil, 2017. [Ese libro se propone seguir la historia francesa desde las cuevas de Chauvet hasta los acontecimientos de 2015, y transita las alternativas de un país que pretende encarnar al mundo entero. N. de T.]

¿Qué reformas cabe esperar para Francia?

13 de mayo de 2017

¿La elección de Macron permitirá revivir a Francia y a Europa? Nos gustaría creerlo, aunque nada está asegurado. El nuevo presidente tiene algunas buenas intuiciones, pero en conjunto su programa sigue siendo un borrador oportunista.

El proyecto más promisorio es la modernización y la unificación de nuestra asistencia social. Tanto más que en otros sitios, en Francia el sistema social se construyó en capas superpuestas de refomas. De eso resulta una gran complejidad e ininteligibilidad.

El ejemplo más extremo es el de las jubilaciones. El sistema está bien financiado, pero el enjambre de regímenes y de reglas hace que nadie comprenda cosa alguna acerca de sus derechos futuros. Es forzosa una tarea de unificación conjunta, especialmente para las generaciones jóvenes, cuyas trayectorias profesionales suelen incluir tramos que pasan por el sector público, el privado y emprendimientos propios, que deberían facultarlos a iguales derechos. Queda pendiente ponerse de acuerdo acerca de nuevas reglas comunes, el tratamiento destinado a las carreras azarosas y desgajadas entre distintos sectores, a los trabajos penosos, etc. No serán cuestiones menores, e incluso serán más acuciantes porque el punto de partida es casi la nada misma: el programa del señor Macron destina apenas una línea al tema de la unificación de las jubilaciones.

Otro proyecto principal: el seguro de desempleo (tampoco en este caso hay que perder de vista el "blanco" al cual se dirige). Según se supone, el endurecimiento de las reglas impuestas a quienes buscan empleo trae aparejados enormes (y poco verosímiles) ahorros, y la extensión de derechos a los retiros voluntarios y a los cuentapropistas es fruto de un

razonamiento errado. Antes bien, el sistema debería extenderse al sector público, donde –con la mayor de las hipocresías– se permitió el desarrollo de estatutos ultraprecarios, y los trabajadores quedan completamente excluidos del seguro de desempleo.

En cuanto al código de trabajo, ya es sabido en qué consisten las premisas para una reforma equilibrada: el esclarecimiento y la eventual facilitación de las condiciones para interrumpir un contrato por tiempo indeterminado (CDI) son inconcebibles, a menos que esta modalidad se vuelva la norma y se acote el uso del contrato temporario (CDD). Por lo demás, la descentralización a ultranza de las negociaciones salariales contribuyó al enorme excedente alemán, y no es la mejor receta para un desarrollo europeo equilibrado.

A propósito de la educación, el programa macroniano incluye una buena intuición: finalmente dar recursos adicionales genuinos a las escuelas desfavorecidas, que hasta la fecha tan sólo habían sido objeto de estigmatización. De todos modos, la medida propuesta parece hacer (demasiado) foco sobre los años iniciales de la primaria (la desigualdad de oportunidades debe combatirse al menos hasta el ciclo preuniversitario), y bajo ningún concepto es coherente con los recortes presupuestarios anunciados, con la salvedad de un significativo aumento en la cantidad de alumnos por aula en las demás escuelas. Se prevé un regreso a la nefasta semana de cuatro días –modalidad que se conoce sólo aquí y en ningún otro lugar–, lo que también es muestra de las ambigüedades del macronismo: una pizca de reformismo y una desmedida dosis de conservadurismo.

En términos más generales, cuesta encontrar una visión de conjunto para una verdadera estrategia de inversión en el ámbito educativo. Sin embargo, esta meta es crucial. Actualmente Francia tiene la mano de obra más productiva del mundo (en pie de igualdad con Alemania, y con un modelo tanto más igualitario que los Estados Unidos); pero esa posición está lejos de quedar asegurada.[34]

El país sale de una recesión de diez años –en 2017 el PBI per cápita es un 5% inferior al de 2007–, lo que acarrea una catastrófica consecuencia: la caída de alrededor de un 10% de la inversión por estudiante en la enseñanza superior. Nunca olvidemos que la población francesa está en constante avance (contrariamente a lo que sucede en Alemania), y la cantidad de estudiantes aumenta más rápido aún. Eso es algo excelente, en la medida en que se asignen los recursos adecuados.

El señor Macron es tremendamente conservador a propósito del financiamiento de la asistencia social y la fiscalidad. Pone en el candelero el aumento de la contribución social generalizada (CSG), mientras que la urgencia actual es implementar la retención en la fuente para el impuesto al ingreso (IR).

¡Y esa es una reforma que finalmente Francia se dispone a aplicar en enero de 2018, medio siglo después que los demás países, pero que ahora el señor Macron quiere posponer, iniciativa que no deja de ser llamativa al provenir de alguien que pretende modernizar el país! Esa reforma por fin permitiría acortar distancias entre el IR y la CSG, que debe volverse progresiva, ya no proporcional, para los asalariados tanto como para los jubilados y los demás ingresos.

Notoriamente el señor Macron tiene un problema con la noción misma de impuesto progresivo, ya que propone fijar una base del 30% para la imposición sobre los ingresos financieros más altos (contra el 55% sobre los ingresos laborales más altos equivalentes) y suprimir el impuesto al patrimonio para los portfolios financieros (por algún extraño motivo, imagina que una inversión financiera es forzosamente más productiva que una inversión inmobiliaria).

Por último, mencionemos la reforma en Europa. La principal meta es dar a la zona euro instituciones democráticas sólidas que permitan afrontar las crisis futuras.[35]

Cuando vuelvan a subir las tasas, cuando haga falta una legitimidad democrática fuerte para tomar decisiones difíciles sobre la reprogramación de las deudas, los problemas no se zanjarán a puerta cerrada en reuniones de jefes de Estado y de ministros de Economía y de Finanzas. Habrá que respaldarse en la deliberación pública y en la multiplicidad de opiniones presente en cada país; por ende, en una Asamblea de la unión monetaria que repose simultáneamente sobre los diputados nacionales y europeos.

La ausencia de instituciones democráticas fuertes es el riesgo más grave que amenaza a Europa. Por desgracia, nada indica que las elecciones francesas y alemanas de este año vayan a permitir superarlo.

---

[34] Véase la crónica “De la productivité en France et en Allemagne”, publicada el 5 de enero de 2017; disponible en <piketty.blog.lemonde.fr/2017/01/05/de-la-productivite-en-france-en-allemagne-et-ailleurs>. [Por lo demás, esta crónica retoma varios argumentos de “Repensar el impuesto al patrimonio”. N. de E.]

[35] Véase la crónica “À quoi ressemblerait une Assemblée de la zone euro?”, publicada el 16 de marzo de 2017; disponible en <piketty.blog.lemonde.fr/2017/03/16/a-quoi-ressemblerait-une-assemblee-de-la-zone-euro>.

Parte III. El mundo

Por otra globalización

¿El capital en Hong Kong?

3 de noviembre de 2014

Según los diccionarios, la plutocracia (del griego *plutos*, "riqueza", y *kratos,* "poder") consiste en un sistema de gobierno en que el dinero constituye la base del poder. Para analizar el sistema que el Partido Comunista de China (PCC) trata de implementar actualmente en Hong Kong, estamos tentados de crear un neologismo: el "plutocomunismo". En lo formal se autorizan elecciones libres, pero sólo entre dos o tres candidatos, que deben tener la aprobación previa de la mayoría de los miembros de un comité de nombramiento establecido por Pekín y monopolizado por los centros de negocios de Hong Kong y otros oligarcas prochinos.

En los hechos, se trata de una asombrosa combinación entre la lógica comunista de partido único (en Alemania Oriental había elecciones pero sólo entre candidatos leales al poder vigente) y las tradiciones aristocráticas y censitarias europeas (hasta 1997, la reina de Inglaterra nombraba al gobernador de Hong Kong; la democracia era directa y se fundaba sobre comités dominados por las élites económicas). En el Reino Unido tanto como en Francia, entre 1815 y 1848, una ínfima proporción de la población tenía derecho a voto: sólo los que pagaban suficientes impuestos podían votar (como si sólo pudieran votar los que pagan el impuesto francés a la fortuna –ISF–). Sin llegar tan lejos, parece que a China la tienta una vía parecida, y por añadidura con un partido único todopoderoso que guía el conjunto.

¿Cómo justificar semejante sistema? ¿Tiene algún futuro? A los comunistas chinos no les convence –y esta es una expresión bastante suave– el modelo occidental de democracia electoral y multipartidaria, basado en la competencia en todos los niveles: entre partidos, entre candidatos y, tal vez lo más importante, entre territorios. Para Pekín, lo esencial es la unidad

política del amplio territorio chino: es la condición para un armonioso desarrollo económico y social, conducido por el PCC, garantía del bien común y del largo plazo. De hecho, respecto de otros países emergentes, en especial de la India, los éxitos de China se explican en gran medida por la centralización política y la capacidad del poder público para financiar las infraestructuras colectivas, las empresas mixtas y las inversiones educativas y sanitarias, fundamentales para el desarrollo.

A pesar de las privatizaciones, el capital público todavía representa entre el 30 y el 40% del capital nacional chino, en contrapartida con el aproximadamente 25% que se observaba en Europa: los "Treinta Gloriosos".[36] Esta parte del capital público es casi nula en la mayoría de los países ricos (los activos públicos son apenas más elevados que las deudas), y hasta negativa en algunos casos (cuando la deuda pública la supera, como en Italia), en un momento en que el capital privado (expresado en años de PBI) recuperó sus cotas previas a la Primera Guerra Mundial. Visto desde Pekín, el modelo chino parece estar en las mejores condiciones para regular el capitalismo y evitar la pauperización del poder público. Esta sensación se intensifica debido a los bloqueos de la política estadounidense actual y a la impresión de que la Unión Europea atraviesa un marasmo insalvable, con un territorio fragmentado entre veintiocho pequeños Estados-nación, que compiten entre sí como posesos, empantanados en deudas públicas e instituciones comunes por completo disfuncionales, incapaces de modernizar su modelo social y de proyectarse hacia el futuro.

Sin embargo, en el seno mismo del PCC, se siente que el modelo chino actual, fundado sobre el aislamiento político y la lucha anticorrupción para limitar las desigualdades, no podrá sostenerse por siempre. En términos objetivos, causa inquietud la creciente influencia de las fortunas privadas en plena Asamblea Nacional Popular de China. En Pekín, se teme por sobre todo una evolución a la rusa, con fugas de capitales cada vez más importantes y un país saqueado desde fuera por oligarcas instalados con toda comodidad en el exterior. Se discute cada vez más la implementación de impuestos progresivos sobre sucesiones y propiedades. En principio, el gobierno chino tendrá la base suficiente para implementar los sistemas de transmisión automática de información bancaria, los registros de títulos financieros y los controles de capitales necesarios para llevar adelante dicha política.

El problema es que gran parte de las élites políticas chinas no tiene gran cosa que ganar con la transparencia sobre las fortunas, la fiscalidad progresiva y el estado de derecho. Y la facción que está preparada para renunciar a sus privilegios para dedicarse al bien público parece considerar que la unidad del país se vería irremediablemente amenazada por el ascenso de la democracia política, que, sin embargo, debería ir a la par con la llegada de la democracia económica y la transparencia fiscal y financiera. Sólo una cosa es segura: de estas contradicciones saldrá una vía única, decisiva tanto para China como para el resto del mundo. En este derrotero, las luchas que se están produciendo en Hong Kong constituyen una etapa decisiva.

---

[36] Designación usual para la época de crecimiento excepcional en Europa (los años de "*boom* económico" entre 1946 y 1975). [N. de E.]

El capital según Carlos Fuentes

1º de diciembre de 2014

En 1865, Karl Marx afirmaba que con Balzac había aprendido más que con nadie acerca del capitalismo y el poder del dinero. En 2014, estaríamos tentados de decir lo mismo, sólo que con un cambio de autores y países. En *La voluntad y la fortuna*, magnífico fresco publicado en 2008, pocos años antes de su muerte, Carlos Fuentes traza un retrato edificante del capitalismo mexicano y de la violencia social y económica que surca a su país, poco antes de convertirse en la "narconación" que en la actualidad figura en todas las primeras planas de los diarios. Encontramos también personajes pintorescos, como un presidente imbuido de comunicación corporativa de Coca-Cola y que a fin de cuentas no es más que el lastimoso locatario del poder frente a la supremacía eterna del capital, encarnada por un millonario todopoderoso, muy parecido al magnate de las telecomunicaciones, Carlos Slim, primera fortuna del mundo.

Algunos jóvenes oscilan entre resignación, sexo y revolución. Terminarán siendo asesinados por una bella ambiciosa que va a la caza de sus herencias y no necesita un Vautrin para cometer el crimen, como prueba de que la violencia subió algunos peldaños desde 1820. La transmisión patrimonial, que codician aquellos que son ajenos al círculo familiar privilegiado, y al mismo tiempo destruye las personalidades individuales de los que sí pertenecen, está en el centro de la reflexión del novelista.

Vemos también aquí y allá la influencia nefasta de los gringos, esos "norteamericanos" que –según reseña Fuentes– poseen "treinta por ciento del territorio de México" y de su capital, y hacen la desigualdad todavía más insoportable. De hecho, las relaciones de propiedad son todavía relaciones complejas, difíciles de organizar de manera pacífica en una comunidad política: nunca es demasiado simple pagar el alquiler al propietario y ponerse de acuerdo pacíficamente con él acerca de las

modalidades institucionales en torno a esta situación. Pero cuando se trata de un país entero que paga alquiler y dividendos a otro país, se vuelve en verdad cuesta arriba. A menudo se suceden ciclos políticos interminables durante los cuales las fases de ultraliberalismo triunfante y de autoritarismo se alternan con breves períodos de expropiación caótica, que minan desde siempre el desarrollo de Latinoamérica.

Sin embargo, el progreso social y democrático todavía es posible en ese continente. Más al sur, en el Brasil, Dilma Rousseff acaba de ser reelegida con lo justo gracias a los votos de las regiones más pobres y los grupos sociales más vulnerables; estos, a pesar de las decepciones y abjuraciones del Partido de los Trabajadores (en el poder desde la elección de Lula en 2002), se sienten aún muy unidos a los progresos sociales que los beneficiaron y que temían perder por el regreso de la "derecha" (en realidad, el Partido de la Social Democracia, ya que en Latinoamérica casi todo el mundo dice ser de izquierda, al menos mientras no le resulte muy onerosa a las élites). De hecho, en los últimos quince años la estrategia de inversión social implementada bajo Lula y Rousseff –con la creación de la Bolsa Família (una suerte de asignación familiar reservada a los más vulnerables) además de un aumento del salario mínimo– permitió una sensible reducción de la pobreza. Hoy en día estas frágiles conquistas sociales se ven amenazadas por los factores internacionales, que pesan gravosamente sobre la economía brasileña y la llevan hacia la recesión (caída de los precios de las materias primas, en especial del petróleo, los avatares de la política monetaria estadounidense, la austeridad europea), y más todavía por las inmensas desigualdades que desgastan el país.

Encontramos aquí el peso de la maldición de la historia, de la cual nos habla Carlos Fuentes. El Brasil es el último país en haber abolido la esclavitud, en 1888, en un momento en que los esclavos representaban todavía casi un tercio de la población, y en verdad las clases poderosas no hicieron gran cosa para revertir esta tan pesada herencia de desigualdad. La calidad de los servicios públicos y de las escuelas primarias y secundarias abiertas a las mayorías es más bien deficiente. El sistema fiscal brasileño es muy regresivo y suele financiar gastos públicos que lo son también. Las clases populares pagan impuestos indirectos muy pesados, con tasas que ascienden hasta el 30% sobre la electricidad, cuando las grandes sucesiones tienen imposiciones irrisorias del 4%. Las universidades públicas son gratuitas, pero sólo las aprovecha una minoría privilegiada. El gobierno de

Lula ha implementado unos tímidos mecanismos de acceso preferencial a las universidades para las clases populares y las poblaciones negras y mestizas (que derivaron en interminables debates acerca de los problemas planteados por la autodeclaración racial en los censos y documentos administrativos); sin embargo, su presencia en las aulas sigue siendo insignificante. Harán falta algunos combates para romper la maldición de la historia y mostrar que la voluntad política puede ganarle a la buena o mala fortuna.

Salvar los medios de comunicación en la era digital

23 de febrero de 2015

¿Se puede sacar el mejor partido de la revolución digital para refundar los medios y la democracia sobre nuevas bases? A esto nos invita Julia Cagé en un pequeño libro estimulante y optimista. Relata la secuencia histórica de la crisis actual y muestra que es posible desarrollar un nuevo modelo para los medios en la era digital, basado en compartir el poder y en el refinanciamiento participativo.[37] Ciertamente conocemos el aspecto sombrío de las recientes evoluciones. Debilitados por la caída de ventas y auspiciantes, los medios poco a poco quedan bajo la órbita de multimillonarios, a menudo a costa de calidad e independencia. Desde hace mucho se sabe que el canal televisivo TF1 pertenece al grupo Bouygues y *Le Figaro* a la familia Dassault, esta última también muy ávida de poder público y tenazmente involucrada en política.

El primer diario económico, *Les Échos*, es propiedad desde 2007 de la primera fortuna de Francia, Bernard Arnault, titular del *holding* LVMH (Moët Hennessy + Louis Vuitton). En fecha más reciente, *Le Monde* fue comprado por el trío Bergé-Niel-Pigasse y *Libération* por el dúo Ledoux-Drahi. En los sectores de bienes suntuarios, telecomunicaciones, finanzas, inmuebles: allí donde se construyen las fortunas, salen a relucir generosos accionistas dispuestos a "salvar" los diarios. El problema, nos dice Julia Cagé, es que esto lleva a una concentración del poder en pocas manos, no siempre competentes ni especialmente desinteresadas. Estos "salvadores" suelen hacer recortes de personal y tienen la enojosa costumbre de abusar de su poder.

Descontento con el reciente tratamiento que los periodistas de *Le Monde* dieron a los exiliados fiscales del escándalo *SwissLeaks*, Bergé explicaba

con toda tranquilidad que no fue para eso que les "permitió adquirir su independencia" (Beuve-Méry y las asociaciones de redactores, que no esperaron a Bergé para ser independientes, se están revolviendo en sus tumbas).[38] En *Libération*, todavía recuerdan las palabras desdeñosas del accionista Ledoux respecto de los periodistas: "Quiero tomar de testigos a todos los franceses que de su bolsillo pagan a estos tipos". Y, al mismo tiempo, todos estarán de acuerdo en que un diario vivo y maltratado vale más que uno muerto y prestigioso. Entonces, ¿qué hacer, además de lamentarnos? Primero, encuadrar la crisis actual en una perspectiva en el largo plazo. No es la primera vez que los medios deben renovarse, siempre lo lograron en el pasado: nos lo recuerda Julia Cagé, que advierte que los ingresos por publicidades en los diarios estadounidenses (expresados en porcentaje del PBI) vienen bajando desde la década de 1950.

Además, desde hace mucho tiempo existen otros modelos que permiten evitar el control de grandes accionistas sobre los diarios, con innegable éxito, como el caso de *The Guardian* (uno de los diarios más leídos del mundo, propiedad de una fundación) o el *Ouest-France* (primer diario francés en manos de una asociación sin fines de lucro). El desafío actual es volver a pensar estos modelos y adaptarlos a la era digital. La ventaja de las fundaciones y asociaciones es que los generosos donantes no pueden recuperar sus aportes (el capital es perenne) y que estos aportes no les otorgan derecho a voto. Beuve-Méry lo advertía en 1956: "Así, la ganancia consiste en poner de manifiesto la pureza de sus intenciones y quedar libres de cualquier sospecha".

El límite de este modelo es cierta rigidez: los primeros fundadores forman el directorio, luego se cooptan y se reproducen hasta el infinito. De ahí la idea de proponer un nuevo estatus: la sociedad de medios de comunicación sin fines de lucro (o el neologismo "fundacción"), intermedio entre la fundación y la sociedad por acciones. Los aportes en capital estarían congelados y no proporcionarían dividendos (como en las sociedades por acciones). Simplemente estos derechos de voto aumentarían más que en forma proporcional para los pequeños aportes en capital y, por el contrario, tendrían severas limitaciones para los principales accionistas (por ejemplo, podemos imaginar que sólo un tercio de los aportes superiores al 10% del capital daría el derecho a voto). Esto alentaría el financiamiento participativo [*crowdfunding*], superando al mismo tiempo cierta ilusión igualitarista que minó muchas asociaciones de redactores y estructuras

cooperativas en el pasado. En efecto, es esperable que la persona que aporta diez mil euros tenga más poder que la que aporta mil, y quien financia con cien mil tenga más que quien pone diez mil. Lo que hay que evitar es que las personas que aportan decenas o centenas de millones de euros tengan la concentración del poder. De paso, los medios se beneficiarían con la reducción fiscal dispuesta para las donaciones, lo que reemplazaría el sistema opaco de ayudas a la prensa mediante un apoyo neutral y transparente.

Más allá del caso de los medios, este nuevo modelo invita a volver a pensar la noción misma de propiedad privada y la posibilidad de una superación democrática del capitalismo.

---

[37] *Sauver les médias. Capitalisme, financement participatif et démocratie*, París, Seuil - La République des Idées, 2015 [ed. cast.: *Salvar los medios de comunicación*, Barcelona, Anagrama, 2016].

[38] Se conoce como *SwissLeaks* al escándalo mediático que surgió en torno al banco HSBC cuando Hervé Falciani, ex empleado de esa entidad bancaria, le entregó en 2008 información hasta entonces oculta al gobierno francés, que inició una investigación formal. El diario *Le Monde* obtuvo una versión de los informes fiscales, que abarcan las cuentas de más de cien mil clientes (individuos y entidades legales) pertenecientes a más de doscientos países. *Le Monde* compartió la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, acordando que integrarían un equipo de profesionales de distintos países para analizar los datos y producir informes. [N. de E.]

El capital en Sudáfrica

5 de octubre de 2015

Poco más de veinte años después de terminado el *apartheid* y realizadas las primeras elecciones libres (1994), Sudáfrica se cuestiona más que nunca acerca de las desigualdades. La masacre de Marikana (en agosto de 2012, cuando treinta y cuatro mineros en huelga por reclamos salariales fueron asesinados por la policía) es un tema recurrente para la opinión pública. El Congreso Nacional Africano (CNA), en el poder sin interrupción desde comienzos de la transición democrática, instauró la igualdad de los derechos civiles fundamentales: derecho al voto, derecho a transitar por el territorio y a desempeñar cualquier profesión. Pero esta igualdad en lo formal no permitió reducir la desigualdad abismal de las condiciones de vida y de los derechos reales: derecho a un empleo y salario dignos, derecho a una educación de calidad, derecho a acceder a la propiedad, derecho a una verdadera democracia económica y política. El país se desarrolló, la población tuvo un sólido crecimiento (30 millones en 1980, 55 millones hoy), pero no se cumplieron las promesas de igualdad.

Según los últimos datos disponibles, el 10% de los más favorecidos capta entre el 60 y el 65% del ingreso nacional, contra los intervalos 50-55% en el Brasil, 45-50% en los Estados Unidos, 30-35% en Europa. Peor aún: esta brecha extrema que separa al 10% más alto (en su gran mayoría sigue integrado por blancos) del 90% más abajo se profundizó desde el final del *apartheid*. Esta triste comprobación se explica en parte por factores internacionales: desregulación y explosión de las remuneraciones financieras (sector muy importante en Sudáfrica), alza en la cotización de las materias primas (lo que beneficia especialmente a una pequeña élite blanca), *dumping* fiscal y social generalizado. Pero también se explica mediante la insuficiencia de las políticas implementadas por el CNA. Los servicios públicos y educativos disponibles en las zonas más vulnerables

siguen siendo de una calidad mediocre. Ninguna reforma inmobiliaria se llevó a cabo, en un país en que los negros fueron despojados del derecho a poseer la tierra y se los confinó en reservas y *townships*,[39] desde el Natives Land Act de 1913 hasta 1990. El patrimonio territorial e inmobiliario sigue en manos de la élite blanca, así como los recursos mineros y naturales. Las tímidas medidas del Empoderamiento Económico Negro (BEE, por sus iniciales en inglés), que apunta a obligar a los accionistas blancos a ceder parte de sus acciones a negros, sobre la base de una transacción voluntaria a precio de mercado, sólo benefició a una ínfima minoría de la población negra que ya poseía los recursos –o contactos políticos– para adquirirlos.

La consecuencia, previsible, es que el CNA resulta cada vez más cuestionado por izquierda por el partido de los Luchadores por la Libertad Económica (EFF, por sus iniciales en inglés), que propone una serie de medidas radicales: educación y seguridad social para todos, redistribución de las tierras, nacionalización de los recursos de minería. La minoría blanca (un 14% de la población en 1990, apenas el 9% hoy) enloquece: la semana pasada una diputada blanca, una suerte de Morano[40] local, reclamaba la vuelta del último presidente del *apartheid*. Para retomar la iniciativa, el CNA podría implementar a partir de 2016 un salario mínimo nacional y utilizar esta herramienta para reducir las desigualdades, a semejanza del Brasil bajo Lula. Algunos imaginan también la instauración de un impuesto progresivo sobre el capital, lo que permitiría redistribuir en forma gradual el poder económico. Ya abordado entre 1994 y 1999, el proyecto finalmente fue abandonado por el CNA. Según el ex presidente, Mbeki, la policía y el ejército, que todavía eran dirigidos por blancos, no lo habrían permitido.

Una cosa es cierta: se trate de nacionalizar la minería o cualquier proyecto orientado a hacer pagar impuestos a las multinacionales y a los dueños de patrimonios de manera más significativa que hoy, Sudáfrica tendría mucha necesidad de la cooperación de los países ricos, y no de su hipocresía. La élite financiera sudafricana lo repite sin pausa: en la década de 1980 estábamos obligados a negociar, pero hoy en día nos es fácil transferir nuestros fondos al exterior y hacia paraísos fiscales. De hecho, la opacidad financiera internacional es un verdadero flagelo para África: se estima que entre el 30 y el 50% de los activos financieros del continente están en paraísos fiscales (contra el 10% para Europa). No bien Europa y los Estados Unidos lo decidiesen, sería técnicamente fácil implementar un verdadero

registro mundial de los títulos financieros; por ejemplo, al integrarlo al tratado transatlántico en preparación. Como explica Gabriel Zucman en *La riqueza escondida de las naciones*,[41] bastaría que las autoridades públicas tomen el control de los concesionarios que desempeñan ese papel en la actualidad (Clearstream y Eurostream en Europa, Depository Trust Corporation en los Estados Unidos). África no necesita ayuda, sólo necesita un sistema legal internacional que le evite ser saqueada de manera constante.

---

[39] Durante el *apartheid*, *township* designaba a las zonas urbanas o los barrios (pobres y carentes de infraestructura digna) destinados a los no blancos, que por lo general eran llevados allí por la fuerza. Así, sus habitantes eran negros, indios y *coloured*. [N. de E.]

[40] Nadine Morano –nacida en 1963 y eurodiputada por el partido Les Républicains, sucesor de Union pour un Mouvement Populaire (UMP)– es conocida por sus dichos polémicos, como cuando afirmó en 2015 que Francia es un país de raza blanca, comentario que le valió ser desplazada de la lista que el partido presentó a las elecciones regionales ese año. [N. de E.]

[41] Gabriel Zucman, *La richesse cachée des nations. Enquête sur les paradis fiscaux*, París, Seuil–La République des Idées, 2014 [ed. cast.: *La riqueza escondida de las naciones. Cómo funcionan los paraísos fiscales y qué hacer con ellos,* Buenos Aires, Siglo XXI, 2015].

Frente al terrorismo, no basta con medidas excepcionales de seguridad

22-23 de noviembre de 2015

Es una evidencia: el terrorismo se nutre del polvorín desigualitario de Medio Oriente que en amplia medida hemos contribuido a crear. Daech, o "Estado Islámico de Irak y el Levante",[42] es directo emergente de la descomposición del régimen iraquí y, de modo más general, del derrumbe del sistema de fronteras que se estableció en la región en 1920.

Luego de la anexión de Kuwait por Irak, en el bienio 1990-1991, las potencias aliadas habían enviado sus tropas para devolver el petróleo a los emires –y a las compañías occidentales–. De paso, se inauguró un nuevo ciclo de guerras tecnológicas y asimétricas –algunas centenas de muertos en la coalición para "liberar" Kuwait frente a varias decenas de miles del lado iraquí–. Esta lógica se llevó al paroxismo durante la segunda guerra de Irak, entre 2003 y 2011: alrededor de 500 000 bajas iraquíes frente a algo más de 4000 soldados estadounidenses que perdieron la vida, todo para vengar las 3000 muertes del 11 de septiembre, que, sin embargo, nada tenían que ver con Irak. Esta realidad, amplificada por la asimetría extrema de las pérdidas humanas y la ausencia de salida política en el conflicto Israel-Palestina, sirve para justificar todos los abusos perpetrados por los yihadistas. Esperemos que Francia y Rusia, al mando luego del fiasco estadounidense, hagan menos destrozos y despierten menos vocaciones.

Más allá de los enfrentamientos religiosos, el sistema político y social de la región está sobredeterminado y debilitado por la concentración de los recursos petroleros en pequeños territorios despoblados. Sin embargo, como vimos, no sólo la concentración del PBI hace de esa región una de las más desiguales del planeta, sino que la desigualdad en el seno de las monarquías petroleras alcanza su punto máximo.

¿Cómo imaginar que las lecciones de democracia y justicia social dictadas por democracias que sostienen militar y políticamente estos regímenes podrían influir de algún modo en la juventud de Medio Oriente? Para ganar credibilidad, habría que demostrar a las distintas poblaciones que nos preocupamos más por el desarrollo social y la integración política de la región que por nuestros intereses financieros y las relaciones con las familias reinantes.

En concreto, el dinero del petróleo debe destinarse de modo prioritario al desarrollo regional. En 2015, el presupuesto total del sistema educativo egipcio sigue siendo inferior a los 10 000 millones de dólares (9400 millones de euros), cuando la cantidad de habitantes es de 90 millones. Y mientras tanto, los 30 millones de habitantes de Arabia Saudí reciben 100 000 millones de dólares, y los 300 000 qataríes, más de 100 000 millones de dólares de ingresos por el petróleo. Un modelo de desarrollo tan desigual sólo puede desembocar en catástrofe. Avalarlo es criminal.

En cuanto a los grandes discursos sobre la democracia y las elecciones, no habría que sostenerlos sólo en las ocasiones en que los resultados nos favorecen. En 2012, en Egipto, Mohamed Morsi fue elegido presidente en el marco de una votación en regla, lo que no suele suceder en la historia electoral del mundo árabe. En 2013, lo expulsaron del poder unos militares que enseguida fueron ejecutados por la organización islámica Hermanos Musulmanes, cuya acción social, sin embargo, permitió paliar las carencias del Estado egipcio. Algunos meses más tarde, Francia hizo borrón y cuenta nueva para vender sus fragatas y acaparar una parte de los magros recursos públicos del país.[43] Esperemos que esta denegación de democracia no tenga las mismas consecuencias trágicas que tuvo la interrupción del proceso electoral en Argelia en 1992.

Queda la pregunta: ¿cómo es posible que jóvenes que crecieron en Francia confundan Bagdad con las barriadas parisinas y busquen importar aquí conflictos que ocurren allá? Nada sirve de excusa para esta deriva sanguinaria, machista y patética. A lo sumo, puede observarse que el desempleo y la discriminación profesional a la hora de contratar a nuevos empleados (llamativamente mayoritaria en el caso de las personas que tildaron las casillas correspondientes a títulos obtenidos, experiencia, etc., tal como quedó demostrado en investigaciones recientes)[44] no deben ayudar demasiado. Europa, que antes de la crisis financiera podía recibir un flujo migratorio neto anual de un millón de personas, con un desempleo en

baja, debe volver a diseñar su modelo de integración y creación de empleos. La austeridad es lo que condujo a la escalada de egoísmos nacionales y tensiones identitarias. El desarrollo social y equitativo será lo que venza al odio.

---

[42] En ámbito castellano, también suele designárselo con su sigla inglesa, ISIS. [N. de E.]
[43] Véase nota 4. [N. de E.]
[44] Véase la crónica "La hipocresía francesa de cara al laicismo y la desigualdad".

Los que contaminan el mundo deben pagar

28 de noviembre de 2015

Luego de los ataques terroristas,[45] lamentablemente hay serios riesgos de que los dirigentes franceses y occidentales tengan la cabeza en cualquier parte y no realicen los esfuerzos necesarios para que la conferencia de París sobre el clima sea un éxito. Sería dramático para el planeta. En principio, es hora de que los países ricos tomen verdadera noción del alcance de sus responsabilidades históricas frente al calentamiento global y a los estragos que ya han causado en los países pobres. A continuación, las tensiones en ciernes acerca del clima y la energía están cargadas de amenazas para la paz mundial. No se prepara el futuro dejando que los terroristas impongan su voluntad.

¿En qué estado está la discusión? Si nos atenemos a los objetivos de reducción de las emisiones presentadas por los Estados, los números no cierran. Estamos en una trayectoria que nos lleva a un calentamiento superior a los 3 ºC, y tal vez más, con consecuencias potencialmente catastróficas, en particular en África, más el sur y sudeste asiáticos. Incluso en el caso de un acuerdo ambicioso sobre las medidas de mitigación de las emisiones, ya es seguro que la suba de las aguas y el aumento de temperaturas causarán importantes desastres en muchos de estos países. Se estima que habrá que destinar un fondo mundial que ronda los 150 000 millones de euros anuales para financiar las inversiones mínimas necesarias a fin de adaptarse al cambio climático (diques, relocalización de viviendas y actividades, etc.). Si los países ricos no son capaces de reunir esta suma (apenas el 0,2% del PBI mundial), resulta iluso procurar convencer a los países pobres y emergentes de que realicen esfuerzos adicionales para reducir sus emisiones futuras. Sin embargo, por ahora, las sumas

prometidas para la adaptación son inferiores a los 10 000 millones. Es tanto más desalentador aunque no esté en juego una ayuda: se trata simplemente de reparar una parte de los desastres que ocasionamos en el pasado y que seguimos ocasionando.

Este último factor es importante, ya que en Europa y los Estados Unidos suele oírse que China se volvió el primer país contaminador, y que ahora a ella y a los otros países emergentes les corresponde esforzarse.

Al hacer esto, olvidamos varias cosas. En principio, deben relacionarse los volúmenes de emisión con la cantidad de habitantes de cada país: con más de 1400 millones de habitantes, China triplica en población a Europa (500 millones) y cuadriplica a los Estados Unidos (350 millones). Luego, las escasas emisiones europeas se explican en parte por el hecho de que hacemos enormes subcontrataciones en el exterior, sobre todo en China, para producir los bienes industriales y contaminantes que nos gusta consumir. Si tenemos en cuenta el contenido en carbono de los flujos de importaciones y exportaciones entre las distintas regiones del mundo, las emisiones europeas aumentan abruptamente en un 40% (y las de los Estados Unidos en un 13%), mientras que las emisiones chinas bajan en un 25%. Sin embargo, se justifica mucho más examinar la distribución de las emisiones en función del país de consumo final (y no de la producción).

Se constata entonces que en la actualidad los chinos emiten el equivalente a 6 toneladas de CO_2 por año y por habitante (es decir, alrededor de la media mundial), contra las 13 toneladas europeas y veintidós toneladas estadounidenses. En otras palabras, el problema no es sólo que contaminamos desde mucho antes que el resto del mundo: el hecho es que seguimos arrogándonos un derecho individual de contaminar dos veces más que el promedio mundial.

Para superar los meros enfrentamientos entre países, e intentar encontrar soluciones comunes, además es fundamental traer a colación el hecho de que en cada país existen inmensas desigualdades de consumo energético, directas e indirectas (por intermedio de los bienes y servicios consumidos). Según el tamaño de las reservas, la vivienda, la billetera, según la cantidad de bienes adquiridos, de viajes aéreos realizados, etc., se observa una gran diversidad de situaciones. E incluso si los distintos modos de vida individuales desempeñan un papel importante, se constata sin ambigüedad que los niveles medios de consumo y emisiones aumentan marcadamente con el nivel de ingreso (con una elasticidad apenas inferior a 1).

Al recolectar datos sistemáticos sobre, por un lado, las emisiones directas e indirectas por país y, por otro, sobre la distribución de consumo e ingreso dentro de cada país, con Lucas Chancel hemos analizado la evolución de la distribución de las emisiones mundiales por individuo durante el transcurso de los últimos quince años.[46] Las conclusiones obtenidas son claras. Con el ascenso de los países emergentes, ahora hay contaminadores importantes en todos los continentes, y es legítimo entonces que todos los países aporten para el financiamiento del fondo mundial de adaptación. Pero los países ricos siguen siendo la inmensa mayoría entre los mayores contaminadores del mundo y, por lo tanto, no pueden pedirles a China y a los países emergentes que se hagan cargo de más de lo que corresponde.

En concreto, actualmente los casi 7000 millones de habitantes del planeta emiten el equivalente a 6 toneladas anuales de CO_2 por persona. El 50% de quienes menos contaminan, esto es, 3500 millones de personas, situados sobre todo en África, en el sur y sudeste de Asia (que son también las principales zonas afectadas por el calentamiento), emiten menos de dos toneladas por persona y son responsables de apenas el 15% de las emisiones totales. En el otro extremo de la escala, el 1% más contaminador del mundo, unos 70 millones de personas, generan emisiones promedio que rondan las 100 toneladas de CO_2 por individuo, por lo que ellos solos producen alrededor del 15% de las emisiones totales; es decir, contaminan lo mismo que el 50% de la franja inferior. Son cincuenta veces menos cuantiosos, pero, como emiten cincuenta veces más, los dos efectos se compensan. Sin embargo, la franja inferior del 50% es aquella que va a padecer las consecuencias del cambio climático; es decir, el aumento del nivel de las aguas y de las temperaturas. Estos 3500 millones de habitantes emiten 2 toneladas de CO_2 por persona, y van a pagar por aquellos que emiten 100.

¿Y dónde se encuentra ese 1%, el de los mayores contaminadores del mundo? Según nuestros cálculos, el 57% de ellos vive en América del Norte, el 16% en Europa y apenas más del 5% en China (menos que en Rusia y Medio Oriente: alrededor del 6% en los dos casos). Nos parece que esto puede dar una clave de distribución bastante legítima para repartir el financiamiento del fondo mundial de adaptación de US$ 150 000 millones por año. América del Norte deberá pagar US$ 85 000 millones (un 0,5% de su PBI) y Europa 24 000 millones (0,2%). La conclusión indudablemente disgustará a Donald Trump y a otros. Ellos podrán reproducir nuestros

cálculos y mejorarlos: todos nuestros datos y aplicaciones están disponibles en el sitio web de la École d'Économie de Paris. Hemos revisado varias series de hipótesis sobre la distribución de los consumos y las emisiones individuales sin que se modifiquen sustancialmente nuestros resultados principales.

También podemos imaginar otras claves de distribución; por ejemplo, al hacer recaer los esfuerzos sobre el 10% de los mayores emisores del mundo (700 millones de personas que emiten en promedio 27 toneladas), que son responsables de alrededor del 45% de las emisiones totales –tres veces más que las emisiones acumuladas de la franja del 50% inferior–. En ese caso, el financiamiento recaería en el 40% en los Estados Unidos, el 19% en Europa y el 10% en China.

Lo seguro es que llegó la hora de reflexionar sobre un sistema de distribución fundado sobre la idea de un impuesto progresivo sobre el carbono: no puede pedirse el mismo esfuerzo a las personas que emiten 2 toneladas por año que a las que emiten 100. Esa es la gran falla de las tasas proporcionales sobre el carbono que suelen debatirse (así como los sistemas de precio del carbono y de mercados de los derechos de contaminación que, por otro lado, plantean problemas distintos), si se las aplica sin corrección ni compensación.

Algunos objetarán que los países ricos jamás aceptarán tales criterios de distribución, en especial los Estados Unidos. Y, de hecho, las soluciones que se adoptarán –en París este año, y en los años venideros– para financiar la adaptación al cambio climático serán sin dudas mucho menos ambiciosas y transparentes. Pero habrá que encontrar soluciones: nada se hará si los países ricos no se deciden a abrir los bolsillos, y las consecuencias concretas del calentamiento climático se harán sentir cada vez con mayor intensidad, incluso en los Estados Unidos.

De una manera u otra, urge establecer un diagnóstico compartido sobre las responsabilidades de unos y otros, un lenguaje común que permita encarar una resolución pacífica de este desafío mundial sin precedentes.

---

[45] Véase nota 51. [N. de E.]

[46] "Carbon and inequality: From Kyoto to Paris", disponible en el sitio web del autor en el portal de la École d'Économie de Paris, <piketty.pse.ens.fr/files/ChancelPiketty2015.pdf>.

Capital y desigualdad en la India

17 de enero de 2016

Mientras se acumulan las dudas sobre China y su sistema financiero, las miradas se orientan cada vez más hacia la India, con la esperanza de que pueda traccionar la economía mundial en los años y décadas venideros. El crecimiento debería ser de alrededor del 8% en el ejercicio 2016-2017, como en 2015, contra un 6% de China. Por cierto, la India parte desde abajo, con un poder adquisitivo promedio en el orden de € 300 mensuales por habitante (contra € 700 en China y € 2000 en la Unión Europea). A este ritmo, en menos de treinta años podrá alcanzar a Europa (contra quince años para China).

Agreguemos que la demografía juega a favor de la India: según la ONU, su población debería superar ampliamente a la china (que ya está envejeciendo y declinando) de aquí a 2015. La India está llamada a convertirse en primera potencia mundial por población en el siglo XXI, y tal vez primera potencia a secas. Además, el país se funda sobre sólidas instituciones democráticas y electorales, libertad de prensa y estado de derecho. El contraste con China es imponente: esta última acaba de expulsar a una periodista francesa (sin que Francia ni Europa encuentren algo que decir), y su modelo político autoritario parece tan indescifrable como imprevisible en el largo plazo.

Sin embargo, los desafíos para la India son inmensos, en primer lugar, el de las desigualdades. Es difícil encontrar los números del crecimiento en las encuestas de consumo de los hogares indios, sin dudas porque una parte desproporcionada del enriquecimiento es captada por una selecta élite mal relevada por los encuestadores. Dado que el gobierno indio interrumpió el acceso a los datos del impuesto a las ganancias a comienzos de 2000 (China, a decir verdad, jamás publicó alguno, aunque recabe ingresos tributarios mucho mayores), es difícil hacerse una idea precisa.

Lo seguro es que la inversión pública en educación y salud sigue siendo muy insuficiente en la India y socava su modelo de desarrollo. El mejor ejemplo es el indigente sistema de salud pública, que cuenta apenas con el 0,5% del PBI, contra casi el 3% en China. Lo cierto es que hoy en día el Partido Comunista de China (PCC) consiguió movilizar mejor que las élites democráticas y parlamentarias indias recursos significativos para financiar una estrategia de inversión social y de servicios públicos. Con todo, sólo una política semejante puede permitir al total de la población beneficiarse con el crecimiento y asegurar un desarrollo sustentable del país. Sin dudas, la opacidad y el autoritarismo del modelo chino lo condenan, a la larga, si no genera una apertura. Pero el modelo democrático indio todavía debe someterse a prueba, idealmente al evitar las crisis y los choques que en el siglo XX obligaron a que las élites occidentales pusieran en marcha reformas sociales y fiscales indispensables.

El desafío más importante –a menudo difícil de comprender en Occidente– está ligado al sistema de castas; además, el riesgo de enfrentamientos identitarios entre la mayoría hindú y la minoría musulmana (el 14% de la población, 180 millones de personas sobre 1300 millones de habitantes) sólo puede acrecentarse, ya que los antagonismos son azuzados en la actualidad por el partido nacionalista hindú, el Partido Popular Indio (BJP, en el poder entre 1998 y 2004, y luego desde 2014).

Resumamos. En 1947, la India deroga en forma oficial el sistema de castas, y en particular pone fin a los censos por casta, llevados a cabo por el colonizador británico, al que se acusa de haber querido dividir la India y hacer rígidas sus clases para dominar mejor el país. Sin embargo, el gobierno desarrolla un sistema de admisión preferencial en las universidades y en los empleos públicos para los niños nacidos en hogares de las castas más bajas (los SC/ST, "Scheduled Castes/Scheduled Tribes", antiguos intocables discriminados, casi el 30% de la población). Pero estas políticas generan una frustración creciente en los niños nacidos en castas intermedias (OBC, "Other Backward Classes", otras castas desfavorecidas, alrededor del 40% de la población), atrapados entre los grupos más desfavorecidos y las castas más altas. A partir de la década de 1980, varios estados indios extienden las políticas de admisión preferencial a estos nuevos grupos (con los que puede asociarse a los musulmanes, excluidos del sistema inicial). Los conflictos en torno a estos dispositivos son tan agudos como porosas son las fronteras entre castas, que no siempre se

corresponden con las jerarquías de ingresos y patrimonios, lejos de eso. En 2011, el gobierno federal por fin se decide a esclarecer estas relaciones complejas y organiza un censo socioeconómico de las castas (el primero desde 1931).

El tema es explosivo y todavía estamos a la espera de que se publiquen los resultados completos. A la larga, el desafío es transformar en forma gradual estas políticas de admisión preferencial en reglas fundadas sobre criterios sociales universales, tales como el ingreso parental o el territorio, a la manera de las aplicaciones informáticas para la inscripción al colegio secundario o estudios superiores (o de algunos subsidios a empresas), que en Francia comienzan con timidez a otorgar puntos extra a los alumnos becados o a los egresados de establecimientos o zonas vulnerables.

En cierto modo, la India intenta enfrentarse simplemente con los medios del estado de derecho al desafío de la igualdad genuina, en una situación en que la desigualdad de estatus emanada de la sociedad antigua y de las discriminaciones pasadas es particularmente extrema y a cada momento amenaza con generar tensiones violentas. Nos equivocaríamos si creyéramos que estos desafíos no nos atañen.

El impacto Bernie Sanders

15 de febrero de 2016

¿Cómo interpretar el increíble éxito del "socialista" Bernie Sanders en las elecciones primarias estadounidenses? El senador de Vermont se impone a Hillary Clinton entre los simpatizantes demócratas de menos de 50 años, y sólo los adultos mayores permiten que Clinton mantenga una ventaja.

Frente a la maquinaria Clinton y al conservadurismo de los grandes medios, Sanders tal vez no gane la primaria. Pero ya se tiene la prueba de que, algún día no lejano, otro Sanders, sin dudas más joven y menos blanco, ganará la presidencia de los Estados Unidos y le cambiará la cara al país. Bajo muchos aspectos, asistimos al final del ciclo político-ideológico inaugurado por la victoria de Ronald Reagan en las elecciones de noviembre de 1980.

Remontémonos en el tiempo. Entre las décadas de 1930 y 1970, los Estados Unidos llevaron adelante una ambiciosa política de reducción de las desigualdades. En parte para diferenciarse de la vieja Europa, percibida entonces como hiperdesigualitaria, y contraria al espíritu democrático estadounidense: entreguerras, el país inventa el impuesto sólidamente progresivo sobre el ingreso y las sucesiones, e implementa niveles de progresividad fiscal nunca empleados de nuestro lado del Atlántico.

Entre 1930 y 1980, durante medio siglo, la tasa aplicable a los ingresos estadounidenses más elevados (superiores a un millón de dólares por año) es en promedio del 82%, con máximos del 91% entre las décadas de 1940 y 1960, de Roosevelt a Kennedy, y sigue en el 70% hacia 1980, momento en que fue elegido Reagan. Esta política en nada afecta el vigoroso crecimiento estadounidense de posguerra, sin dudas porque no sirve de mucho pagarles a supergerentes diez millones de dólares antes que un millón. El impuesto sucesorio –igual de progresivo, con tasas que van del 70 al 80% aplicables a las mayores fortunas durante décadas (mientras que

en Alemania y Francia nunca superó la franja del 30 al 40%)– redujo drásticamente la concentración de los patrimonios de los Estados Unidos, incluso si, a diferencia de Europa, ese país no padeció guerras y destrucciones en su territorio.

Y precisamente los Estados Unidos ponen en marcha, desde la década de 1930 –mucho antes que los países europeos–, un salario mínimo federal, cuyo nivel (expresado en dólares de 2016) supera a finales de la década de 1960 los US$ 10 por hora, el más elevado de la época. Esto, sin desempleo, o casi, ya que el nivel de productividad y del sistema educativo lo permite. Es también el momento en que desde Washington se pone fin a las discriminaciones raciales legales, muy poco democráticas, que regían en el Sur, y se lanzan nuevas políticas sociales.

Pero todo esto provoca fuertes resistencias, en especial entre las élites financieras, y en las franjas reaccionarias del electorado blanco. Humillados en Vietnam, a los Estados Unidos de los años setenta les preocupa que los vencidos de la guerra (Alemania y Japón a la cabeza) los alcancen a paso firme. También sufren la crisis del petróleo, la inflación y la subindexación de las escalas fiscales.

Reagan surfea sobre todas estas frustraciones y resulta electo en 1980, con un programa que pretendía restablecer un capitalismo mítico de los orígenes. El punto culminante es la reforma fiscal de 1986, que termina el ciclo de medio siglo de fuerte progresividad fiscal y rebaja al 28% la tasa aplicable a los ingresos más altos. Los demócratas Bill Clinton (1992-2000) y Barack Obama (2008-2016) jamás cuestionarán genuinamente esa decisión y estabilizarán la tasa en alrededor del 40% (dos veces menos que el nivel promedio del período 1930-1980). Esto llevará a un estallido de las desigualdades y a remuneraciones insólitas: todo en un contexto de bajo crecimiento (pero algo superior a Europa, envuelta en otros problemas) y el estancamiento del ingreso mayoritario.

Reagan decide también congelar el salario mínimo federal, que a partir de los años ochenta, sin prisa pero sin pausa, será engullido por la inflación (no mucho más de US$ 7 por hora en 2016 contra casi US$ 11 en 1969). Aquí también este nuevo régimen político ideológico fue apenas atenuado por las alternancias demócratas de Clinton y Obama.

El actual éxito de Sanders demuestra que gran parte de los Estados Unidos está cansada del aumento de las desigualdades y de estas pseudoalternancias, y quiere volver al programa progresista y la tradición

igualitaria del país. Clinton, que le disputaba por izquierda a Obama en 2008, en especial respecto del seguro de salud, aparece hoy como la portadora del *statu quo*, heredera del régimen político Reagan-Clinton-Obama.

Sanders propone con claridad restablecer la progresividad fiscal y un salario mínimo elevado (US$ 15 por hora). Le suma la gratuidad de la salud y la educación superior, en un país en que el acceso desigual a los estudios alcanzó máximos inéditos, y deja en evidencia la brecha que separa la realidad de los discursos tranquilizadores sobre la meritocracia que enarbolan los ganadores del sistema.

Al mismo tiempo, el partido republicano se hunde en un discurso hipernacionalista, antinmigrantes y antiislam (aunque sea una religión casi ausente en los Estados Unidos), y en un ensalzamiento desmedido de la fortuna de piel blanca. Los jueces nombrados bajo Reagan y George Bush allanaron las limitaciones legales a la influencia de la financiación privada de la vida política, lo que complica en singular modo la tarea de candidatos como Sanders. Pero las nuevas formas de movilización política y de financiamiento pueden prevalecer y reinsertar a los Estados Unidos en un nuevo ciclo político. Estamos muy lejos de las tristes profecías sobre el fin de la historia.

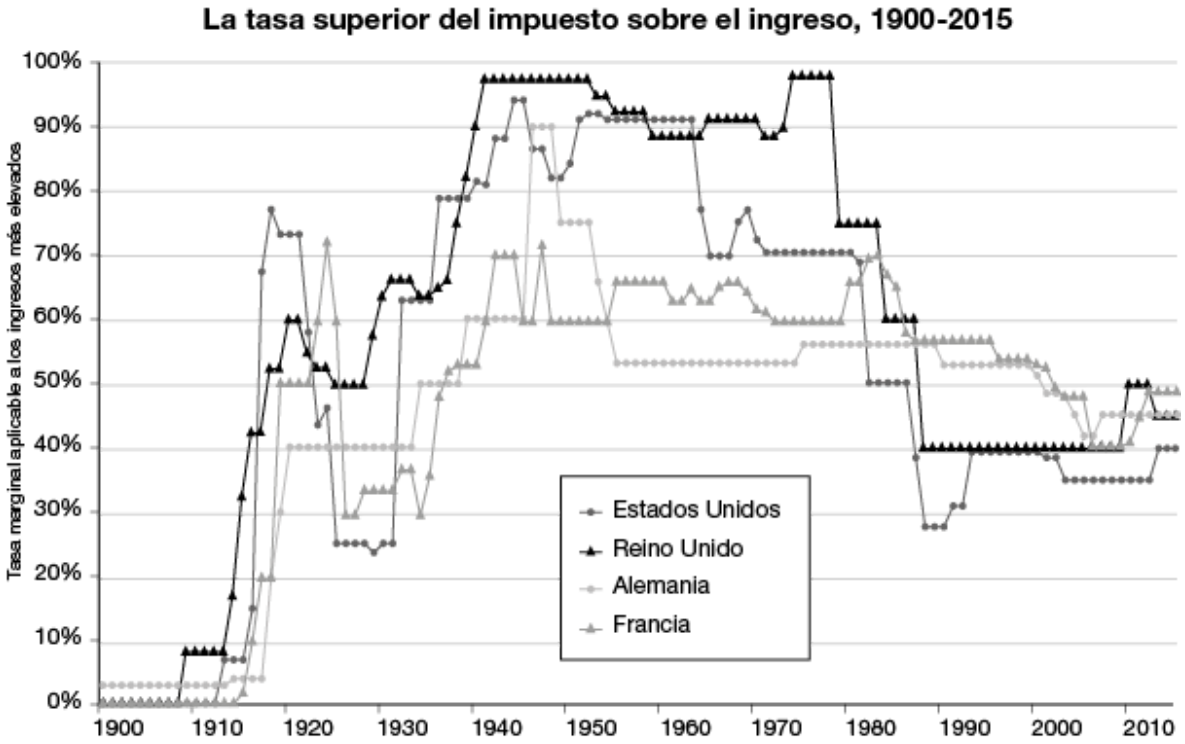
De la desigualdad en América

18 de febrero de 2016

En momentos en que las elecciones primarias estadounidenses están en su apogeo, es útil interrogarnos sobre la compleja relación que mantiene ese país con la idea de igualdad y desigualdad. Esto permitiría contestar varias preguntas que formularon los seguidores del blog luego de mi crónica "El impacto Bernie Sanders".

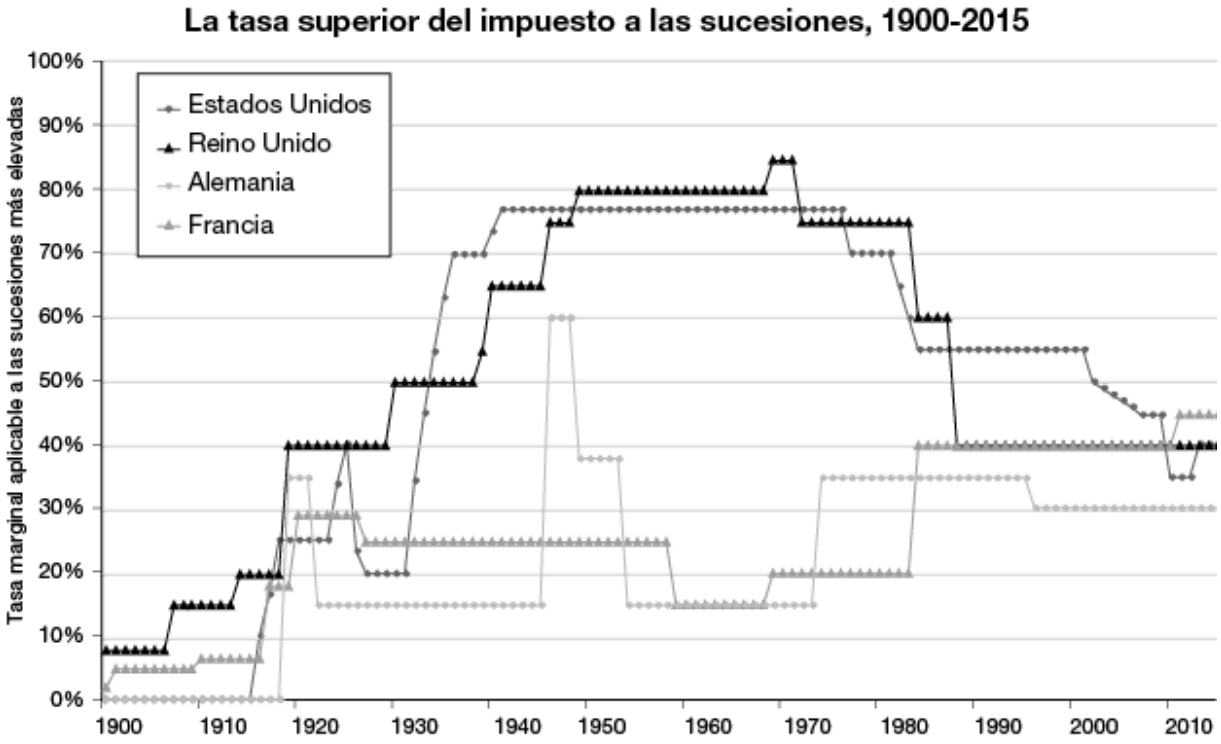
A veces imaginamos que los Estados Unidos tienen una tolerancia ilimitada hacia la desigualdad, mientras que Francia se caracterizaría por una pasión sin igual por la igualdad. Nada más lejos de la verdad. En realidad, durante el período de entreguerras los Estados Unidos –imitados por el Reino Unido– fueron los inventores del impuesto altamente progresivo sobre el ingreso y las sucesiones, con niveles de progresividad fiscal nunca utilizados en Francia o Alemania (excepto en períodos muy breves). Comencemos por examinar el gráfico de la página siguiente, que describe la evolución de la tasa superior del impuesto sobre el ingreso (es decir, la tasa aplicable a los ingresos más elevados) en los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Francia de 1900 a 2015.

Hace un siglo, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, el impuesto a las ganancias casi no existía. Luego, al final de la guerra y a comienzos de la década de 1920, las tasas subieron muy rápido. Todos los países se ven afectados, pero es claro que los Estados Unidos y luego el Reino Unido lideran el movimiento. Para el período 1930-1980, la tasa promedio aplicable a los ingresos estadounidenses más elevados es del 82%.[47] Para igual período, Francia y Alemania se limitan a tasas superiores de entre el 50 y el 60%, lo que ya constituye una revolución con respecto al período previo a la Primera Guerra Mundial, pero sigue siendo modesto en comparación con lo que se hace para la misma época en los países anglosajones.



Lectura: La tasa marginal superior del impuesto sobre el ingreso (aplicable a los ingresos más elevados) en los Estados Unidos pasó del 70% en 1980 al 28% en 1988.

La brecha es todavía más importante si se examina el caso del impuesto sucesorio. Los Estados Unidos y el Reino Unido aplican durante décadas tasas que rondan entre el 70 y el 80% a las fortunas más grandes, mientras que la tasa superior del impuesto a las sucesiones ascendió en general entre el 20 y el 40% en Alemania y Francia a lo largo del siglo XX. La tasa del 45% aplicada en la actualidad a las mayores sucesiones en línea directa es la más elevada de la historia francesa, pero parece insig-nificante con respecto a las cotas anglosajonas de posguerra.



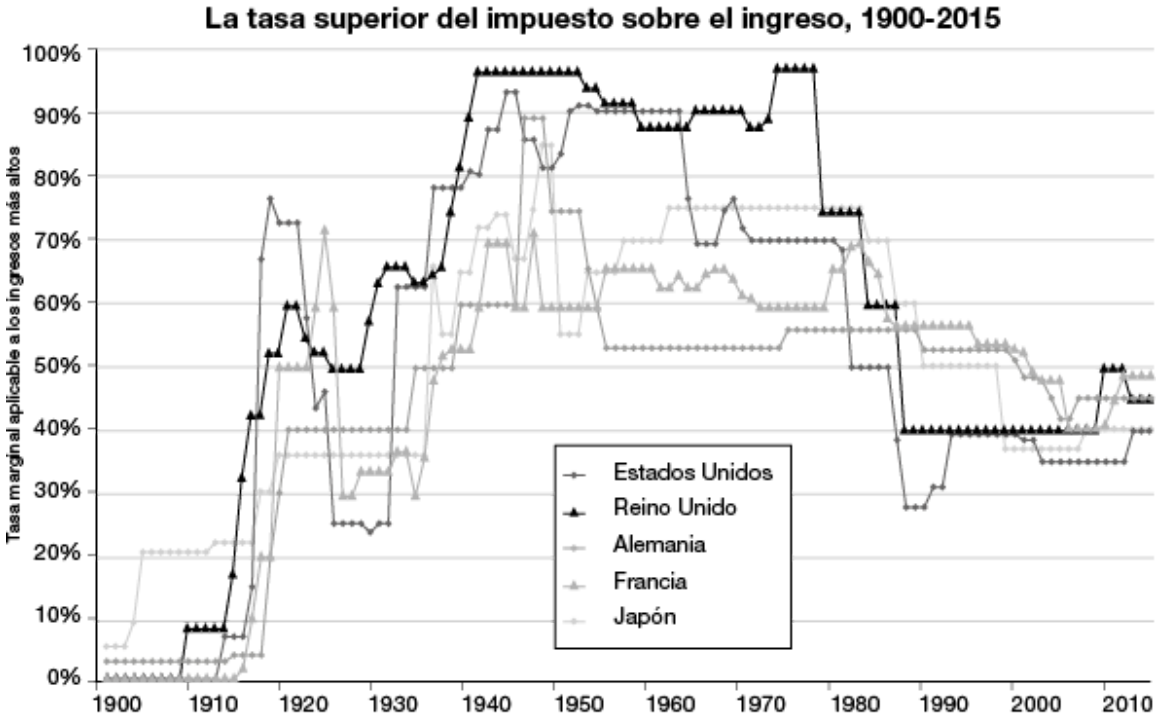
Lectura: La tasa marginal superior del impuesto a las sucesiones (aplicable a las sucesiones más elevadas) en los Estados Unidos pasó del 70% en 1980 al 35% en 2013.

¿Por qué, a partir de las décadas de 1920 y 1930, los Estados Unidos ponen en práctica esta vigorosa política de reducción de las desigualdades? Desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se observa al otro lado del Atlántico una creciente inquietud respecto del aumento de las desigualdades. Esto llevó, luego de un largo proceso, a reformar la Constitución estadounidense (aunque es un procedimiento nada cómodo) para crear en 1913 un impuesto federal sobre el ingreso y luego, en 1916, un impuesto federal a las sucesiones.

Al leer el famoso discurso pronunciado en 1919 por Irving Fisher, en el congreso anual de la Asociación Estadounidense de Economía que él presidía, se vuelve evidente que la obsesión de los Estados Unidos era orientarse hacia un sistema desigualitario al estilo europeo. Fisher, que no tenía un pelo de peligroso izquierdista, explica a sus distinguidos colegas que el aumento de las desigualdades y de una concentración "no democrática" de las riquezas, al acercarse a los niveles europeos, es la principal amenaza del desarrollo armonioso de los Estados Unidos. En especial, llega a la conclusión de que hay que gravar fuertemente las mayores sucesiones; por ejemplo, cercenando un tercio a la primera generación, dos tercios a la segunda y tres tercios a la

tercera.[48] Es casi lo que ocurrió, ya que la tasa superior de todo nuevo impuesto sucesorio trepó al 40% desde la década de 1920 y alcanzó valores de entre el 70 y el 80% durante las décadas de 1930 y 1940.

A la vez, cabe resaltar que el único momento en que Alemania aplica tasas muy elevadas a las sucesiones y a los ingresos más altos se da entre 1946 y 1949, es decir, durante el período de ocupación estadounidense, cuando la política fiscal alemana es fijada por el Consejo de Control Aliado, el cual en la práctica es regido por los Estados Unidos. Encontramos el mismo fenómeno en Japón, como lo demuestran los dos gráficos siguientes (allí Japón se incorpora a los otros cuatro países):



Lectura: La tasa marginal superior del impuesto sobre el ingreso (aplicable a los ingresos más elevados) en los Estados Unidos pasó del 70% en 1980 al 28% en 1988.

Lectura: La tasa marginal superior del impuesto a las sucesiones (aplicable a las sucesiones más elevadas) en los Estados Unidos pasó del 70% en 1980 al 35% en 2013.

Insistamos en el hecho de que los Estados Unidos de 1946-1949 no buscaban "castigar" a los alemanes y japoneses imponiéndoles tasas confiscatorias, ya que se trata exactamente de la misma política que aplicaban en su territorio. Por el contrario, en el espíritu estadounidense de la época, incluso si en nuestros días puede resultar asombroso, esto formaba parte de su misión civilizadora: se trata de brindar simultáneamente nuevas instituciones democráticas y nuevas instituciones fiscales a esos dos países, para evitar que se produzca una concentración excesiva de la riqueza y que la democracia se transforme en plutocracia.

El impuesto sucesorio japonés también es interesante: siguió fuerte, al menos en forma nominal, con una tasa superior que se elevó al 55% por obra del gobierno de centroderecha en 2015.

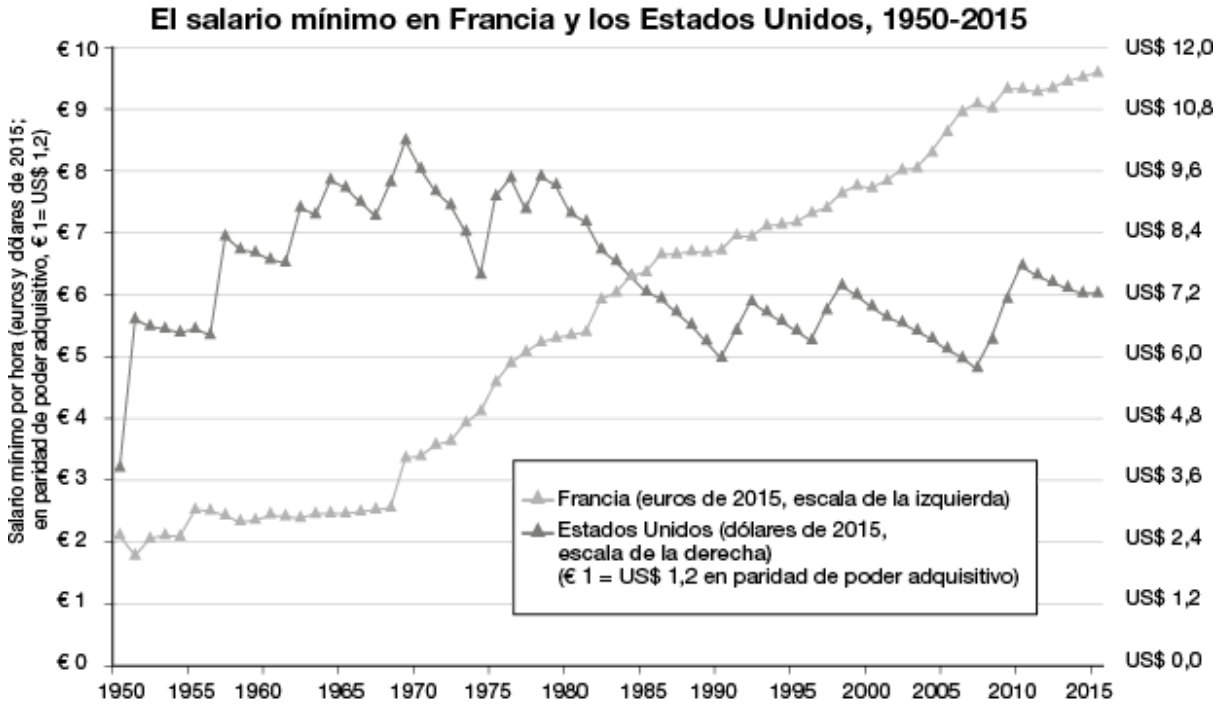
En términos más generales, ¿estaríamos asistiendo hoy en día a los primeros signos de un regreso histórico a una progresividad fiscal más fuerte, una suerte de reproducción del movimiento comenzado hace casi un siglo? El éxito de Sanders en las elecciones primarias estadounidenses traduce sin duda alguna una exasperación creciente ante el aumento de las desigualdades y las

pseudoalternancias Clinton y Obama. Pese a todo, serán necesarios muchos combates políticos para contrarrestar la ascendente supremacía del dinero privado sobre la vida política y los medios de comunicación, especialmente en los Estados Unidos (pero no sólo allí).

Otra diferencia fundamental con los comienzos del siglo XX radica en que la competencia fiscal entre países y la opacidad financiera en aquel momento alcanzaron proporciones inéditas en la historia. Esto dificulta el regreso a una fuerte progresividad fiscal sin una coordinación internacional adecuada (que es posible desde un punto de vista técnico, pero que resulta política e intelectualmente complicado en las circunstancias actuales).

Se agregará otro factor que no integraba el paisaje político ideológico de hace un siglo: en la actualidad existen dos grandes países ex comunistas, Rusia y China, que luego de sus experiencias traumáticas casi renunciaron a cualquier tentativa racional de reducir las desigualdades mediante el poder público. Así, no hay impuesto sucesorio alguno en estos dos países (¡capitalistas del mundo, vayan a morir a Rusia o China para legar su fortuna sin pagar un solo impuesto!); aunque el gobierno chino hable de introducir uno, dentro del marco de una amplia reforma fiscal, su reticencia respecto del estado de derecho lo disuadiría ampliamente.

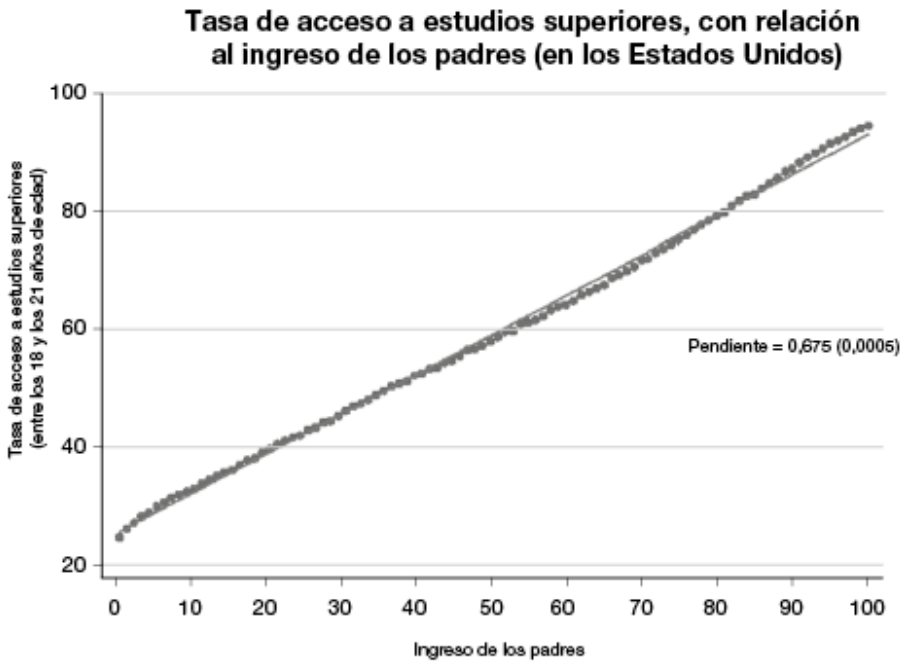
Examinemos ahora otra dimensión de la lucha contra las desigualdades: el salario mínimo, que podría desempeñar un papel central en el futuro. Durante el New Deal, los Estados Unidos crearon un salario mínimo federal,[49] que es tres veces mayor al salario mínimo francés de la época:



Lectura: Convertido en poder adquisitivo de 2015, el salario mínimo por hora pasó de US$ 3,8 a US$ 7,2 entre 1950 y 2015 en los Estados Unidos, y de € 2,1 a € 9,5 en Francia.

Aquí también asistimos a una inversión completa luego de la elección de Ronald Reagan, en 1980. Sin mecanismos de indexación automática, el salario mínimo federal quedó congelado durante largos períodos, con algunas revalorizaciones puntuales en los gobiernos de Bill Clinton y Barack Obama, insuficientes para compensar la corrosión que, en forma lenta y segura, la inflación causó en el poder adquisitivo del salario mínimo de varias décadas a nuestra parte; esto conlleva una pérdida del nivel absoluto del poder adquisitivo en más de un tercio durante medio siglo, lo que es significativo para un país en crecimiento. Se comprende mejor por qué Sanders propone revalorizar el salario mínimo federal.[50]

La otra cuestión fundamental que esgrime Sanders es la de la educación y salud gratuitas. La cuestión es primordial, ya que las desigualdades de acceso a la educación alcanzaron cimas inéditas en los Estados Unidos, tal como se demuestra con claridad en el siguiente gráfico. Tomado de los trabajos de Emmanuel Saez y Raj Chetty, describe la relación observada en los Estados Unidos en el período 2008-2012 entre el ingreso de los padres (expresado en percentiles, desde el 1% más bajo al 1% más alto) y la probabilidad de que los hijos realicen estudios superiores:



Se observa una línea recta casi perfecta, que va prácticamente del 0 al 100%: los jóvenes nacidos en los sectores más humildes tienen una probabilidad apenas superior al 20% de acceder a estudios superiores, contra más del 90% para los jóvenes nacidos en ambientes más favorecidos. Este gráfico muestra la brecha que a veces existe entre, por un lado, los discursos de la meritocracia que sostienen las élites y los ganadores del sistema (que siempre han tenido mucha imaginación a la hora de justificar su posición, pero que en un siglo realizaron innegables avances en esta dirección) y, por otro lado, la realidad que viven las clases populares y los grupos muy amplios de población.

Hace falta destacar que (como es obvio) los jóvenes de origen modesto que logran abrirse camino hacia los estudios no asisten a las mismas universidades que los jóvenes favorecidos. En la actualidad, el ingreso promedio de los padres de los estudiantes de Harvard se corresponde con el ingreso promedio del 2% de los estadounidenses acomodados. Es cierto, existen algunos estudiantes cuyos padres no pertenecen a ese 2%, pero es tan escaso su número –y los que surgieron de ese 2% están ubicados tan alto– que el promedio es equivalente al que se obtendría si todos los estudiantes hubiesen sido seleccionados al azar en el grupo del máximo 2%.

También en estos casos las resistencias al cambio serán fuertes, en especial por parte de las grandes universidades y de las élites, que no quieren perder el control sobre los procedimientos de admisión. De cara al futuro, la lucha por

la igualdad en el acceso a la educación no dejará de ser uno de los pilares, aunque más no fuere porque puede movilizar a las minorías hispanas y afroamericanas (que se están convirtiendo en mayoría), más tal vez que la cuestión de la progresividad fiscal o incluso que el salario mínimo (aunque estas luchas distintas pueden y deben avanzar en conjunto).

Una cosa es cierta: aunque en estas últimas décadas las desigualdades estadounidenses se hayan profundizado más que las europeas, ese país tiene una relación con la idea de igualdad y desigualdad mucho más compleja de lo que solemos imaginar, y que aún no terminó de sorprendernos, tanto en el siglo XXI como en el siglo XX. Enfrentados a desigualdades insoportables, a lo largo del siglo pasado, los Estados Unidos inventaron nuevas herramientas para reducirlas. Sin dudas sucederá lo mismo en el futuro, en formas que cuesta prever, pero para las que podemos prepararnos si volvemos a poner estas cuestiones en perspectiva. El fin de la historia no ocurrirá mañana.

---

[47] Véase la crónica "El impacto Bernie Sanders".

[48] El discurso de Irving Fisher "Economists in public service: Annual Address of the President" fue publicado en *The American Economic Review,* 9 (1), *Supplement, Papers and Proceedings of the Thirty-First Annual Meeting of the American Economic Association* (marzo de 1919), pp. 5-21, y está disponible en <piketty.pse.ens.fr/files/Fisher1919.pdf>.

[49] Véase la crónica "El impacto Bernie Sanders", cit.

[50] Íd.

¿Europa se está volviendo islamofóbica?

15 de marzo de 2016

El debate público acerca del lugar del islam y de las poblaciones de confesión musulmana en las sociedades europeas toma un cariz cada vez más histérico. A falta de informaciones e investigaciones precisas, se utilizan sucesos, que por cierto son dramáticos, pero que sólo implican a una ínfima fracción de las poblaciones en cuestión (los atentados de París, [51] las agresiones en Colonia),[52] para llegar a conclusiones generales sobre la capacidad o voluntad de decenas de millones de personas para integrarse o convivir.

De hecho, casi el 5% de la población de la Unión Europea (alrededor de 2 000 000 de personas sobre 51 000 000) se considera de cultura o religión musulmana (practicante o no), con máximos entre el 6 y el 7% en Alemania y Francia (1 000 000 sobre 150 000 000). Se trata de una minoría sustancial, por cierto menos importante que en la India (casi el 15% de la población), en el otro extremo del mundo árabe musulmán, pero mucho más significativa que en los Estados Unidos, donde el islam casi no existe (menos del 1% de la población, como en Europa Oriental).

Por suerte existen algunas sólidas recopilaciones de datos que permiten volver a encuadrar el debate, como la encuesta "Trajectoires et origines" [Trayectorias y orígenes], realizada por el INED. Los investigadores examinaron la vida de 300 inmigrantes procedentes de siete oleadas sucesivas, y la compararon con la de 200 descendientes y con la de franceses sin ascendencia extranjera. Los resultados dejan en evidencia una "integración asimétrica". Por un lado, los hijos de inmigrantes obtienen títulos educativos, encuentran cónyuges y amigos sin ascendencia migratoria y a menudo han dejado entre paréntesis la lengua de sus padres. Pero, por otro lado, permanecen más tiempo víctimas del desempleo y, para un grado de instrucción dado, no acceden a los mismos empleos que los

otros jóvenes. La asimetría es especialmente marcada cuando el origen es magrebí o africano.

El estudio realizado por Marie-Anne Valfort[53] permite detallar este diagnóstico y mostrar el alcance de la discriminación profesional que sufren las jóvenes generaciones de origen o confesión musulmana. Valfort demuestra también que lo que está en cuestión es la hostilidad hacia la religión musulmana. Por ejemplo, para un mismo origen libanés, el nombre "Mohammed" es descalificante, mientras que para los "Michel" la cosa va bien. Mencionar en el currículum una participación en los *scouts* musulmanes hace descender las tasas de respuesta, mientras que una experiencia con los *scouts* católicos o protestantes las hace subir. Los nombres judíos también son discriminados, pero a una escala tanto menor que los musulmanes.

¿Cabe hablar de islamofobia? Claro que los empleadores no creen que estos millones de jóvenes sean violadores o yihadistas en potencia. Pero existen poderosos prejuicios negativos, que los acontecimientos recientes reforzaron, y que como contrapartida generan frustración y resentimiento.

Frente a esta flagrante injusticia, Valfort propone una política explícita de discriminación positiva. La idea no es absurda y se implementó en otros países: la India aplica cupos de empleo a las castas más desfavorecidas (pero no a los musulmanes, a quienes, sin embargo, se discrimina); los Estados Unidos también lo intentaron con la minoría afroamericana (aunque no lo hicieran con igual magnitud o compromiso). En la coyuntura europea actual, cabe temer que una política similar perjudique más de lo que ayude. En cambio, ya es tiempo de aplicar con mayor firmeza las leyes antidiscriminatorias; si fuera necesario, habrá que recurrir al currículum aleatorio y aplicar penas ejemplares.

También hay que recordar algo: la histeria actual proviene de la conjunción de la crisis de los refugiados y la gestión calamitosa de la crisis financiera de 2008 por parte de Europa. Entre 2000 y 2010, Europa integraba a un flujo neto de un millón de inmigrantes por año, el desempleo bajaba y la extrema derecha retrocedía. De pronto, en 2015 el flujo se redujo y llegó a ser un tercio de lo que era en 2010, cuando las necesidades incluso aumentaban. Es tiempo de que Francia y Alemania propongan una renovación de Europa y de su modelo de integración. Esto implica una moratoria para las deudas y una inversión masiva en infraestructura y educación. De otra manera, las pulsiones xenófobas pueden llevárselo todo.

[51] El atentado en París más reciente a la fecha de publicación de esta crónica es el del 13 de noviembre de 2015: una cadena de ataques terroristas en los cuales murieron 137 personas y otras 415 resultaron heridas. La serie incluyó un tiroteo en el restaurante Le Petit Cambodge, otro en el teatro Bataclan, con al menos 100 rehenes, y una explosión en una *brasserie* cercana al Estadio de Francia. La autoría de los ataques fue reivindicada por la organización yihadista Estado Islámico. [N. de E.]

[52] En la noche del 31 de diciembre de 2015, se registraron en Colonia, Alemania, cientos de agresiones sexuales y robos a mujeres. Se calculó la presencia de más de mil atacantes, a quienes se describió como "norafricanos o árabes", lo que desató un debate en la sociedad europea sobre los supuestos riesgos del asilo a refugiados. [N. de E.]

[53] Véase la crónica "La hipocresía francesa de cara al laicismo y la desigualdad".

La hipocresía europea frente a los paraísos fiscales: *LuxLeaks* y *Panama Papers*

12 de abril de 2016

Los paraísos fiscales y la opacidad financiera ocupan desde hace años un lugar destacado en las primeras planas de los diarios. Por desgracia, en este ámbito existe una brecha abismal entre las proclamas victoriosas de los gobiernos y sus verdaderas acciones. En 2014, la investigación *LuxLeaks* revelaba que las multinacionales casi no pagaban impuestos en Europa gracias a sus filiales en Luxemburgo.[54] En 2016, los *Panama Papers* muestran el alcance de las operaciones de disimulo patrimonial realizadas por las élites financieras y políticas de norte y sur. Podemos alegrarnos de que los periodistas cumplan con su trabajo. El problema es que los gobiernos no realizan el suyo. A decir verdad, casi nada se ha hecho desde la crisis de 2008. En algunos aspectos, las cosas incluso han empeorado.

Vayamos en orden. Sobre la imposición a los beneficios de las grandes empresas, la competencia fiscal exacerbada alcanzó nuevos niveles máximos en Europa. El Reino Unido se prepara para reducir su tasa a un 17% –algo nunca visto en un país grande–, mientras también protege las prácticas predatorias utilizadas en las Islas Vírgenes y otros sitios *offshore* de la corona británica. Si no se hace algo, entonces todos terminarán por alinearse en el 12% de Irlanda, incluso el 0%, o hasta en subsidios a las inversiones como ya sucede a veces. Mientras tanto, en los Estados Unidos, donde existe un impuesto federal a las ganancias, la tasa es del 35% (sin contar el impuesto de los Estados, que oscila entre el 5 y el 10%). La fragmentación política de Europa y la ausencia de un poder público fuerte nos ponen a merced de los intereses privados. La buena noticia es que es posible salir de la *impasse*. Si los cuatro países (Francia, Alemania, Italia y España) que reúnen más del 75% del PBI y de la población de la zona euro

propusieran un nuevo tratado fundado en la democracia y la justicia fiscal, con un impuesto común a las grandes empresas como medida fuerte, entonces los otros países se verían obligados a seguirlos, a menos que prefieran quedarse fuera del esfuerzo de transparencia que las opiniones públicas reclaman desde hace años y exponerse a sanciones.

Respecto de los patrimonios privados depositados en paraísos fiscales, allí también se da siempre la mayor opacidad. Desde 2008, en distintos lugares del planeta, las mayores fortunas crecieron tanto más rápido que la economía, en parte porque pagan menos impuestos que los demás. En Francia, un ministro a cargo del Presupuesto[55] explicó de lo más campante en 2013 que no poseía cuenta alguna en Suiza, sin temor de que su gobierno mismo lo supiera, y otra vez fue necesario que los periodistas descubrieran la verdad.

Las transmisiones automáticas de informaciones sobre los activos financieros, aceptadas por Suiza en forma oficial y aún hoy rechazadas por Panamá, supuestamente resolverían el asunto en el futuro. Sin embargo, sólo comenzarán a aplicarse con timidez a partir de 2018, con excepciones flagrantes, como sucederá con los títulos cuyos tenedores sean intermediarios de *trusts* o fundaciones, y esto sin multas previstas para los países renuentes. En otras palabras, seguimos viviendo en la ilusión de que se arreglará el problema gracias a las buenas voluntades, sólo con solicitarles de buena manera a los paraísos fiscales para que empiecen a portarse bien. Urge acelerar el proceso e implementar duras sanciones comerciales y financieras a los países que no respeten las reglas estrictas. No nos engañemos: una sola aplicación reiterada de dichas sanciones ante el menor incumplimiento (y claro que los habrá, incluso con nuestros queridos vecinos suizos y luxemburgueses) establecerá la credibilidad del sistema y permitirá salir del clima de opacidad e impunidad generalizada que impera hace décadas.

Al mismo tiempo hay que establecer un registro unificado de los títulos financieros, lo que implica tomar el control público de los depositarios centrales (Clearstream y Eurostream en Europa; Depository Trust Corporation en los Estados Unidos), tal como demostró Gabriel Zucman.[56] Para dar credibilidad al sistema, podemos también instaurar sobre estos activos un derecho de registro común, cuya recaudación podría financiar las investigaciones para preservar un bien público mundial (como lo es el clima).

Queda una pregunta: ¿por qué los gobiernos hicieron tan poco desde 2008 para luchar contra la opacidad financiera? La respuesta breve es que se generaron la ilusión de que no necesitaban actuar. Sus bancos centrales emitieron la suficiente cantidad de moneda como para evitar el colapso absoluto del sistema financiero, y así eludieron los errores que, luego de 1929, llevaron al mundo al borde del abismo. Resultado: en efecto, evitamos la depresión generalizada, pero de paso nos eximimos de realizar reformas estructurales, normativas y fiscales que resultan indispensables.

Nos tranquilizaría observar que el balance de los grandes bancos centrales (que pasó del 10 al 25% del PBI) sigue siendo exiguo con respecto al conjunto de los activos financieros que los actores públicos y privados poseen unos sobre otros (alrededor del 1000% del PBI, incluso un 2000% en el Reino Unido), y podría aumentar en caso de necesidad. En verdad, esto muestra en especial la hipertrofia persistente de los balances privados y la extrema fragilidad del sistema. Esperemos que el mundo comprenda las lecciones de los *Panama Papers* y enfrente la opacidad financiera sin que tenga que haber una nueva crisis.

---

[54] Véase nota 5. [N. de E.]
[55] Se refiere a Jérôme Cahuzac, caso que retoma en la crónica "Por un núcleo duro europeo". [N. de T.]
[56] Véanse comentario del autor y nota 41. [N. de E.]

Por otra globalización

12 de noviembre de 2016

Digámoslo desde un comienzo: el triunfo de Donald Trump se explica ante todo por el estallido de las desigualdades económicas y territoriales en los Estados Unidos de varias décadas a esta parte, más la incapacidad de los sucesivos gobiernos para afrontarlo. En sus respectivos períodos, Clinton y Obama a menudo no hicieron otra cosa que acompañar el movimiento de liberalización y sacralización del mercado, que dio sus primeros pasos bajo Reagan y (más tarde) Bush padre e hijo. Eso sucedió cuando no lo exacerbaron, como con la desregulación financiera y comercial efectuada bajo Clinton. Las sospechas de cercanía con la banca financiera y la incapacidad de la élite político-mediática demócrata para asimilar las lecciones derivadas del voto a Bernie Sanders hicieron el resto. Hillary ganó por escasísimo margen el voto popular; pero la participación de los más jóvenes y de los más modestos era muy escasa para ganar los Estados clave.

Lo más triste es que el programa de Trump no hará sino afianzar las tendencias en dirección a la desigualdad: se dispone a suprimir el seguro médico trabajosamente concedido bajo Obama a los asalariados pobres, y a embarcar a su país en una huida hacia delante en pleno *dumping* fiscal, al reducir de un 35% original a un 15% la tasa del impuesto federal sobre las rentas societarias, mientras que hasta el día de hoy los Estados Unidos se habían resistido a esta interminable y frenética carrera contra el tiempo surgida en Europa. Ni toma en cuenta que el creciente componente étnico del conflicto político estadounidense da pie a malos augurios para el futuro si no se llega a nuevos acuerdos: así, vemos a un país donde estructuralmente un 60% de la mayoría blanca vota por un partido, mientras que un 70% de las minorías vota por el otro, y donde la mayoría va en

camino a perder su superioridad numérica (un 70% de los sufragios emitidos en 2016, contra un 80% de 2000, y un 50% de aquí a 2040).

La principal lección para Europa y para el mundo es clara: urge reorientar los fundamentos de la globalización. Los principales desafíos de nuestra época son el auge de las desigualdades y el calentamiento global. Por eso hay que poner en vigencia tratados internacionales que permitan dar respuesta a dichos desafíos y promover un modelo de desarrollo equitativo y duradero. De ser necesario, los acuerdos de ese nuevo tipo pueden incluir medidas que apunten a facilitar los intercambios. Sin embargo, su meollo no debe ser la cuestión de la liberalización del comercio. Este debe volver a ser lo que nunca debería haber dejado de ser: un recurso al servicio de objetivos más elevados. Concretamente, hay que dejar de firmar acuerdos internacionales que reduzcan derechos aduaneros y otras barreras comerciales sin incluir a la vez, y ya en los primeros artículos de esos tratados, reglas cuantificadas y de cumplimiento efectivo que permitan luchar contra el *dumping* fiscal y climático; por ejemplo, tasas mínimas comunes de imposición sobre las rentas societarias y cotas verificables y sancionables de emisiones de carbono. Ya no es posible negociar tratados de libre intercambio a cambio de nada.

Desde esta perspectiva, como tratado, el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG –o CETA, por sus iniciales en inglés–) pertenece a otra época, y debe ser rechazado. Consiste en un tratado estrictamente comercial, que no incluye medida vinculante alguna acerca del plan fiscal o climático. En cambio, trae una sección completa acerca de la "protección a los inversores" que permite a las multinacionales llevar a los Estados ante tribunales arbitrales privados, eludiendo los recintos públicos con potestad sobre todas y cada una de las personas jurídicas. El marco normativo propuesto es notoriamente insuficiente, en especial respecto de la cuestión clave de la remuneración de los jueces árbitros, y suscitará desvíos de todo tipo. En el momento mismo en que el imperialismo jurídico estadounidense redobla su intensidad e impone sus reglas y sus tributos a nuestras iniciativas, este debilitamiento de la justicia pública es una aberración. Por el contrario, la prioridad debería ser constituir un poder público fuerte, con la puesta en funciones de un procurador general y una fiscalía europeos capaces de hacer que sus decisiones sean respetadas.

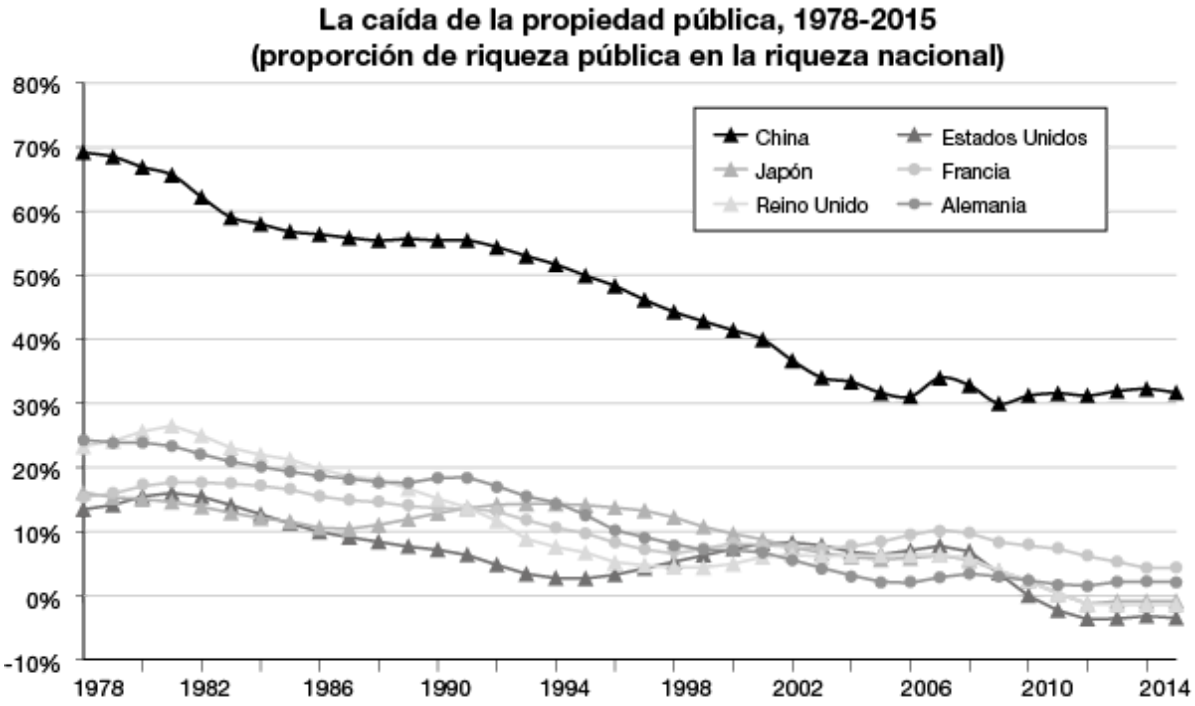
¿Y qué sentido tiene firmar, dentro del marco de los acuerdos de París, un objetivo puramente teórico –limitar el calentamiento a 1,5 ºC, lo que

requeriría dejar en el suelo hidrocarburos tales como los surgidos de las arenas bituminosas de Alberta, cuya explotación acaba de relanzar Canadá– y unos meses después cerrar un acuerdo comercial realmente vinculante que ni siquiera menciona esta cuestión? Un tratado equilibrado entre Canadá y Europa, uno que apunte a promover una asociación de desarrollo equitativo y durable, debería comenzar por especificar los objetivos respecto de las emisiones de cada uno y los compromisos concretos para lograrlos.

En cuanto al *dumping* fiscal y a las tasas mínimas de imposición sobre las rentas societarias, desde luego sería cuestión de un cambio completo de paradigma para Europa, que se construyó como una zona de libre comercio sin regla fiscal común. Pese a todo, ese cambio es indispensable: sin él, ¿qué sentido tiene ponerse de acuerdo acerca de una base de imposición común (que de momento es el único proyecto en que Europa tuvo un leve avance) si cada país después puede fijar una tasa casi nula y atraer a todas las empresas para que se radiquen allí? Es hora de cambiar el discurso político acerca de la globalización: el comercio es buena cosa, pero de todos modos el desarrollo durable y equitativo requiere servicios públicos, infraestructuras, sistemas educativos y sanitarios, que de por sí generan la necesidad de impuestos equitativos. Si esto no se consigue, el trumpismo lleva las de ganar.

Capital público, capital privado

11 de marzo de 2017



Proporción de riqueza pública neta (= activos públicos - deuda pública) en la riqueza nacional neta (= privada + pública).

Fuente: Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, "Global inequality dynamics: New findings from WID.world", NBER Working Paper, 2017. Acerca de China: Thomas Piketty, Li Yang y Gabriel Zucman, *Capital Accumulation, Private Property and Rising Inequality in China, 1978-2015*, WID.world Working Paper Series nº 2017/7, 2017. Acerca de otros países: Thomas Piketty y Gabriel Zucman, "Capital is back: Wealth-income ratios in rich countries, 1700-2010", *Quarterly Journal of Economics*, vol. 129, nº 3, 2014, y actualizaciones de <WID.world>.

El debate económico actual está sobredeterminado por dos realidades que muy a menudo olvidamos correlacionar: el sólido crecimiento de la deuda

pública y la prosperidad de los patrimonios en manos de los propietarios privados. Del lado de la deuda pública, las cifras son bien conocidas: casi en todas partes, alcanza o supera el 100% del ingreso nacional (alrededor de un año de PBI), contra apenas el 30% en la década de 1970. Lejos de mí la idea de minimizar el alcance del problema: según lo observado, es el nivel de endeudamiento público más alto desde la Segunda Guerra Mundial, y la experiencia histórica demuestra que semejante deuda resulta difícil de reducir con los medios usuales. Por eso mismo, para comprender acabadamente los dilemas y las alternativas, resulta esencial poner en perspectiva esta realidad en relación con la evolución de la estructura de la propiedad en su conjunto.

En síntesis: la totalidad de lo que un país posee puede deslindarse entre el capital público –es decir, la diferencia entre los activos públicos como edificios, terrenos, infraestructuras, portfolios financieros, participaciones en empresas, etc., en manos del poder público en sus diferentes expresiones: Estado, colectividades, etc.– y las deudas públicas, por un lado; y el capital privado –es decir, la diferencia entre los activos y las deudas de los hogares privados–, por el otro.

Durante los "Treinta Gloriosos",[57] los activos públicos eran de magnitud muy considerable (rondaban entre el 100 y el 150% del ingreso nacional, debido a la existencia de un sector público muy amplio resultante de las nacionalizaciones de posguerra), y bastante superiores a las deudas (de por sí, históricamente bajas: menos del 30% del ingreso nacional, después de la inflación, las anulaciones de deudas y las quitas excepcionales al capital privado del decenio 1945-1955). En total, el capital público –neto de deudas– era ampliamente positivo, en un rango del 100% del ingreso nacional.

Desde los años setenta, la situación se transforma por completo. La oleada privatizadora que comienza hacia 1980 lleva a un estancamiento de los activos públicos en alrededor del 100% del ingreso nacional, pese al aumento de los precios en el mercado inmobiliario y bursátil. Al mismo tiempo, la deuda pública se acerca al 100% del ingreso nacional, de modo que el capital público neto llega casi a 0. En vísperas de la crisis de 2008, ya era negativo en Italia. Los últimos datos disponibles para el ejercicio 2015-2016 dejan patente que el capital público neto se vuelve negativo en los Estados Unidos, en Japón y en el Reino Unido. En estos países, la venta del

total de los activos públicos no bastaría para cancelar la deuda. En Francia y en Alemania, el capital público apenas si es positivo.

Sin embargo, eso no significa que los países ricos se hayan vuelto pobres: los empobrecidos son sus gobiernos, lo que es muy diferente. De hecho, al mismo tiempo, los patrimonios privados –netos de deudas– avanzaron de modo espectacular. En los años setenta representaban el 300% del ingreso nacional, mientras que en 2015 alcanzan o superan el 600% en todos los países ricos.

Esa prosperidad de los patrimonios privados tiene múltiples causas: alzas en los precios en el sector inmobiliario (efecto de la aglomeración en las grandes metrópolis), envejecimiento de la población y mengua de su crecimiento (lo que automáticamente incrementa el ahorro acumulado en el pasado con relación al ingreso actual y contribuye a una inflación en el precio de los activos), y desde luego también la privatización de activos públicos y el crecimiento de la deuda (que de un modo u otro está en manos de los propietarios privados, bancos mediante). Cabe añadir los muy consistentes rendimientos obtenidos por los patrimonios financieros más altos (que en términos estructurales crecen más rápido que el tamaño de la economía mundial) y una evolución del sistema legal, globalmente muy favorable para los propietarios (privados), en cuanto a la propiedad inmobiliaria o intelectual. En todos los casos, el capital privado tuvo un progreso tanto más pronunciado que la baja del capital público, y los países ricos poseen el equivalente a su propia magnitud, e incluso un poco más (así, en vez de que en total los países ricos posean más activos financieros en el resto del mundo, sucede antes bien lo contrario).

De cara a semejante prosperidad privada, ¿por qué ese despliegue de pesimismo? Porque las correlaciones de fuerzas ideológicas y políticas no permiten al poder público obrar de modo que los principales beneficiados por la globalización tributen su justa cuota parte. Esta notoria imposibilidad de una base impositiva justa incita a una fuga hacia la deuda. La sensación de impotencia se ve reafirmada por la inédita amplitud de interdependencia financiera y patrimonial: cada país está en manos de sus vecinos, especialmente en Europa, y de eso se deriva una intensa sensación de que todo está fuera de control.

A lo largo de la historia, las grandes transformaciones en la estructura de la propiedad suelen ir a la par de profundas conmociones políticas. Lo notamos en la Revolución Francesa, la Guerra de Secesión estadounidense, las

guerras euro-mundiales del siglo XX, la Liberación [de los países que estuvieron bajo ocupación nazi]. Hoy en día, la acción de las fuerzas nacionalistas podría desembocar en un retorno a las monedas nacionales y a la inflación, lo que propiciaría ciertas redistribuciones más o menos caóticas, a expensas de una violenta y angustiosa tensión social y de una etnicización del conflicto político. De cara a este mortífero riesgo al cual conduce el *statu quo* actual, sólo queda una solución: trazar una vía democrática que permita salir de este atolladero y, dentro del marco del estado de derecho, organizar las redistribuciones necesarias.[58]

---

[57] Véase nota 36. [N. de T.]

[58] El gráfico inicial, tomado de <piketty.pse.ens.fr/files/ACPSZ2017NBERWP.pdf>, también fue tema de mi crónica "De l'inégalité en Chine", disponible en <piketty.blog.lemonde.fr/2017/02/14/de-linegalite-en-chine>. Tanto los datos en formato xlsx como las actualizaciones figuran en <WID.world>.

¡CIUDADANOS, A LAS URNAS!

Crónicas del mundo actual

THOMAS PIKETTY

siglo veintiuno editores